

Carlos Illades
*Breve historia
de Guerrero*



Fideicomiso Historia de las Américas
Serie Breves Historias de los Estados de la República Mexicana

Carlos Illades

Breve historia de Guerrero

La historia guerrerense está atravesada por varias líneas marcadas y durables: la primera es su carácter de periferia activa dentro del conjunto nacional; otra es su secular atraso económico; una más es la persistente movilización popular; se agrega a ellas la inestabilidad política que se remonta al siglo XIX, adentrándose en el actual. Excepción hecha del primer capítulo, que trata acerca de la historia suriana previa a la conformación de la entidad, los cuatro restantes de esta breve historia se ocupan de cada una de estas líneas.

Guerrero se fundó en 1849 con territorios de los estados de México, Michoacán y Puebla. En la década siguiente, Juan N. Álvarez levantó el Sur contra la dictadura santannista y abrió la puerta para el arribo de la generación de la Reforma al poder. A lo largo de su vida pública fue factor de contención de las fuerzas políticas y sociales surianas, interlocutor del gobierno nacional y mediador en las disputas locales. Vicente Jiménez, de la montaña, Diego Álvarez, de la costa, y Canuto A. Neri, del centro, fueron las tres cabezas que surgieron tras su muerte.

Jiménez y Álvarez vivieron enfrentados y se alternaron las riendas guerrerenses. Neri desafió incluso los designios de Porfirio Díaz y acabó perdiendo la vida. Díaz, por su parte, canceló la autonomía del territorio sureño al imponer a los gobernadores y, si bien logró dominar el

(pasa a la segunda solapa)

Comentarios y sugerencias:
editor@fce.com.mx

SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA

FIDEICOMISO HISTORIA DE LAS AMÉRICAS

*Serie Breves Historias de los Estados
de la República Mexicana*

Coordinada por
ALICIA HERNÁNDEZ CHÁVEZ
Coordinador adjunto
MANUEL MIÑO GRIJALVA

Breve historia de Guerrero

CARLOS ILLADES

BREVE HISTORIA DE GUERRERO



EL COLEGIO DE MÉXICO
FIDEICOMISO HISTORIA DE LAS AMÉRICAS
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
MÉXICO

Primera edición, 2000

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra
—incluido el diseño tipográfico y de portada—,
sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico,
sin el consentimiento por escrito del editor.

D. R. © 2000, FIDEICOMISO HISTORIA DE LAS AMÉRICAS
D. R. © 2000, EL COLEGIO DE MÉXICO
Camino al Ajusco, 20; 10740 México, D. F.

D. R. © 2000, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14200 México, D. F.
www.fce.com.mx

ISBN 968-16-5975-9

Impreso en México

LLAMADA GENERAL

ESTA SERIE de Breves Historias de los Estados de la República Mexicana, que entregan a la opinión pública dos instituciones culturales de gran prestigio, obedece al propósito de dar a conocer la vida y milagros del México plural y desconocido, o si se quiere, de los múltiples estilos de vida que se juntan en una nación cinco centenaria, ahora de dos millones de kilómetros cuadrados y noventa millones de habitantes.

Como es del dominio común, constituyen al llamado México plural de fines del siglo xx: 32 unidades político-administrativas muy mentadas, 56 etnias indígenas que tienden a desaparecer, 200 regiones o cotos económicos y 2 400 comunidades que reciben los nombres de municipios, patrias chicas, terruños o matrias. Las etnias, generalmente pobres y al margen del desfile nacional, reciben la atención de antropólogos y demás científicos sociales. Las regiones rara vez se vuelven interesantes para los estudiosos de la vida económica. De los municipios se ocupan muchas veces cronistas improvisados y sentimentales y muy pocos historiadores con título. De los estados, hay numerosas monografías que suelen ser frutos de la impovtsación, las prisas y los gustos políticos, que no del espíritu de objetividad y otras cositas.

Los volúmenes de la colección que aquí y ahora lanza el Fondo de Cultura Económica y El Colegio de México se proponen recoger historias profesionales, hechas con rigor científico y simpatía y escritas sin bilis y en el lenguaje de la tribu. El elenco de autores está formado por profesionales de la historia u otra ciencia social, oriundos y vecinos del estado que estudian y escritores de obras serias y legibles.

La doctora Alicia Hernández Chávez, al frente del elenco autor, con sabiduría, gracia y cuchillito de palo, ha conseguido

reunir una treintena de textos de dimensiones decentes, de alrededor de 200 páginas cada uno, bien documentados, que narran, definen y ubican los sucesos históricos de que se ocupan y que logran mantener despiertos y aun regocijados a sus lectores.

Es normal que la gran mayoría de las entidades políticas llamadas estados se ocupen de las llegadas y salidas de gobernadores, de golpes y pactos entre políticos, de disputas por el poder y acciones administrativas del gobierno estatal. En el caso presente se agregan a pensamientos y conductas políticas —no sólo para estar a la altura de los tiempos que corren— acaeceres ambientales, económicos y de cultura. En definitiva, se proponen historias que abarcan todos los aspectos de la vida: la globalidad de las sociedades investigadas.

Aquí se juntan historias de estados diferentes, hechas con el mismo patrón metodológico y dirigidas a todos los públicos locales. Se ha partido de la seguridad de que los pobladores de cada estado quieren saber las virtudes y las proezas de su entidad federativa y los vicios y desgracias de los estados vecinos. Se esperan lectores que ya han superado la etapa de la letra que se adquiere con sangre, que piden diversión en la lectura. También aspira a servir de buen modo a niños, adolescentes y jóvenes enclaustrados en escuelas, colegios y universidades.

LUIS GONZÁLEZ

Para
BERENICE AGUIAR Y GUSTAVO ILLADES

PREFACIO

LOS HOMBRES Y MUJERES DEL SUR contribuyeron decisivamente a la independencia nacional, a la construcción de la modernidad decimonónica y, en general, al proceso histórico mexicano; sin embargo, Guerrero es a la fecha uno de los espacios geográficos más pobres, atrasados y castigados de la República.

Vista en el tiempo largo, su historia está atravesada por varias líneas marcadas y durables: la primera es su carácter de periferia activa dentro del conjunto nacional; otra es su secular atraso económico; una más es la persistente movilización popular. Se agrega a ellas la inestabilidad política —producto quizá de la combinación del atraso económico, la desigualdad social y de un sinuoso proceso de constitución del Estado—, que se remonta al siglo XIX y se adentra en el actual.

A excepción del capítulo I, que trata de la historia suriana antes de la conformación de la entidad, los cuatro restantes de esta *Breve historia de Guerrero* se ocupan de cada una de estas líneas. Al final se encontrarán una cronología y una bibliografía comentada. Su objetivo es poner en manos de un público amplio una síntesis del complejo proceso histórico guerrerense, que sea un instrumento útil para comprenderlo y sirva también para captar algunas claves con las cuales orientarse en el difícil presente.

Agradezco al Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana el respaldo y las facilidades con que conté para escribirlo. Estoy en deuda con los doctores Alicia Hernández y Manuel Miño, por sus sugerentes comentarios, y con María Esther Reyes Duarte, por su apoyo en la investigación. Dejo al juicio de los lectores el balance de sus aciertos, errores y carencias.

Iztapalapa, diciembre de 1998

I. EL SUR ANTES DE SER GUERRERO

EL TERRITORIO DEL ACTUAL estado de Guerrero estuvo poblado desde mucho antes de la llegada de los españoles. Varias de las más importantes culturas precolombinas dejaron su huella en él. Durante la época colonial, algunas de sus regiones se vincularon con las economías más pujantes, que florecían al otro lado del océano o en lugares tan alejados como Filipinas, a través de las triangulaciones comerciales establecidas por el Imperio español. La Guerra de Independencia impulsó el Sur hacia el resto de la nación, dada su enorme presencia como escenario de la lucha armada. Esta tendencia se consolidó en la guerra contra los Estados Unidos y se acentuó todavía más con la Revolución de Ayutla, que acabó con la dictadura de Antonio López de Santa Anna y abrió el terreno a la reforma liberal. Para estas fechas, el espacio suriano existía ya como entidad propia y a la vez constituyente de la República. Todo ello justifica el dar un breve repaso a estos cientos de años de historia en los que el Sur aún no era Guerrero.

ÉPOCA PREHISPÁNICA

Desde el virreinato mismo comenzó el interés por conocer el pasado precolombino. Sacerdotes y misioneros fueron los primeros que se dieron a la tarea de rescatar las antigüedades indígenas y aproximarse a su cultura, aun si la consideraran pagana. Los frailes Bernardino de Sahagún y Diego de Landa adentraron en esta ruta. Después vendrían Carlos de Sigüenza y Góngora y Lorenzo Boturini.

La Ilustración europea fue profundamente hostil hacia el pasado indígena. En contrapartida, esta actitud motivó una fuerte exaltación de lo autóctono por parte de la intelectualidad criolla, que

tuvo en el veracruzano Francisco Javier Clavijero a uno de sus principales exponentes, quien en su *Historia antigua de México* trató tanto el medio geográfico americano como la historia y cultura precolombinas.

Ignacio Bernal apunta en su *Historia de la arqueología en México* que la veta nacionalista de la obra de Sigüenza y Góngora aparece desarrollada en la visión histórica de Clavijero, tan asombrado por los logros culturales de la civilización mesoamericana. Dentro de la misma línea interpretativa se inscribieron los estudios de Juan José Eguiara y Eguren y José Antonio de Alzate.

Durante el siglo XIX se sumarían los trabajos de los viajeros extranjeros que visitaron, exploraron, explotaron y dibujaron las ruinas arqueológicas mesoamericanas. Estudiosos y autoridades mexicanas fundaron en 1825 el Museo Nacional, que, después de estar largo tiempo en la calle de Moneda, en 1964 se trasladó en definitiva a Chapultepec. Actualmente lleva el nombre de Museo Nacional de Antropología e Historia.

En el porfiriato, Leopoldo Batres excavó, rescató, destruyó y rehizo monumentos prehispánicos en zonas tan importantes como Teotihuacan y Mitla. Estos años fueron importantes para la arqueología guerrerense, cuyo punto de partida son las exploraciones realizadas por William Niven, el cual viajó por el Balsas medio, Xalitla, Xochipala, Yesta, El Naranjo y Zumpango del Río. El recorrido consta en sus diarios y publicaciones. Algunos de sus hallazgos aún se pueden contemplar en el Museo de Historia Natural de la ciudad de Nueva York.

Los mexicanos José García Payón, Pedro R. Hendrichs Pérez y Miguel Covarrubias realizaron sus propias pesquisas durante la segunda Guerra Mundial. Hendrichs Pérez, agente viajero y arqueólogo aficionado, dejó nota de algunas de sus indagaciones en el libro titulado *Por tierras ignotas. Viajes y observaciones por la región del río Balsas*, publicado en 1946. Covarrubias, estudioso de la cultura de Mezcala, documentó la presencia olmeca en la entidad. Vendrían también los trabajos de campo de Robert H. Barlow, Roberto J. Weitlaner, Pedro Armillas, Robert H. Lister, Ignacio Bernal y, más recientemente, los de Paul Schmidt y Jaime Litvak.

No obstante estas investigaciones, hay un consenso entre los especialistas sobre las grandes lagunas que faltan por llenar; por ejemplo, no se ha definido aún a qué área cultural pertenece Guerrero, es decir, si forma parte del Occidente, como se sostenía hace algunas décadas, o si la porción mayor de su superficie actual se inscribe en Mesoamérica. Los estudios de los últimos años apuntan más en esta segunda dirección, si bien acotan que este juicio es relativo de la zona y la época de que se trate. Así, todavía no se incluye al Guerrero precortesiano en las historias generales de Mesoamérica.

Como escribió Eric Wolf en *Pueblos y culturas de Mesoamérica*, esta área cultural padeció la dispersión de los pueblos que la formaban; pero, cuando ha logrado superarla y establecer un sistema integrado, el punto de unión siempre ha sido un poder situado en el altiplano central. Las hegemonías teotihuacana, tolteca y mexica no hacen sino ilustrar su afirmación. Sin embargo, como en Mesoamérica no hubo grandes obras hidráulicas como las que se construyeron en Mesopotamia, el valle del Nilo, China o Perú, esta situación atemperó el despotismo de las formas de control político, a pesar de tratarse de una sociedad agraria dependiente en gran medida del acceso a una agua no muy abundante.

Veinte mil años tardó el hombre en poblar el continente americano y, en Mesoamérica, tuvieron que transcurrir 9 500 años para que se transformara de cazador de fauna mayor y de recolector en agricultor, cuando domesticó el maíz, 3 500 o 3 000 años antes de la era cristiana. Cinco formas de cultivo fueron las principales: la de terraza, la siembra de terrenos de fondo húmedo, las chinampas, las sustentadas en la irrigación y el sistema de roza.

Cerca de Acapulco hay rastros de cerámica pox, de una antigüedad de 5 000 años, que es indicativa del tránsito de economías sustentadas en la apropiación de los recursos naturales a otras basadas en la producción de bienes de consumo. Durante el periodo Preclásico, que corre aproximadamente entre el año 2500 a.C. y el 200 d.C., en la Costa Grande se elaboraron figurillas al pastillaje y en Mezcala se perfeccionó la escultura lítica.

La olmeca fue la cultura madre de la civilización mesoamericana, el equivalente americano de los sumerios, como escribió Jacques Soustelle. Su núcleo se desarrolló en los actuales estados de Tabasco y Veracruz, pero también extendió su presencia al valle de México, como se observa en la necrópolis de Tlatilco, al área maya, donde su influencia fue notablemente menor, y a la costa del Pacífico. Prueba de ello es que en territorio guerrerense se localizan las únicas pinturas olmecas de que se tiene noticia, situadas en el interior de las grutas de Juxtlahuaca y Oxtotitlán. Algunos arqueólogos consideran que las figurillas de Xochipila acusan ese origen. También hay objetos olmecas en la Costa Grande, Zumpango del Río y en los límites con Puebla y Morelos.

En el altiplano central, la cultura más significativa del periodo clásico —que va probablemente del 200 d.C. al 900— fue la teotihuacana, primera en Mesoamérica en ostentar un carácter urbano, como lo tuvieron las civilizaciones mesopotámica y egipcia. Teotihuacan, situado en un punto estratégico entre los valles de México y Puebla, fue a la vez centro religioso, político, administrativo y económico (dado que poseía un mercado importante). La arquitectura de la urbe revela una sociedad compleja, en la que coexistían sacerdotes, alta burocracia, jefes militares, artesanos y colonias extranjeras. De acuerdo con los descubrimientos realizados por René Millon, hacia 750 d.C. la ciudad fue saqueada e incendiada.

Los arqueólogos consideran que en Guerrero hay pocos elementos de la cultura teotihuacana, como el uso arquitectónico del talud y el tablero, pero que son importantes. En Chilpancingo se han encontrado estas estructuras arquitectónicas y en Acapulco, Costa Grande, el Balsas medio y Placeres del Oro se ha localizado cerámica teotihuacana. Las estelas 1 y 2 de Tepecuacuilco, guardadas en el Museo Nacional de Antropología e Historia, muestran personajes ricamente ataviados, colocados en sentido vertical, con los pies acomodados en una sola línea y las puntas hacia fuera y calzados con lujosas sandalias. Se cree que son la representación de Tláloc y Chalchiuhtlicue. La influencia

teotihuacana también se aprecia en Tlapa, dado que los tlapanecos fueron el único pueblo mesoamericano que compartió con Teotihuacan la cuenta calendárica de dos a 14.

Las relaciones del espacio suriano con las culturas del altiplano central continuaron durante el horizonte histórico. En 1426, la muerte de Tezozómoc, señor de Azcapotzalco, propició un conflicto dinástico que afectó las relaciones políticas entre los señoríos asentados en el altiplano. Maxtla, que se alzó con el poder después del conflicto, pretendió intensificar el dominio tepaneca sobre los demás pueblos del centro de México, pero sólo los impulsó a coligarse para enfrentarlo. Así, Itzcóatl, rey tenochca sucesor de Chimalpopoca, Nezahualcóyotl, rey de Texcoco, y el señorío de Tlacopan integraron la alianza.

La nueva fuerza, mediante varios movimientos articulados, logró vulnerar los baluartes tepanecas y sitiar su capital. Narra Nigel Davies que, después de más de 110 días de acoso, la población de Azcapotzalco estaba hambrienta y desesperada. Maztla, que comandaba la defensa, trató de romper el cerco, pero cayó a consecuencia de un golpe en la cabeza. Éste fue el final de la batalla, pues el resto de su contingente armado huyó.

Tras la victoria sobre los tepanecas quedó constituida formalmente la Triple Alianza. Fue en ese momento cuando Itzcóatl adoptó el título de “señor de los culhuas”, en tanto que Nezahualcóyotl adquirió el nombre de “señor de los acolhuas” y el rey de Tlacopan se hizo llamar “señor de los tepanecas”. A pesar de la unión militar, cada uno de los señoríos era independiente y soberano. La alianza, que al principio solamente pretendía quitarse de encima el dominio de Azcapotzalco, alcanzó entonces un carácter ofensivo y expansionista que llevó a lugares remotos la presencia de sus miembros.

La Triple Alianza extendió sus dominios después de 1428. Empezó por someter a otros señoríos del valle de México. Posteriormente, sojuzgó Cuernavaca y Tula y realizó incursiones en el norte de Guerrero. Al paso del tiempo, Costa Grande, parte de Costa Chica, Chilapa y Tlapa fueron conquistados; grupos nahuas migraron a la región y seis de sus pueblos se convirtieron en tri-

butarios, como se aprecia en los códices: Tlachco (hoy Taxco), Tepecuacuilco (que en la época prehispánica abarcaba la zona central de la entidad), Cihuatlán (en la Costa Grande), Tlalcozautitlán, Quiauteopan y Tlapa, situados en el oriente.

Yopes y cuitlatecos no quedaron bajo su dominio, aunque, curiosamente, los mexicas adoptaron el culto a uno de sus dioses, Xipe Totec, el señor de los desollados y también deidad de los orfebres. Durante el reinado de Ahuízotl (1486-1502) fue sometida la mayor parte del territorio guerrerense. Las excavaciones realizadas en el Templo Mayor, en el centro histórico de la ciudad de México, han rescatado muchas piezas de procedencia guerrerense.

Antes de la conquista española, en gran parte de Guerrero se cultivaba maíz, frijol, calabaza, algodón, chile y cacao. Aunque predominaba por supuesto la agricultura de temporal, el riego se utilizaba en la cuenca del Balsas, en el oriente y en la costa, incluso con anterioridad al arribo de los mexicas. El riego permitió tributarles grandes cantidades de tejidos de algodón, además de maíz, chía, frijol y cacao. También recibían objetos de alfarería, copal, conchas marinas, barniz amarillo, jícaras, tomatillos, oro (rescatado de los ríos de la Costa Chica), turquesas y hachuelas de cobre.

Los estudios etnohistóricos de Danièle Dehouve han mostrado que el panorama lingüístico del Guerrero prehispánico era muy complejo. Hay pruebas de la presencia de los siguientes grupos lingüísticos: chontal (situado en la parte norte), tuzteco, cuitlateco (en la cuenca del Balsas), tlapaneco (al sur de la Sierra de Tlapa), tepuzteco (entre la costa y Tlacotepec), tlacihuitzeco, tisteco, coyutumateco, camoteco, texcateco, chumbia, amuzgo, ayacasteco, huehueteco, quauhteco, zapoteco y otros más.

EL VIRREINATO

Los españoles conquistaron pronto el territorio suriano. Para 1523 ya lo habían sometido casi en su totalidad. El primer

poblado que fundaron fue Zacatula, en aquel mismo año. Lugares como Atoyac, Tecpan, Coyuca de Catalán, Pungarabato y Tlapa, entre otros, fueron producto de la congregación de pueblos indios del siglo xvi. Al finalizar la época colonial había en el espacio suriano unas cuantas ciudades y pueblos de importancia, entre los que se contaban Taxco, Acapulco, Chilapa —fundada por los misioneros franciscanos en 1537— y Tepecoacuilco. Tixtla tenía una población escasa, lo mismo que Chilpancingo. El sur formaría parte de la Audiencia de México.

Esta dominación temprana no trajo una paz duradera. En 1531 estalló la rebelión de los yopes, la cual se prolongó cuatro años. Como vimos, estos indígenas también habían resistido la expansión mexicana. Los conquistadores no buscaban solamente apropiarse del territorio, sino que también ansiaban hacerse del oro y la plata que había en la Nueva España. Para dar marcha a la economía colonial requerían, en primer lugar, someter y organizar a la mano de obra indígena. Inicialmente siguieron dos caminos para alcanzar este propósito: reducirlos a la esclavitud o incorporarlos a una institución de carácter medieval, que surgió durante la guerra de reconquista española, la llamada “encomienda”, que obligaba a los indígenas a dar tributo en especie y a otorgar servicios personales.

De la misma forma que otras economías domésticas, la indígena carecía de grandes excedentes en productos, pero, por el contrario, poseía un gran volumen de brazos organizados a través de una débil división de tareas, oficios y especialidades. Cuando se requerían grandes obras, las autoridades recurrían al sistema laboral conocido como *coatéquiltl*, el cual permitía disponer de mucha mano de obra sin violentar el trabajo cotidiano de las comunidades, dado que sólo una parte de sus miembros se incorporaba a las tareas colectivas.

La esclavitud y la encomienda trastocaron este orden, ya que ambas supusieron el reparto individual de la población indígena, adjudicándose a cada capitán cierto número de poblaciones y de tributarios. El tributo no era una forma de exacción desconocida por los pueblos guerrerenses, pues los mexicanos lo habían

aplicado ya. La novedad introducida por los españoles consistió en la modificación de su monto, periodicidad y naturaleza. A partir de entonces, ya no se trataría de bienes de consumo elaborados únicamente para ser usados, sino de productos hechos para su venta en el mercado.

Hay rastros de la encomienda en la Montaña de Guerrero, donde se instituyó en algunos de los lugares que habían sojuzgado los mexicas. Tal fue el caso de las provincias de Tlapa y Olinalá. La primera, originalmente entregada a Hernán Cortés, aunque nunca reclamada por él, durante la mayor parte del siglo xvi estuvo dividida en tres partes: una integrada por la encomienda de Francisco Vázquez de Coronado y familia; otra más encomendada a Bernardino Vázquez de Tapia y familia y, la última, perteneciente a la Corona. De Tlapa se extraía oro en polvo, miel, cera, pescado y cacao. Por su parte, Olinalá, primera encomienda de Alonso de Aguilar, proveía de cobre, miel, cacao y maíz.

Hacia mediados del siglo xvi, el tributo en especie entregado a los conquistadores se transformó en pagos en moneda de plata. Los pueblos indígenas guerrerenses se sumaron pronto a este proceso. Tuzantla hizo esta conversión en 1548; Asuchitlan, en 1549; Tlacozautilán y Teulistaca, en 1551; Taxco y Tlapa, al año siguiente. Después siguieron Nexpa, Igualtepec, Ixcateopan, Zacualpa y Ayochochiquizala. Al final vinieron Coyuca y Guayameo.

En todo el territorio novohispano, la población indígena fue diezmada no tanto por la brutalidad de la conquista, sino por enfermedades traídas por los europeos y nunca vistas en el Nuevo Mundo. Si de por sí en la segunda mitad del siglo xvi la población autóctona tendía a decrecer, lenta pero constantemente, las grandes epidemias ocurridas en 1545-1546 y 1576-1579 la menguaron en forma drástica. Algunos datos que hay para la Costa Chica ilustran el fenómeno: en Azoyú, entre 1519 y 1548, la población pasó de 10 000 a 228 tributarios; en Ayutla, de 10 000 a 120; en Colutla, de 20 000 a 80; en Ometepec, de 20 000 a 340, y en Igualapa, de 10 000 a 450. A pesar de ello, la presencia indígena todavía es significativa en algunas zonas de la entidad, en especial en la Montaña. Destacan los amusgos, los mixtecos y los

nahuas. En las costas, particularmente en la Costa Chica, hay una población negra, que con el tiempo ha llegado a cierto grado de mestizaje.

Para mediados del siglo xvii, según se aprecia en los estudios de Sherburne F. Cook y Lesley Byrd Simpson, quedaban aproximadamente un millón y medio de indígenas en el México central, a los que se sumaban alrededor de 300 000 negros, blancos y mezclas raciales. Será en el final de la centuria cuando la curva poblacional vuelva a ascender, aunque con una variante fundamental: el incremento de los grupos de población de las razas no indígenas y de las mezclas raciales.

Como consecuencia de la caída de la población indígena, las principales actividades económicas pasaron a manos de criollos y peninsulares. La producción se orientó más hacia el mercado interno, para satisfacer las crecientes demandas de los colonos, y el vínculo con la metrópoli sufrió un cambio estructural. Por su parte, la Corona reorganizó la asignación de la fuerza de trabajo y la encomienda fue sustituida por el llamado repartimiento forzoso de trabajadores, mediante el cual cada poblado debía entregar cierta cantidad de brazos a la semana. La economía natural indígena desapareció progresivamente y cedió su lugar a la economía de mercado. En 1632, el virrey Cerralbo suprimió este reparto, a excepción del que había en la minería, a la vez que legalizó el peonaje acasillado y la gañanería en el campo. Al menos formalmente, el trabajador forzado fue sustituido por una mano de obra libremente contratada. En esos años, en distintas regiones del país iniciaron su expansión la hacienda y el rancho.

El desarrollo de la economía novohispana provocó movimientos poblacionales hacia las zonas más dinámicas, que requerían mano de obra, lo que con el paso del tiempo hizo aumentar las mezclas raciales. Cuando comenzó a crecer la población, durante el siglo xvii, en el territorio suriano no sólo se contaban los indígenas; además, había pobladores negros, que fueron habilitados sobre todo para el trabajo en las haciendas mineras y agrícolas; los blancos, propietarios de éstas y de las minas, y también, lle-

gados de Filipinas, los mal llamados “chinos”, que se establecieron primero en Acapulco.

Gonzalo Aguirre Beltrán, en su clásico estudio etnográfico *Cuijla*, ha documentado la existencia de población afroamericana en el pueblo de Cuajinicuilapa, distrito de Abasolo. Esta población se estableció en la época colonial y tuvo contacto e intercambios culturales con los indígenas, habitantes originarios de la zona, y con los españoles, que habían traído a los africanos en calidad de esclavos.

Los negros se mezclaron sobre todo con los indígenas, dado que el Santo Oficio prohibía las uniones entre negros y peninsulares. No obstante el mestizaje, los afroamericanos asentados en Guerrero aún conservan rasgos fisonómicos y pautas culturales diferentes de los de los indígenas. Se consideran miembros del país, en tanto que entre los indígenas predomina la noción de comunidad. Montar a niños en las caderas de las madres o cargar grandes pesos en la cabeza son rasgos culturales de la población negra que se han preservado en la costa guerrerense.

Durante la época colonial, el territorio del actual estado de Guerrero tuvo contacto no sólo con la economía novohispana, sino también, a través de la mediación metropolitana, con los circuitos mercantiles de todo el mundo. En particular dos regiones y ramas económicas participaron en la economía mundial: el comercio en la costa de Acapulco y las minas de plata de Taxco. Por su parte, Iguala era el centro comercial que unía a la costa, los pueblos del Balsas, las minas y la ciudad de México. Al mismo tiempo, algunas regiones del sur abastecían de productos a los centros de población fundados alrededor de las actividades económicas más significativas. Otras zonas se mantuvieron ajenas a estos vínculos o establecieron nexos con territorios que después formarían parte de otros estados de la República, lo que influyó en el desarrollo desigual y poco armónico de las regiones guerrerenses.

El 30 de junio de 1532, Diego Hurtado de Mendoza partió de Acapulco para explorar el mar del sur. Esta fecha es considerada la de la fundación del puerto. Al poco tiempo desplazó a

Huatulco en el Pacífico cuando, en 1565, fue elegido como terminal americana de la línea de navegación que conectaba con Asia. Sin embargo, todavía hacia finales del siglo xvi, el alcalde mayor de la provincia residía en Acamalutla. El 1° de noviembre de 1799 le fue concedido el título de ciudad. La construcción y el mantenimiento del puerto requirieron mano de obra de otras regiones surianas.

Alexander von Humboldt, el gran geógrafo de la Ilustración europea, desembarcó en Acapulco en marzo de 1803, después de una travesía de 33 días iniciada en Guayaquil a bordo de la fragata *Orúe*. Le asombró el contraste entre los puertos de Veracruz, que conectaba el comercio trasatlántico con Sevilla, y de Acapulco: mientras el primero recibía al año entre 400 y 500 buques, el segundo, “uno de los puertos más hermosos del mundo conocido”, apenas recibía 10.

La actividad mercantil en el puerto guerrerense se reducía a la presencia del galeón de Manila, al cabotaje con las zonas costeras de Guatemala, San Blas y Zacatula y a los cuatro o cinco barcos que anualmente viajaban hacia Lima y Guayaquil. Humboldt atribuía el escaso tráfico naval de Acapulco a causas de orden geográfico e institucional: la enorme distancia que lo separaba de China, la apreciable dificultad que ofrecía remontar contra la corriente los vientos en la ruta hacia Perú —que hacía frecuentemente más difícil y largo este trayecto que el viaje de El Callao a Europa— y el monopolio comercial de la compañía de Filipinas.

Humboldt dejó en su *Ensayo político sobre el reino de la Nueva España* una rica y minuciosa descripción de la bahía de Acapulco. Según él, se asemejaba a una enorme concha granítica, de más de seis kilómetros de ancho, que tenía en medio una pequeña isla de nombre Roqueta. De granito estratificado y lechos inclinados irregularmente, estas costas peñascosas le parecían tan escarpadas que cualquier embarcación podría rebasarlas sin correr riesgo alguno, pues en todas partes había 10 o 12 brazas de fondo.

Los peñascos estaban deteriorados por la acción frecuente

de los terremotos, comunes en la zona y atribuidos muchos de ellos a la presencia de "volcanes submarinos". Las brisas le parecían flojas e interrumpidas por calmas muertas. Resumía su fascinación por el puerto al afirmar que "pocos sitios he visto en ambos hemisferios que presenten un aspecto más salvaje, y aun diré más lúgubre y romántico".

Los comerciantes fueron uno de los grupos sociales más poderosos durante la época colonial. El monopolio otorgado a los consulados formados por ellos les ofreció la oportunidad de amasar grandes fortunas. Sus capitales les permitieron controlar las exportaciones e importaciones que se hacían a través de los puertos. Todavía a principios del siglo XIX el comercio novohispano solía realizarse en fechas y lugares fijos. Gran parte de los intercambios mercantiles se efectuaba en mercados, semanales o mensuales, y en ferias anuales. Tal era el caso de la feria de Acapulco, que, junto con la de Xalapa, se contaba entre las más famosas de la época. En el puerto guerrerense atracó el célebre galeón de Manila durante un largo periodo que va de 1565 a 1821.

La nave, comandada por un oficial de la marina española, alcanzaba las 1 200 o 1 500 toneladas y se hacía a la mar a mediados de julio o principios de agosto de cada año. La travesía comenzaba en la punta más septentrional de la isla de Luzón y duraba entre tres y cuatro meses. El viaje era azaroso, dados los ataques de los corsarios ingleses y holandeses y también a causa de las tempestades. Transportaba muselinas, telas teñidas, camisas de algodón, seda cruda, medias de seda chinas, artículos de platería elaborados en Oriente, especias y perfumes. Todo ello a veces sumaba un valor cercano a los dos millones de pesos, lo que rebasaba con mucho el límite autorizado por la ley. El contrabando que introducía, cuantioso sin duda, socavaba el monopolio comercial metropolitano.

Tan pronto se avistaba la embarcación en las costas mexicanas, o ya fuera por los correos que enviaba desde Alta California, San Blas y otros lugares, el virrey notificaba a la población por medio de bandos el punto exacto donde arribaría y fijaba el tiempo de duración de la feria. En este momento entraban en

acción los comerciantes de todo el virreinato, en particular los de la ciudad de México. Se llenaba de personas la ruta de la capital hacia el puerto, que desde aquellos tiempos se hacía por el camino real, que pasaba por Cuernavaca y Chilpancingo. Trece días consumía el viaje. Las casas poderosas intentaban comprar todo el cargamento sin siquiera abrir los bultos y la economía local recibía una inyección de enormes recursos monetarios, gastados por los visitantes en alojamiento y comida. La insignificante población del puerto se duplicaba o triplicaba con el acontecimiento.

Barras de plata por un valor de un millón de pesos o más, grana cochinilla y pasajeros —miembros de las órdenes religiosas, cuerdas de presos, reclutas para el ejército— se embarcaban para el viaje de regreso, que se realizaba en febrero o marzo. Por tener vientos favorables, resultaba mucho más corto y agradable: duraba entre 50 y 60 días. A veces paraba en las islas Sándwich para abastecerse. También lo hacía en la isla de Guam, colonizada por los españoles, donde se proveía de tocino y carne de res.

Por su parte, las minas taxqueñas no eran conocidas en la época prehispánica. El propio Cortés se enteró en 1524 de la existencia de estos ricos yacimientos de plata y, cinco años después, fundó el pueblo de Taxco, conocido actualmente como Taxco El Viejo. Tras las primeras exploraciones, los encomenderos enviaron cuadrillas de esclavos a explotarlas. Lo mismo ocurrió en Zultepec, que, además de plata, producía cobre, plomo, estaño y alcaparrosa. En Coyuca se encontró cobre; en Zumpango del Río, plata, cobre y hierro. En Chiautla había plata; en Ixcaputzalco, oro; en Chilapa, plata y cobre; en Tetela del Río, cobre; en Ayacastla, plata y oro; en Xicayán, plata, plomo y cobre. Los lavaderos de oro proliferaron en los ríos de las costas. Estos metales preciosos vincularían al territorio suriano con la economía europea, que, a través de España, se nutría de ellos.

El mineral se desprendía con zapapicos y era cargado por hombres que lo sacaban del interior de las minas a través de túneles. La plata era beneficiada con el método de fundición o con amalgamación. Esta última requería el uso de mercurio, sal, co-

bre y cal. Los dos primeros productos estaban monopolizados por la Corona. Si un centro minero tenía una población española considerable, recibía el nombre de "real". Taxco tenía tres reales: Tetelcingo, Cantarranas y Tenango. En la segunda mitad del siglo xvi, la población española en las minas de Taxco era de aproximadamente 300 almas. El total de habitantes era del orden de 1 500.

La economía minera necesitaba de insumos, productos y mano de obra proporcionados por regiones alejadas u obtenidos en lugares más o menos próximos. En el segundo caso estaban los trabajadores adicionales que apoyaban la producción, provistos en calidad de asalariados por los pueblos de indios, así como el carbón, el ganado y los alimentos. Cerca de Iguala se obtenían mulas, maíz, legumbres, algodón y pescado, que iban a parar a los reales de minas taxqueños. La ropa llegaba de Tlaxcotepec, Cutzio, Cutzamala y Asuchitlan. Ocotlán, Igualtepec y Tehuantepec proporcionaban sal. El mercurio provenía de las minas de Almadén, en España, y de las de Huancavelica, en Perú. Contrastando con esta participación, la región oriental de Guerrero, es decir Chilapa, Tlapa y Huamuxtitlán, quedó casi totalmente al margen de la economía minera.

En 1751, durante el gobierno del conde de Revillagigedo, Juan de la Borda, rico minero de la Nueva España, inició en Taxco la construcción de una de las más imponentes construcciones religiosas de la época: el templo de Santa Prisca. Sufragó todos los gastos con su propio caudal, a condición de tener plena libertad para elegir los materiales, los elementos arquitectónicos y las piezas interiores. Después de demoler la vieja iglesia, edificó la suya, adornándola con profusas incrustaciones de oro y con hermosos retablos. Cayetano de Sigüenza figuró como el principal arquitecto de la obra e Isidoro Vicente de Balbás hizo los retablos más importantes. Siete años tardó en construirse.

LA GUERRA DE INDEPENDENCIA

En el siglo XVIII, las corporaciones más fuertes de Nueva España eran la Iglesia y el consulado de comerciantes de la ciudad de México. Sin embargo, otras instituciones y grupos sociales adquirieron una considerable presencia con los lustros. Así ocurrió con los grandes mineros y agricultores. La Corona española, en manos de los Borbones como consecuencia de la Guerra de Sucesión, veía con preocupación cuánto poder había delegado en las corporaciones, tanto en la metrópoli como en las colonias, y se dio a la tarea de recuperarlo. Envío a Nueva España al malagueño José de Gálvez, primero visitador y luego ministro de las Indias, con el objetivo explícito de volver a tomar las riendas de su posesión más rica.

El poder económico de la Iglesia fue mermado por la llamada consolidación de vales reales, ocurrida en 1804, medida que la obligó a prestar a la Corona el capital obtenido de la venta de sus bienes raíces. El dinero serviría para sufragar el costo de las guerras europeas. Un año antes, Carlos IV, rey de España, se vio obligado a apoyar financieramente a Napoleón Bonaparte en su guerra contra Inglaterra y, en 1804, la monarquía española no tuvo más remedio que aliarse con los franceses. La alianza acabó en desastre, pues el 20 de octubre de 1805, la marina británica destruyó frente al cabo de Trafalgar a la escuadra francoespañola. Era el fin del poderío naval español.

Otra corporación, el consulado de comerciantes de la ciudad de México, perdió el monopolio del que había gozado por largo tiempo, cuando las autoridades metropolitanas promulgaron leyes que posibilitaban el comercio libre y abrieron nuevos consulados en otros puntos del territorio, como Veracruz, Guadalajara y Puebla. Mientras esto acontecía, se fortalecieron nuevos grupos sociales, como los mineros, al permitírseles la creación de un tribunal especial, un banco de avío y una escuela especializada.

La minería, la ganadería y la agricultura crecieron durante el

siglo xviii. Regiones como el norte o el Bajío fueron las más beneficiadas por esta expansión. Toda proporción guardada, en el territorio suriano las haciendas mineras (situadas en particular en los alrededores de Taxco), agrícolas y ganaderas (dispersas en toda su superficie) alcanzaron un desarrollo apreciable. El tamaño de estas últimas variaba considerablemente, ya que comprendían de una a 70 familias, aunque por lo común se componían de 10 o 20 de diferentes castas. Las haciendas se extendieron a expensas de las tierras indígenas y ésta fue una de las razones de las revueltas que ocurrirían en Guerrero durante el siglo xix.

Pero el reformismo borbónico no sólo consistió en atacar a las corporaciones más poderosas, sino que también incluyó una serie de medidas que restaron presencia a los criollos en los órganos de decisión novohispanos. Los españoles nacidos en América se habían introducido en la Audiencia, los cabildos, los tribunales especiales y otras instituciones. Recuperarlas, por la vía de incorporar a españoles peninsulares, fue uno de los objetivos importantes que se trazó la Corona. Este hecho, entre otros, hizo que los criollos se distanciaran más de los poderes metropolitanos y acentuó el nacionalismo novohispano que germinaba bajo su liderazgo en el siglo xviii.

La política local guerrerense fue bastante dinámica hacia finales del periodo colonial, ya sea que se tratara de las disputas de las comunidades con sus párrocos, de la elección de alcaldes, del control de la riqueza de las cofradías, de la imposición del tributo a grupos antes exentos o del dominio de los indígenas sobre los recursos naturales de los pueblos. Por ejemplo, el poblado de Ajuchitlán, en la Tierra Caliente, entre 1789 y 1793 se vio envuelto en un conflicto en torno al control de los recursos de las cofradías. Años después, la participación masiva de los campesinos surianos en la Guerra de Independencia no haría sino manifestar este activismo.

En 1808, las tropas francesas al mando de Murat invadieron España, haciéndola víctima del expansionismo de su viejo aliado Napoleón Bonaparte. Este hecho serviría como catalizador de diversos cambios que se gestaban tanto en la península como en

sus colonias ultramarinas. Consecuencia directa de la invasión fue que Carlos IV cediera a Francia todos sus derechos sobre España y las Indias, decisión avalada por las cortes de Bayona. José, hermano de Napoleón, fue proclamado emperador de España.

Ante estos acontecimientos, en Madrid se inició una revuelta popular y, tanto en España como en las colonias americanas, se formaron “juntas” que funcionaron como gobiernos alternativos bajo el supuesto de que la soberanía había sido usurpada por el invasor francés. En el territorio del actual estado de Guerrero, los sucesos acaecidos en la península tuvieron sus propias secuelas: varias comunidades indígenas ratificaron su lealtad al rey. Por órdenes superiores, militares locales de Tixtla embargaron propiedades francesas y, en el puerto de Acapulco, el oficial real Mariano Tabares organizó una fracasada conspiración para liquidar a los “tiranos europeos”, en la que participaron soldados mulatos.

En 1810 se convocó en España a unas cortes no estamentales que, dos años después, promulgaron la Constitución Política de la Monarquía Española, expedida en Cádiz el 19 de marzo de 1812. La nueva constitución, que también tuvo vigencia en la Nueva España, tenía un corte liberal. Establecía, en primer término, que la nación española la conformaban la “reunión de los españoles de ambos hemisferios”, es decir, “todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de éstos”. Aquélla era la depositaria de la soberanía y, por tanto, la única dotada de competencia para definir las leyes fundamentales. La forma de gobierno nacional que avalaba era la monarquía moderada hereditaria y, para el gobierno interior de los pueblos, la de tipo municipal, que permitía la creación de ayuntamientos electivos. Defendía la libertad civil y la propiedad. Únicamente toleraba la religión católica.

La ampliación de la ciudadanía a los “hombres libres” de ambos continentes, incluidos los indígenas, acabó no sólo con la vieja división entre la república española y la república o repúblicas de indios, sino que también hizo que surgieran formas modernas de organización política conocidas como logias, que

reunían a miembros de distinto nivel social o procedentes de distintas corporaciones, pero que para su aceptación importaba sobre todo el hecho de compartir credos políticos o ideologías semejantes. La constitución de ayuntamientos electivos abrió un espacio para que los pueblos indígenas defendieran su autonomía y sus derechos antiguos dentro del nuevo marco ofrecido por la modernidad liberal, apertura que se canceló cuando Fernando VII recuperó el trono.

El tema de la soberanía confiscada por el invasor francés apareció en la proclama que lanzara Miguel Hidalgo poco tiempo después de dar inicio la Guerra de Independencia, donde condenaba el mal gobierno, a la vez que exaltaba a la patria y a Fernando VII. La Suprema Junta Nacional Americana, conocida mejor como Junta de Zitácuaro, instalada el 21 de agosto de 1811 y encabezada por Ignacio López Rayón, “ministro de la Nación”, hablaba en nombre del monarca despojado y se planteaba como objetivo llenar “el hueco de la soberanía” en España y sus colonias.

Más radical, el acta solemne de la declaración de la independencia de la América septentrional, proclamada por el Congreso de Chilpancingo el 6 de noviembre de 1813 (es decir, cuando José Bonaparte ya había abandonado España), fundamentaba la independencia en el hecho de que la nación americana recuperaba el ejercicio de su soberanía en virtud de “las presentes circunstancias de la Europa”, por lo que “en tal concepto queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español”. Aunque Fernando VII fue reinstalado en el trono por Napoleón el 12 de diciembre de ese año, merced al Tratado de Valençay, el paso dado por los insurgentes no se revirtió.

En el territorio guerrerense, el año de 1808 marcó un cambio en el alcance de las protestas y revueltas campesinas, al pasar éstas de una atomización local a la integración de coaliciones que rebasaron a las comunidades y atrajeron a grupos y clases externos a ellas. La caída del rey español, dice Peter F. Guardino, quitó de en medio el referente simbólico de la justicia a la que apelaban los indígenas en momentos de conflicto. A partir de

este momento se allanaría el camino para una alianza entre algunos de los sectores de la élite desplazados por el reformismo borbónico y los campesinos insatisfechos por la presión fiscal ejercida por la Corona y por la reducción de la autonomía comunitaria propiciada por las reformas, en conflicto con las autoridades locales por el uso de los recursos colectivos o, más aún, desesperados por su situación económica. Así, cuando Morelos llegó a tierras surianas no le costó mucho reunir a un contingente dispuesto a empuñar las armas.

En sus artículos periodísticos de carácter histórico, Ignacio Manuel Altamirano relató el paso de Morelos por el actual estado de Guerrero, específicamente por Zacatula, en la región del Balsas, El Veladero, cerca de Acapulco, y Tixtla, próxima a Chilpancingo. En Zacatula estuvo allá por octubre de 1810. El escritor tixtleco lo describió como un hombre moreno, robusto, de estatura regular, “de ojos de águila, cuya mirada profunda y altiva era irresistible”. Su atuendo era peculiar: no parecía eclesiástico, menos aún jefe militar; tampoco arriero o campesino. Se guarecía del sol con algo parecido a un alquicel blanco. Llevaba puesto un fino sombrero peruano y, debajo de éste, un pañuelo blanco, de seda, cuyos extremos flotaban sobre el cuello terminando en unos nudos. Calzaba unas botas de campana y “bajo sus armas de pelo guardaba un par de pistolas”. Montando un hermoso caballo negro iba al frente de un grupo de aproximadamente 20 jinetes, todos vestidos como campesinos acomodados del sur de Michoacán.

Morelos se aprestaba a cumplir las órdenes de Hidalgo, en el sentido de formar un bastión insurgente en el sur. En la Costa Grande se sumarían a sus fuerzas Hermenegildo, Juan José, José Antonio y Pablo Galeana, además de Miguel, Leonardo y Nicolás Bravo, hijos de este último, llevados ante el generalísimo por don Hermenegildo. Ambos apellidos pertenecían a familias de hacendados: los Galeana de Tecpan y los Bravo de Chichihualco, cerca de Chilpancingo. No obstante, el liderazgo de la insurgencia en el sur también quedaría integrado por arrieros y muleteros de diferentes razas y por curas provenientes del bajo clero.

Hermenegildo Galeana, hacendado algodonero y uno de los mejores militares de Morelos, nombrado mariscal de campo y jefe de las tropas situadas en la Sabana, tendría una muerte trágica el 27 de junio de 1814 cuando, peleando contra las tropas realistas, en Coyuca de Benítez, se golpeó la cabeza contra un árbol. Leonardo Bravo, después de tener una destacada participación en el sitio de Cuautla, fue aprehendido por los realistas que le aplicaron la pena de garrote vil el 13 de septiembre de 1812.

Guerrero fue un punto central en las campañas militares que realizaría Morelos. El 17 de noviembre de 1810, en el Aguacatillo, cerca de Acapulco, promulgó un bando que prohibía la esclavitud, abolía las castas y suprimía las cajas de comunidad indígenas y algunos impuestos. Trató de financiar su movimiento con fondos provenientes de los españoles peninsulares y con recursos tanto de las corporaciones civiles y eclesiásticas como de los aportados por los propios pueblos. El 18 de abril del año siguiente, modificó la división territorial realizada por los Borbones, sustentada en intendencias, al crear la provincia de Tecpan, que separó toda la porción meridional de la intendencia de México y elevó su cabecera al rango de ciudad con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe de Tecpan.

Hacia mediados de 1811, después de tomar Chilpancingo, donde habitaban criollos y mestizos que le brindaron su apoyo, y Tixtla, para esas fechas un pueblo de aproximadamente 4 000 habitantes, según cuenta Altamirano, el cura de Carácuaro ya dominaba prácticamente toda la Costa Grande, a excepción de Acapulco. En noviembre de 1812 se apoderó de la ciudad de Oaxaca y, en agosto del año siguiente, logró tomar el puerto tras sitiar el fuerte de San Diego por seis meses y apoderarse de él a sangre y fuego después de un intento fallido.

Acapulco era estratégico, pues desde allí se dominaría el sur y se tendría el control de una ruta comercial, además de hacerse de las armas y municiones depositadas en la fortaleza. Sus fuerzas ascendían a 3 000 hombres, provistos de algunos fusiles y cañones que habían quitado al enemigo. Peones de las hacien-

das de la costa, muchos de ellos mulatos semidesnudos, hábiles en el manejo del machete, se habían sumado, junto con los propietarios de ellas, a la lucha insurgente. Los mulatos no sólo estaban en contra de ser sujetos del pago de tributo, sino que también aspiraban a la ciudadanía. Varias comunidades indígenas también se agregaron al movimiento. El sentimiento antiespañol en la Costa Grande era fuerte, sobre todo por la presencia de comerciantes peninsulares que gozaban de un virtual monopolio mercantil, como después se manifestaría en otros acontecimientos y periodos, por ejemplo durante la Revolución de 1910.

El 31 de agosto de 1813, Morelos salió de Acapulco rumbo a Chilpancingo y pasó la noche en la hacienda de Mazatlán. Dominaba la plaza Miguel Bravo. Las fuerzas rebeldes contaban con tres trincheras, cañones apostados en una torre y una fábrica de fusiles. El objetivo de la presencia de Morelos en Chilpancingo era instalar el primer congreso constituyente. El 13 de septiembre se hizo la preapertura y, el día siguiente, se inauguró solemnemente leyéndose su célebre ideario conocido como los *Sentimientos de la Nación*. Después de una tormentosa sesión, el día 15 se le nombró generalísimo, encargado del Poder Ejecutivo.

Los *Sentimientos de la Nación* afirman, en primer lugar, que “la América” es independiente de España y de cualquier otro Estado. Además, fijan la religión católica como la única que se toleraría en la nueva nación. Sus propuestas políticas tienen un sello liberal al establecer que la soberanía dimana del pueblo, de la división tripartita de poderes —Legislativo, Ejecutivo y Judicial—, de la superioridad de la ley sobre individuos y corporaciones, del respeto a la propiedad, de la inviolabilidad del domicilio y de la prohibición de la tortura; también, al consagrar la igualdad jurídica de todos los americanos, incluidas las castas y suprimida la esclavitud, y al abolir los privilegios en favor de leyes generales que “comprendan a todos”. Entre otros, los mulatos de la Costa Grande habían quedado recompensados con ello.

En los planos económico y social, el texto garantiza en exclusiva el empleo a los americanos —de los extranjeros sólo se admitiría a los “artesanos capaces de instruir y libres de toda sos-

pecha”—; define un impuesto de 10% para los barcos de naciones amigas que desembarquen en los puertos permitidos; suprime el tributo, “pechos e imposiciones que nos agobian”, incluidas la alcabala y el estanco, y exige que la ley atenúe las diferencias sociales moderando “la opulencia y la indigencia”. Pide también que se establezcan como celebraciones nacionales el 16 de septiembre y el 12 de diciembre.

La muerte de Morelos, en diciembre de 1815, desarticuló el movimiento insurgente, aunque no lo desapareció del todo. José Joaquín de Aguilar encabezaba la resistencia en Huauchinango, José Osorno en Zacatlán y los Llanos de Apan, Guadalupe Victoria en Huatusco, Manuel Mier y Terán en Tehuacán, y Ramón Sesma en la Mixteca. En la región de Tlapa, Vicente Guerrero, que había sido capitán del ejército de Morelos, y Juan del Carmen, su segundo, dirigieron un frente guerrillero que contó con el apoyo de la población. Nicolás Bravo aglutinó algunas fuerzas en el territorio suriano y se mantuvo en contacto con Guerrero.

Hacia principios de 1818, la situación de la insurgencia en el actual estado de Guerrero era desesperada. Nicolás Bravo había sido aprehendido en el rancho de Dolores por las tropas de José Gabriel Armijo, comandante general del sur, las cuales iniciaron una feroz persecución de Vicente Guerrero. Éste, que había sido abandonado por casi todos sus soldados y los que le dejó Bravo a su mando, se escabulló en dirección de la Costa Grande acompañado de unos cuantos hombres. Desde allí reconstruiría sus fuerzas y enfrentaría con éxito a diversos destacamentos realistas. El 12 de marzo fue nombrado general en jefe de las tropas del sur. Al poco tiempo, el caudillo tixtleco se convirtió en el hombre fuerte de la insurgencia.

Después de estos acontecimientos vendría una etapa de derrotas y triunfos alternados. Guerrero reforzó sus posiciones militares al construir un fuerte en el cerro de Santiago. Posteriormente, una infidencia costaría la muerte a muchos de sus oficiales y soldados a manos de las tropas de Armijo, quien llegó hasta Zacatula. Con ello, la zona que dominaba la insurgencia desde que Morelos se apersonó allí pasó a manos realistas. Sin embargo, el

clima y las enfermedades obraron en favor de los rebeldes, y Armijo decidió alejarse de la zona ante la amenaza de pérdidas mayores. Guerrero lo atacó varias veces durante su repliegue a Teloloapan.

En septiembre, Armijo inició una nueva campaña con la intención de llegar a la desembocadura del Balsas. Guerrero, que para ese momento contaba con aproximadamente 800 hombres, logró derrotarlo y recuperar parte de su armamento y pertrechos. Éste sería el inicio de una cadena de éxitos militares que le permitieron ampliar sus tropas y hacerse de la Tierra Caliente al comenzar el año siguiente, para después enviar columnas hacia Acapulco, Valladolid y Chilapa. Los sucesivos fracasos de Armijo lo harían renunciar a la comandancia del sur. En noviembre de 1820, Agustín de Iturbide entró en su relevo. Cabe apuntar que a lo largo de la guerra en las regiones de Tierra Caliente y Costa Chica, aunque se movilizaron incluso párrocos y propietarios agrícolas en torno a la insurgencia, algunos segmentos de la población expresaron una gran lealtad a la Corona. En contrapartida, como se vio desde la llegada de Morelos, la Costa Grande se volcó en su mayoría hacia el bando insurgente. Lugares como Chilapa fueron más abiertamente realistas.

Pedro Ascencio de Alquisiras organizó un nuevo frente en la comarca de Tlatlaya, al noroeste de Teloloapan. Como cuenta Carlos María de Bustamante, Ascencio batiría al mismísimo Iturbide el 28 de diciembre de 1820 en el cerro de San Vicente, atacándolo al mismo tiempo por la vanguardia y la retaguardia al borde de una barranca. Un año después, para escarmiento de la población, su cabeza sería expuesta públicamente en Cuernavaca.

Tan pronto como comenzó el año de 1820, la situación en España se modificó en forma drástica con el finalmente exitoso pronunciamiento del general Rafael de Riego, que enarbolaba la bandera de la Constitución de Cádiz. El hecho vino a transformar el contexto en el cual se desenvolvía la lucha de los insurgentes surianos. La inminencia de la aplicación de la constitución liberal alarmó a algunos segmentos de la élite novohispana, antes

reacios a cualquier afán independentista y ahora preocupados por la posibilidad de perder sus privilegios con la aplicación de la Carta Magna de 1812.

Vicente Guerrero, a pesar del crecimiento de sus fuerzas y la recuperación de la Tierra Caliente, no había logrado tomar ninguna ciudad de importancia en los cinco años transcurridos desde la muerte de Morelos. Ambos factores contribuirían a la solución pactada que expresó el Plan de Independencia de la América Septentrional, conocido como Plan de Iguala y lanzado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821.

Pero el final de la Guerra de Independencia no trajo la tranquilidad al territorio suriano. Iturbide, con la intención de sacar a Vicente Guerrero de la escena política nacional, lo nombró comandante de las fuerzas del sur. Después, su investidura como emperador propició una rebelión en aquel territorio, acaudillada por el propio Guerrero y por Nicolás Bravo, quien había formado parte de la segunda regencia instalada el 11 de abril de 1822. Ambos sufrieron las consecuencias del levantamiento: el primero resultó herido en el pulmón por una bala en un combate contra las tropas de Armijo; Bravo se vio precisado a huir.

La rebelión duró poco tiempo, pues el 19 de marzo de 1823 abdicó Agustín I y partió al exilio en Liorna, Italia. Después de un frustrado regreso, fue fusilado en julio del año siguiente. Tras la caída de Iturbide se integró el Supremo Poder Ejecutivo, del que formaron parte Bravo y Guerrero, además de Guadalupe Victoria, José Mariano Michelena y Miguel Domínguez. Bravo ocupó la vicepresidencia de la República en 1824, cuando Guadalupe Victoria era presidente, y Guerrero ocupó la primera magistratura en 1829, después del motín de la Acordada, cuando despojó a Manuel Gómez Pedraza del triunfo electoral. La elección hizo más marcadas las diferencias entre Bravo y Guerrero, pues el primero apoyó al bando de los moderados, lo que le costó el posterior destierro a Guayaquil, y Guerrero era la cabeza del grupo radical.

El gobierno de Guerrero intentó aplicar una política económica más benigna con amplios sectores de la población. Después

de casi una década de libre cambio que afectó a las manufacturas nacionales, su gobierno expidió una ley favorable a ciertos grupos de artesanos: los tejidos de algodón de consumo generalizado y algunos productos elaborados con metal ya no podrían ser importados. La invasión española dirigida por Isidro Barradas y el levantamiento en su contra, iniciado en Jalapa por el vicepresidente Anastasio Bustamante, orillaron a Guerrero a posponer la aplicación de la ley, dada su necesidad de hacerse de recursos mediante la vía fiscal.

El Congreso declaró a Guerrero imposibilitado para gobernar y puso la presidencia en manos de Bustamante al finalizar 1829, lo que motivó el regreso del caudillo tixtleco al territorio suriano, con la intención de hacerse fuerte. Nicolás Bravo, apoyado por las fuerzas del tenaz José Gabriel Armijo, que moriría en uno de los episodios de la lucha, fue instruido para combatir a los pronunciados del sur, entre los que se contaba también Juan Nepomuceno Álvarez, quien tendría después un papel muy importante en la región. No lograron derrotarlo militarmente; sin embargo, Guerrero fue traicionado por el italiano Francisco Piculuga, traficante de armas, y fusilado en 1831 en Cuilapam, Oaxaca. A la postre, el hecho desencadenaría nuevos levantamientos armados en contra de Bustamante.

Hasta aquí se puede concluir que el desarrollo de la Guerra de Independencia otorgó en el sur un papel central a los hechos armados. Diez años de intervención en la lucha mostraron el vigor de su población y su aporte práctico a la construcción del Estado nacional. Esta articulación entre lo regional y lo nacional, tan palpable durante la Independencia, se repetiría en otros momentos cruciales de la historia mexicana, ya fuera en la caída de Iturbide o, como se verá en el capítulo siguiente, cuando en el territorio guerrerense dio inicio la rebelión que depondría a la dictadura centralista de Antonio López de Santa Anna.

II. LOS PROCESOS POLÍTICOS

HISTÓRICAMENTE, EL SUR HA SIDO una periferia activa dentro del conjunto nacional. Aunque físicamente no muy alejado del centro, la ruda geografía del territorio guerrerense, el no ser camino más que en dirección al mar, y no hacia el Atlántico sino hacia el Pacífico, estableció una frontera natural que, a la vez que lo segregó, dio pie a una relativa autonomía política y cultural.

Como vimos, durante la época prehispánica el sur no fue sede de ninguno de los centros religioso-políticos dominantes ni se construyó allí megalópolis alguna; sin embargo, olmecas, teotihuacanos, mayas y mexicas, ya fuera por presencia directa o como consecuencia del comercio, dejaron sus huellas en los pobladores indígenas locales que, además, poseían rasgos culturales propios. El resultado fue una cultura híbrida que todavía no encuentra una clasificación definitiva en la taxonomía de los especialistas.

En el virreinato, parte del territorio suriano perteneció al extremo sur de las provincias de México, Michoacán y Puebla de los Ángeles. Cuando sobrevino el régimen de intendencias, a consecuencia de las reformas borbónicas del siglo XVIII, que introdujo el modelo territorial francés implantado por Luis XIII, lo que ahora es Guerrero formó parte de las intendencias de Valladolid, México y Puebla. Los grandes procesos de la economía novohispana también se verificaron allí, aunque sin cobrar la magnitud y relevancia alcanzada en otros lugares. Caminos escasos y malos dificultaron, aunque no impidieron, que Taxco y Acapulco se conectaran con la ciudad de México y con otras partes del Imperio español. Debido a los viajes del galeón de Manila, el puerto sureño se convirtió en una verdadera frontera colonial en la que se daban los intercambios mercantiles y culturales.

Si bien la Guerra de Independencia comenzó en el Bajío, en

la segunda instancia el territorio suriano fue un espacio donde se libraron campañas cruciales. El Congreso de Chilpancingo de 1813 proyectó el sur a escala nacional. Más adelante, el acuerdo que puso fin a la guerra tuvo como una de las partes a las fuerzas militares de Vicente Guerrero. Mediante este pacto, la periferia suriana intervino decisivamente en el alumbramiento de la nación independiente.

Como veremos ahora, durante el centralismo los caudillos Nicolás Bravo y Juan N. Álvarez se quejaban de que el departamento de México no escuchaba las demandas de los habitantes del sur y tampoco los tomaba en cuenta en la elección de representantes y autoridades. Argumentaban que la distancia respecto al centro del departamento y del país contribuía sustancialmente a este abandono. Querían dejar de ser el extremo olvidado de aquella entidad y lograr la soberanía política mediante la creación del departamento del sur. La lucha acaudillada por Álvarez contra la invasión estadounidense ratificaría el papel de periferia activa que tuvo la región.

Guerrero se fundó en 1849 con territorios de los estados de México, Michoacán y Puebla. Aparte de la reticencia obvia de las entidades que sufrieron la mutilación territorial, había dudas fundadas acerca de la viabilidad económica del nuevo estado, dado lo escaso de su población, la pobreza en que vivía la mayoría, la ausencia de infraestructura y la falta de cuadros gubernamentales que se hicieran cargo de la administración pública. En la década siguiente, otra vez Álvarez levantó al sur, entonces contra la dictadura santannista, y abrió la puerta para el arribo al poder de la generación de la Reforma. Su muerte redujo considerablemente la influencia guerrerense en el ámbito nacional, y la política de centralización aplicada durante el porfiriato acotó —y muchas veces logró acabarla— la intervención eficaz de los poderes regionales.

LA NUEVA ENTIDAD

Como señala Edmundo O'Gorman en su *Historia de las divisiones territoriales de México*, al convertirse México en república federal, en 1824, estaba dividido en 20 estados y tres territorios. Los primeros eran Chiapas, Chihuahua, Coahuila (incluía a Texas), Durango, Guanajuato, Interno de Occidente (formado por Sonora y Sinaloa), México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla de los Ángeles, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas (antes Santander), Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Zacatecas. Los territorios incluían a Las Californias, el partido de Colima y Nuevo México. Esta división sufrió grandes modificaciones durante el siglo XIX, con la Constitución de 1917, y en décadas recientes, cuando los últimos territorios fueron elevados al rango de estados. Muchas de las entidades surgieron de la partición de los estados reconocidos en 1824 y a los cuales podríamos llamar originales; otras se perdieron como consecuencia de los conflictos con el exterior. Durante la vigencia del centralismo, los estados mudaron su nombre por el de departamentos.

La formación de Guerrero fue en buena medida obra de Nicolás Bravo y Juan N. Álvarez. Ambos eran hacendados: Bravo nació en Chilpancingo y poseía, dijimos, la hacienda de Chichihualco; Álvarez nació en Atoyac y, aunque de origen humilde, llegó a ser propietario de la hacienda de La Providencia. Los dos habían peleado en la Guerra de Independencia al lado de Morelos. Lucharon contra el Primer Imperio, enfrentaron al ejército estadounidense y, en varios momentos, se alternaron la jefatura de las fuerzas armadas del sur. Uno y otro ocuparon la presidencia de la República.

Sin embargo, había diferencias: Bravo estaba más cerca de los conservadores y de Santa Anna. No tuvo mucha fortuna militar. En cambio, Álvarez pertenecía al bando liberal, logró hacerse de una base social en distintas zonas del sur apoyándose en diversos segmentos de la población y acumuló también una fuerza política y militar considerable a lo largo de sucesivas guerras

internas y externas, lo que le permitió convertirse en verdugo del santannismo. Construyó un sólido cacicazgo político en un amplio espacio geográfico que en su momento reclamó la autonomía plena. Estuvieron enfrentados varias veces. No obstante, eran capaces de aliarse cuando la situación lo ameritaba.

En 1835, Nicolás Bravo trató de crear el departamento del Sur, intento frustrado por la constitución centralista que creó cuatro nuevos departamentos, pero ninguno en aquella región. El 10 de octubre de 1841, un manifiesto firmado en Chilpancingo por Bravo y Álvarez planteó al Congreso nacional el deseo de crear el departamento de Acapulco, erigido en la parte meridional del departamento de México, al que quedarían adscritos Chilapa, Tlapa, Acapulco, Huetamo, Taxco y, si era su deseo sumarse, también Cuernavaca. Los suscriptores argumentaban que, siendo nativos de aquellas tierras, se veían urgidos a atender “las peticiones y clamores de los pueblos del sur”, por lo cual aprovecharon “la crisis política en que nos hallábamos, sin gobierno y sin representación nacional, para declarar que existen en nuestras manos multitud de representaciones de los mismos pueblos pidiendo con vehemencia su separación del departamento de México”. Decían representar los intereses de 100 000 almas, caracterizadas por un “carácter indomable” y agrupadas en algo así como 300 pueblos.

Aseguraban también, como se constató desde tiempos coloniales, que la provincia de México era desproporcionadamente grande en territorio, población y recursos naturales, lo que causará celo entre las demás. Aunque se hicieron diversos ajustes en el periodo nacional, esta situación no se reparó a satisfacción. La capital del departamento estaba muy lejos del territorio suriano, al cual muchas leyes municipales le eran adversas. Además, argüían, había en cuestiones electorales cierto desprecio hacia sus pobladores, razón que estaba detrás del hecho de que no se hubiera “elegido a ningún habitante del sur para representarlo en los diversos congresos generales”, situación que les había impedido plantear como quisieran sus necesidades y demandas.

Además, decían, la separación no sería un acontecimiento

extraño, pues otras provincias ya se habían segregado de las entidades originales, y las relaciones entre las porciones norte y sur del departamento de México siempre habían sido buenas. Es más, esto no le impediría seguir siendo “el mayor, el más opulento y el más respetable de la República”.

Por su parte, los surianos, aunque vivían en un territorio pobre, contaban con recursos materiales suficientes, provenientes de la ganadería y la labranza, y tenían hombres inteligentes, honestos y capaces de hacerse cargo del nuevo departamento. Para tal efecto, se convocaría a una junta de notables en Chilpancingo. Ésta, que se realizó el 10 de noviembre y congregó a 81 representantes de 42 pueblos, juzgó inoportuno tomar una decisión inmediata y transfirió la responsabilidad al Congreso Constituyente que se conformaría en ocho meses, de acuerdo con lo previsto en los incisos cuarto y quinto del Plan de Tacubaya, de fecha 28 de septiembre de 1841, y enarbolado por Antonio López de Santa Anna.

Ni dos semanas habían pasado cuando Nicolás Bravo rompió con Santa Anna aduciendo que “no tiene sujeción a las leyes establecidas, ni garantiza lo más mínimo que no hará abuso de esas extraordinarias facultades”. La formación del nuevo departamento quedó bloqueada por varios años. Mientras tanto, se incubaba un conflicto en distintos puntos de la Montaña como consecuencia de la expansión de las haciendas a costa de las tierras de los pueblos indígenas. Esto desató movilizaciones populares que molestaron y preocuparon al gobierno nacional.

El territorio suriano tenía una población indígena importante, empeñada en defender derechos colectivos como el acceso a la tierra, reacia a pagar contribuciones fiscales onerosas y propensa a ejercer la autonomía comunitaria. El liberalismo, que comenzó a adquirir carta de naturalización en Nueva España con la Constitución de Cádiz y continuó vigente como marco normativo en el periodo nacional, aunque con algunas interrupciones significativas, abrió un espacio para que los pueblos indígenas intervinieran en las cuestiones políticas y reclamaran sus derechos ancestrales: de no atenderseles, volverían a la vieja práctica de la rebelión armada.

Desde 1716, apunta Leticia Reina, los indígenas tlapanecos comenzaron su lucha contra el despojo de sus tierras por parte de la familia Moctezuma. Cincuenta años más tarde, la Real Audiencia, basando su resolución en la visita que hiciera José Avilés, emitió un fallo favorable a los indígenas; sin embargo, éste no era un caso aislado. La hacienda de San Sebastián Buena Vista, fundada en el siglo xvii por el capitán Oláez, se fincó sobre la usurpación de una parte de las tierras indígenas de Quechultenango, hecho que propició un conflicto que se prolongó varios siglos.

En 1842, Rafael Gutiérrez, de origen español y propietario de la hacienda, ensanchó su dominio otra vez a expensas del pueblo, desvió el curso del agua que lo abastecía y prohibió el corte de leña en los montes circundantes. Los indígenas respondieron con una sublevación que tuvo secuelas en las poblaciones aledañas. El gobierno de la República empleó la fuerza. Nicolás Bravo, comandante militar del sur, trató de detener el enfrentamiento invitando a Juan N. Álvarez a intervenir en calidad de mediador. En esta disputa, y en otras posteriores, Álvarez tendría un papel a la vez importante y ambiguo. En ocasiones trataba de serenar a los rebeldes; en otras, los incitaba a sostener sus demandas. Obtenía beneficios políticos en ambos casos: si sucedía lo primero, afianzaba su puesto como hombre fuerte de la región; si acontecía lo otro, presionaba a las autoridades para alcanzar sus fines. Hasta su muerte, fue el fiel de la balanza en la región.

La intervención de don Juan ayudó a contener a los indígenas, pero, a la vez, hizo crecer su poder mediador y consolidar su figura caciquil. El sur tenía así una autonomía relativa que a través de Álvarez le permitía pactar acuerdos con el poder central. La guerra contra los Estados Unidos hizo crecer todavía más su estatura política y militar. Sólo sería cuestión de tiempo el reconocimiento pleno de Álvarez por la vía de permitir la constitución de una nueva entidad política, que, por el escaso grado de integración del país, implicaba admitir la existencia de un poder autónomo *de facto*.

No obstante la mediación de Álvarez, Bravo no renunció al recurso de las armas. Así, el 17 de abril de 1842, en el cerro de

Matlata, redujo a los indígenas a sangre y fuego. Don Juan intervino de nueva cuenta y logró una tregua temporal, pero la violencia se reanudó cuando el ejército atacó el pueblo de Ayahualco, acción que resultó contraproducente, pues a partir de entonces la rebelión, encabezada por José Abarca, Faustino Villalva y Dionisio Arriaga, se extendió hacia otras zonas.

La propuesta de Álvarez de resolver legalmente el conflicto, amén de una amnistía otorgada por el gobierno, calmó los ánimos, aunque el problema reapareció en la Montaña al año siguiente. Los pueblos de Atlamajalcingo del Río, Xalpatlahuaca, Hasotla, Beupa, Ostocingo, Tlaquilingo, Copanatoyac, Potuichán, Pactlichán, Tlalquesolapa, Cuanzololo, Cuapala, Teocutlapa, Chipepec, Aguilpa, Ixcatepec, Totoltepec y Alpuyeca se coligaron en la lucha.

Desesperado, Bravo acusó a Álvarez y al general Tomás Moreno de fraguar un movimiento revolucionario que iría a converger con la rebelión indígena, ya que les ofrecían tierras y la supresión de contribuciones. En mayo de 1843, Álvarez dio una salida parcial y transitoria al conflicto de los indígenas con las autoridades mediante el llamado "Convenio de Chilpancingo", que proponía de nueva cuenta revisar los títulos de propiedad, una amnistía y la entrega de las armas por parte de los sublevados. Un año después, Bravo resumiría lapidariamente su posición ante el conflicto: "El incendio y la devastación de las principales poblaciones del rumbo del sur, por la ignorancia y estupidez de los indígenas, me obligaron de nuevo a tomar la espada en defensa de la propiedad y la vida de mis conciudadanos".

Pero la disputa continuó: los indígenas extendieron sus demandas al pretender la reforma del poder local y, en octubre del mismo año, ocuparon Juxtlahuaca. El 30 de noviembre de 1843 fue fusilado Dionisio Arriaga, su comandante general, lo que marcó el inicio del reflujó de la rebelión. Al año siguiente, tras la caída de Santa Anna, Álvarez llamó a los indígenas a cesar la rebelión con el argumento de que "su causa era justa en sí misma, pero los medios que elegisteis para llevarla a cabo no fueron los mejores, porque tenéis órganos legítimos por donde

exponer a la autoridad vuestras querellas". Domingo Santiago encabezó otro levantamiento un lustro después. Álvarez, como siempre, intervino en el conflicto y obtuvo dividendos políticos. Esta vez ganó el premio mayor: al año siguiente realizaría su acariciado sueño de crear una entidad federativa en el sur.

En marzo de 1846, los Estados Unidos declararon la guerra a México y, el 15 de abril, Álvarez lanzó el Plan de Acapulco, de signo federalista y que exigía la convocatoria a elecciones generales. Más adelante lo secundarían las guarniciones de Mazatlán y Guadalajara. Antes de finalizar ese año se readoptó el sistema federal y se declaró la vigencia parcial de la Constitución de 1824. Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses avanzaban sobre el territorio nacional.

El 21 de mayo de 1847 se dictó el *Acta constitutiva y de reformas de los Estados Unidos Mexicanos*. Entre otras iniciativas, el documento subrayó la conveniencia de crear una nueva entidad política en el sur del país, si las legislaturas de los estados afectados manifestaban su consentimiento en un término no mayor de tres meses. De acuerdo con el texto, Guerrero se formaría con la municipalidad de Coyuca y los distritos de Acapulco, Chilapa, Tlapa y Taxco. Coyuca de Catalán pertenecía a Michoacán, Tlapa a Puebla, y Acapulco, Chilapa y Taxco al Estado de México.

Por la guerra con los Estados Unidos, se amplió el plazo otorgado a las legislaturas al 19 de agosto de 1848. Después aparecieron otros obstáculos. Álvarez entró en conflicto con el gobernador del Estado de México, Francisco Modesto de Olaguíbel, al no recibir apoyo suficiente para defender Acapulco de un posible ataque de las tropas estadounidenses. De Olaguíbel acusó al general suriano de no haber impedido que sus fuerzas asaltaran la receptoría de rentas de la prefectura de Cuernavaca.

El 16 de octubre del mismo año, la legislatura mexiquense aceptó la segregación de los distritos de Chilapa, Acapulco y Taxco, condicionada a que Puebla y Michoacán aceptaran la mutilación territorial que les correspondía de acuerdo con el acta de 1847. Además, Guerrero tendría que pagar la quinta parte de la deuda del Estado de México. Desde que el Congreso acepta-

ra la separación del territorio suriano, las municipalidades afectadas por el acuerdo habían rehusado obedecer las directrices provenientes de Toluca, incluido el pago de impuestos.

Con la misma fecha, la legislatura poblana aceptó ceder el distrito de Tlapa a la nueva entidad, siempre que la mayoría de sus habitantes otorgara su consentimiento en un plebiscito que, celebrado el 21 de enero de 1849, resultó favorable a la segregación. El 23 de noviembre de 1848, Michoacán hizo saber su negativa a ceder la municipalidad de Coyuca. De todos modos, el 15 de mayo de 1849, el Congreso general, estando José Joaquín de Herrera en la presidencia de la República, decretó la formación del estado de Guerrero, para lo cual asumió las atribuciones que sobre la materia le otorgaba la Constitución de 1824. La nueva entidad se haría cargo del pago de la parte de la deuda pública de los otros estados fijada por el gobierno nacional. Finalmente, el 28 de junio de 1849, el Congreso michoacano ratificó lo dispuesto en el decreto del Congreso general.

Iguala de Iturbide fue designada capital provisional del estado, en tanto que Juan N. Álvarez, comandante general de la región, fue nombrado gobernador provisional y después interino, hasta que dejó temporalmente el cargo, el 13 de junio de 1850, en manos del teniente coronel Miguel García. Álvarez ocupó otra vez la gubernatura entre enero de 1850 y marzo del siguiente año y de abril de 1852 a octubre de 1853. Cuando Santa Anna regresó al Ejecutivo, se refugió en su hacienda de La Providencia, y el general Tomás Moreno tomó las riendas guerrerenses.

El 16 de marzo de 1850, el Congreso Constituyente, reunido en Iguala y formado por Nicolás Bravo, Diego Álvarez, Juan José Calleja, José María Añorve, Félix María Leyva, Ignacio Castañón, Miguel Ibarra, Ignacio del Prado, Eugenio Vargas, Tomás Gómez y José María Cervantes, expidió la *Ley orgánica provisional para el arreglo interior del estado de Guerrero*, que lo declaraba parte de la federación, independiente, libre y soberano, a la vez que lo dividió en los distritos de Acapulco, Chilapa, Ometepepec, Tixtla, Teloloapan, Tecpan, Tlapa, Ajuchitlán y Taxco. Después se sumaría el de Huamustitlán. Cada uno de ellos quedaría a cargo de

un prefecto y tanto la capital de la entidad como las de distrito y las cabeceras municipales contarían con ayuntamientos electos por sufragio indirecto y encabezados por alcaldes.

Esta ley establecía la división tripartita de poderes, quedando el ejecutivo en manos del gobernador. Aunque garantizaba la igualdad, la propiedad, la seguridad y la libertad, sólo aceptaba la práctica de la religión católica, con exclusión de todas las demás. Tixtla fue declarada capital. Años después, la sede de los poderes estatales pasó a Chilpancingo. La primera *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero* se promulgó en Tixtla el 14 de junio de 1851 y, 23 años después, se dictó una nueva.

VIDA Y MUERTE DE UN CACICAZGO

En su último gobierno, Santa Anna intentó centralizar el poder en su persona tanto como fuera posible. A ello contribuyó la desaparición de importantes contrapesos: Lucas Alamán y José María Tornel, ministros de Relaciones Exteriores y de Guerra, respectivamente. Desterró del país a prominentes liberales y trató de despojar de su poder a los caciques regionales. Así, Álvarez —en la Costa Grande— y el coronel Florencio Villarreal —en la Costa Chica— fueron puestos en la mira. El primer paso fue mandar tropas al puerto de Acapulco, pretextando el riesgo de una invasión filibustera. Otro fue la destitución del gobernador Tomás Moreno, cercano a Álvarez por lo menos desde las rebeliones indígenas de la década anterior, y su remplazo por el general Ángel Pérez Palacios.

Álvarez no se paralizó. El 27 de febrero de 1854, desde La Providencia, dirigió un manifiesto a las tropas a su mando exhortándolas a enfrentar a Santa Anna: “¡Mis amigos! —escribió Álvarez— Me habéis visto encanecer a vuestro lado y sabéis bien que nunca os engaña vuestro anciano general: creedme por tanto. Peligra vuestra cara independencia, quiere privársenos de la libertad y se pretende despojarnos hasta de la tierra que pisamos”.

Días después, el 1° de marzo, Florencio Villarreal formalizó más acabadamente la oposición a Santa Anna con la proclamación del Plan de Ayutla, que deponía al dictador y a su gabinete y llamaba a nombrar un presidente interino y a integrar un congreso extraordinario que se ocupara “de constituir a la nación bajo la forma de república representativa popular”. Por último, invitaba a los generales Nicolás Bravo, Juan N. Álvarez y Tomás Moreno a que se pusieran “al frente de las fuerzas libertadoras que proclaman este plan”.

El documento fue reformado en el fuerte de San Diego (Acapulco) el 11 de marzo a instancias del coronel Rafael Solís, quien convocó a las tropas de la plaza a sumarse al pronunciamiento de Villarreal. Se aseguraba que, “por una feliz casualidad, se hallaba en este puerto el señor coronel don Ignacio Comonfort, que tantos y tan buenos servicios ha prestado al sur”. En función de ello, y si el coronel daba su anuencia, “se encargase del mando de la plaza y se pusiera al frente de sus fuerzas”. Éste respondió que “lo haría gustoso en cumplimiento del deber sagrado que todo ciudadano tiene de posponer su tranquilidad y sus intereses particulares al bienestar y felicidad de sus compatriotas”. Propuso algunos cambios y adiciones en las que se destacaba la protección de las garantías individuales. Reiteró la solicitud a Bravo, Álvarez y Moreno para que acaudillaran el movimiento. Álvarez y Moreno aceptaron el encargo y el primero quedó como jefe. Bravo ya no pudo incorporarse, pues murió en Chilpancingo el 22 de abril.

Santa Anna fue en persona a combatir la rebelión en el sur. Intentó tomar Acapulco por asalto, cosa que no logró. A partir de ese momento, y a lo largo de año y medio, el alzamiento crecería en volumen y fuerza. El 13 de julio, el general Rómulo de la Vega, jefe de la guarnición de la ciudad de México, se adhirió al plan. Al poco tiempo, gran parte del país haría lo propio. Derrotado, el 9 de agosto de 1855 Santa Anna salió hacia Nueva Granada, Colombia.

Mientras esto ocurría, en la ciudad de México se nombraba a Martín Carrera presidente provisional. Pero como el plan señala-

ba que una junta integrada por los representantes de los estados sería la encargada de designar al presidente interino, Carrera renunció el 14 de septiembre. “Lejos de poner diques a la revolución, dejó ensanchada su esfera”, escribió en su documento de despedida. Días después, Álvarez entró al relevo. Al cabo de la lucha, Tomás Moreno fue reinstalado en el ejecutivo guerrerense. Posteriormente, Miguel García, de nueva cuenta el general Moreno, Félix M. Aburto, Manuel Parra y José M. P. Hernández lo ocuparían.

Las guerras de Reforma y de Intervención también se alimentaron de hombres del sur. En la primera, motivada por el rechazo de distintos grupos y corporaciones a la Constitución liberal de 1857, las fuerzas leales al presidente Juárez fueron comandadas por Álvarez, quien las dividió en tres brigadas a cargo de Vicente Jiménez, José María Arteaga (reemplazado después por Eutimio Pinzón) y Diego Álvarez (sustituido más adelante por Juan J. Berdeja). A mediados de 1860, el ejército conservador había quedado derrotado en el sur. Tiempo después, Jiménez se sumó a las tropas del coronel Porfirio Díaz, que batieron a Leonardo Márquez y Félix María Zuloaga en Jalatlaco. Con posterioridad al interinato de Jiménez, Anselmo Torrija se hizo cargo del ejecutivo estatal. Entre noviembre de 1860 y julio del año siguiente transcurrió la tercera gubernatura del general Jiménez. Lo sucedió el coronel Mariano Nava, a quien relevó Torrija.

Durante la Intervención francesa gobernaron el propio Torrija y Diego Álvarez, hijo del prócer. Para enfrentar a los invasores se formaron un batallón y un escuadrón de la guardia nacional en cada uno de los distritos. Los de Hidalgo y Morelos contribuirían con dos cada uno. El periodo abundó en acciones armadas en el territorio suriano: los sitios de Teloloapan, Taxco y Chilapa destacaron por su importancia.

En octubre de 1863 Porfirio Díaz, al mando de una división formada por tres brigadas de infantería, una de caballería y una batería de artillería, recuperó Taxco. En su defensa participaron numerosos contingentes civiles, atrincherados en edificios particulares y en la iglesia de Santa Prisca. La plaza fue tomada des-

pués de los combates de la noche del 27 al 28 de octubre. Santa Prisca albergó al cuartel militar del ejército victorioso, que requirió mercancías, dinero y objetos de valor.

Durante la guerra se internaron armas y pertrechos por Acaapulco. Juan N. Álvarez garantizó con sus propiedades el pago de estos implementos. Por su parte, las fuerzas francesas procuraron apoderarse del puerto para evitar el abastecimiento. En abril de 1867, las tropas de Diego Álvarez lograron recuperar definitivamente la plaza.

La victoria sobre el Imperio estuvo acompañada de la lucha de los caudillos guerrerenses por alzarse con la hegemonía política. Diego Álvarez y Vicente Jiménez fueron las figuras más notables de esta disputa. Ambos estuvieron del lado de las fuerzas republicanas durante la Guerra de Intervención: uno luchó en el sitio de Puebla y otro combatió en Querétaro. Durante la República restaurada, Álvarez contaría las más de las veces con el apoyo de Benito Juárez, y Jiménez, con el de Porfirio Díaz e Ignacio Manuel Altamirano.

Nicole Giron ha documentado que la fractura del “grupo del sur” está asociada con el deterioro físico de Juan N. Álvarez. Al percibirse la inminencia del relevo, no todos sus miembros aceptaron a su hijo como el sucesor. Tal fue el caso de Altamirano, que en diversas ocasiones se quejó con Juárez de la actitud “indolente” y “antipatriótica” de aquél durante la guerra con los franceses, por su negativa a apoyar a Jiménez y a otros con armas y pertrechos en momentos de urgencia. Diego reprochaba al tixtleco por promover a sus favoritos dentro del ejército.

Para esas fechas, Diego Álvarez era a la vez gobernador y comandante militar del estado, y Jiménez, jefe de la primera brigada de la División del Sur. Cuando éste regresó a Guerrero, hizo pública su ruptura con el gobierno estatal. En Iguala, el 7 de julio de 1867, la brigada a su mando publicó un documento en el que recriminaba al ejecutivo local la deplorable situación en que se encontraba la entidad, reservándose el derecho a guardar las armas hasta que se corrigieran los citados males. Además, desconocía los cargos de Álvarez y nombraba gobernador interino

a Ignacio Manuel Altamirano, quien había realizado una breve pero exitosa carrera militar bajo su sombra.

El conflicto entre Diego Álvarez y Vicente Jiménez se convirtió en un enfrentamiento armado que se prolongó varios meses. Al respecto hay que recordar que en 1857 Jiménez alcanzó la gubernatura por primera ocasión. Dos años después, en calidad de interino, promulgó las Leyes de Reforma en Guerrero. El 9 de junio de 1867, en carta a Juárez, Altamirano se refiere al enfrentamiento entre aquéllos. Altamirano negó que el general Jiménez se hubiera rebelado en contra de Álvarez; por el contrario, presumiblemente el segundo se había desplazado hacia Iguala con la intención de batirlo. Las consecuencias eran trágicas y hacían sufrir nada menos que al propio Juan N. Álvarez, quien, por su enfermedad, estaba reducido “a un estado automático, [y] nada puede hacer en estas circunstancias más que llorar como un chico cuando, en momentos de lucidez, [contempla] los males que esta división acarreará al estado”.

A los pocos días, para defenderse ante Juárez del cargo que se le hacía, Diego Álvarez documentó la desobediencia y el franco desafío de su antagonista. Además, aprovechó la oportunidad para explicar su actitud agresiva hacia Altamirano: dado que el periódico oficial de Guerrero y *La Voz del Pueblo* publicaban constantemente artículos en favor de Jiménez, aquél ordenó que se cancelara la publicación del segundo y desterró de la entidad a Altamirano en vista de que, “bajo el pretexto de la defensa nacional, se procuraba introducir la anarquía con miras siniestras, y de esto el principal promovedor era el licenciado Altamirano”.

Desde La Providencia, Álvarez escribió en otra misiva dirigida al presidente, con fecha 14 de agosto de ese mismo año, que

poco después de mi regreso de Iguala, [mi padre] cayó en cama, agobiado bajo la influencia de los últimos sucesos del estado y, como dotado de una imaginación en extremo impresionable, ha estado en una ansiedad mortal a la expectativa de las determinaciones de usted, de quien siempre ha confiado por tenerlo como nuestro verdadero amigo, y esta incertidumbre ha contribuido a su completa postración, pues se halla enfermo de gravedad.

Párrafos adelante remató:

[...] las continuas convulsiones del país han engendrado tan grande demoralización en las masas que multitud de individuos temen la paz porque, no teniendo medios de subsistencia, quedan reducidos a vivir en la miseria. De aquí proviene que cualquier ambicioso tenga partidarios.

Otra vez fustigó a la prensa, ahora a *El Regenerador*, por publicar diatribas en su contra.

Juárez primero intentó mediar entre las partes, cuando envió al coronel Jesús E. Alcaraz, y después apoyó a Diego Álvarez. El presidente presionó a Jiménez para que reconociera la autoridad de Álvarez; el general tixtleco entonces respondió con fuerza a través de una analogía formulada a manera de pregunta (30 de septiembre de 1867): “¿A dónde habríamos ido a parar si en 1854 y [18]55 ese respeto al principio de autoridad hubiese elevado a Santa Anna contra la voluntad del país hasta el trono que soñaba?”

Como el problema no tenía visos de solución, el ejecutivo federal habilitó en la persona del general Francisco O. Arce a otro mediador. Previamente, en carta de 8 de octubre de 1867, Ignacio C. Ocádiz había informado al presidente: “El señor Álvarez tiene buena disposición para venir si es llamado y para entregar el gobierno a otra persona que no sea el señor Jiménez ni don Ignacio [Manuel] Altamirano”. Juárez solicitó una vez más al general Jiménez (26 de octubre de 1867) que abandonara su lucha, pues deseaba “con el mayor interés que el estado de Guerrero” volviese “a su condición normal” y esperaba, en virtud de ello, que no insistiera en “una posición que el gobierno no puede ni debe apoyar”. Jiménez resistió un poco más y advirtió al presidente (25 de diciembre de 1867): “El principio republicano será una verdad práctica en el estado y, para gloria de la democracia, desaparecerá ese resto de feudalismo implantado aquí por una familia”.

La muerte de Juan N. Álvarez, en agosto de 1867, dejó a la entidad sin el hombre fuerte capaz de controlar a las fuerzas regionales. Juárez escribió apesadumbrado a su hijo Diego (28

de noviembre de 1867): “He sabido la muerte de su señor padre y usted comprenderá lo mucho que lo he sentido, siendo como era mi amigo y una de las más hermosas glorias de nuestra patria”. El hecho operó como un catalizador de la lucha por el poder político. De aquí en adelante, en ausencia del patriarca, el arbitraje o, llegado el caso, los personajes de relevo provendrían del centro. Juárez y Díaz serían el fiel de la balanza de la política guerrerense durante los siguientes lustros.

Finalmente, en mayo de 1868, las tropas jimenistas depusieron las armas y Álvarez pudo concluir su mandato. Después lo relevó en el cargo el general Arce. Pero la calma fue breve: en mayo de 1870, Vicente Jiménez se volvió a levantar en armas, contando esta vez con el apoyo de algunos diputados locales. Los rebeldes impusieron a Francisco Domínguez Catalán como gobernador interino y el Congreso local hizo a un lado al general Arce, quien, como cuenta Emilio Velasco, “reconoció el veredicto pronunciado en su contra, separándose del gobierno”. Juárez apoyó a Arce y el Congreso de la Unión desaprobó la intervención presidencial por considerarla violatoria de la soberanía del estado.

Este episodio fue importante para la entidad e ilustrativo de la relación entre el presidente y el Congreso. En el debate, el mismo Velasco dijo simple y llanamente: “En el fondo de la cuestión de Guerrero está el principio de la soberanía de los estados”. La resolución que se tomara sería fundamental, pues vendría “a determinar si puede ser lícito al Ejecutivo de la Unión agitar cuestiones de los estados, con el fin de sostener una determinada situación política, por más que este proceder sea contrario a las leyes y equivalga a una violación cautelosa de la Constitución federal”. En el mismo sentido, Manuel M. de Zamacona preguntaba: “¿De parte de quién está en Guerrero la legalidad y la justicia?, ¿de parte de quién ha estado la sinceridad y la moderación?, ¿de parte de quién la premeditación y la hipocresía?” Sin embargo, Juárez siguió adelante y envió tropas federales a Guerrero.

El movimiento jimenista prácticamente estaba derrotado cuando el alzamiento de Porfirio Díaz, bajo las banderas antirreeleccionistas del Plan de la Noria (9 de noviembre de 1871), le dio

un impulso temporal. Cabe señalar que Altamirano, aunque cercano a Díaz, no sólo no participó en el levantamiento, sino que lo condenó enfáticamente. Sebastián Lerdo de Tejada amnistió a los sublevados de la Noria, y el general Jiménez, junto con otros cabecillas locales, la aceptó. A consecuencia de ello, Francisco O. Arce pudo cumplir su periodo como gobernador y, en marzo de 1873, dejó el cargo en manos de Diego Álvarez. Al año siguiente se promulgó una nueva Constitución estatal, que sustituyó a la de 1851, la cual siguió la línea de la reforma liberal.

La proclamación del Plan de Tuxtepec (10 de enero de 1876) propició el renacimiento del conflicto entre los caudillos surianos. La rebelión tuvo varios focos y el general Álvarez mandó al coronel Canuto A. Neri a sofocarlos. Pero como Porfirio Díaz finalmente triunfó, Vicente Jiménez regresó a la entidad ostentando los cargos de jefe de la revolución y gobernador. Los periódicos *El Regenerador* y *Las Termópilas*, editados en Chilpancingo, exaltaron su labor.

Tras sucesivas derrotas militares, Diego Álvarez renunció a la gubernatura. Por su parte, el general Jiménez, en lugar de detener su ofensiva, trató de vencer definitivamente a las fuerzas leales al ahora ex gobernador. Ante esa situación, Porfirio Díaz optó por quitarlo de en medio y sustituirlo por el general Rafael Cuéllar. La destitución de Jiménez sirvió a Díaz para pactar con Álvarez y promover a Canuto A. Neri a la vicegubernatura. Después vendría el último periodo de aquél al frente del ejecutivo. El primer gran cacicazgo político que conoció el estado suriano, iniciado incluso antes de la creación de la entidad por Juan N. Álvarez, perdió en 1885 su control político directo.

LA CENTRALIZACIÓN PORFIRIANA

Durante el porfiriato, la política estatal quedó completamente bajo la tutela del centro. Después del último mandato de Diego Álvarez, el general Francisco O. Arce se encargó del gobierno, aunque aquél continuó dominando el Congreso local. Jalisciense

de origen, concluyó en 1889 su segundo periodo y se reeligió por cuatro años más. Fue un verdadero "porfirito", como llamara Daniel Cosío Villegas a los gobernadores de la época, instalado con el fin de reducir el poder de los cacicazgos regionales en favor de la centralización política. En su honor, el pueblo de Arroyo Grande mudó su nombre por el de Arcelia, vocablo que fusiona su apellido con el nombre de su esposa Celia.

Arce otorgó numerosas concesiones mineras y ferroviarias a los empresarios, hizo algunas obras públicas y, como los gobernadores de otros estados, combatió a bandoleros y salteadores de caminos, que por cierto reparó. Como no poseía una base política local, lo que lo hacía muy dependiente del apoyo de don Porfirio, incorporó a su gobierno a numerosas personas de fuera de la entidad, incluidos científicos y técnicos. Este hecho generó un malestar permanente entre la clase política guerrerense.

Así fuera para tratar de reducir su poder, el gobierno de Arce se vio precisado a tomar en cuenta a Diego Álvarez e, incluso, a buscar su apoyo o por lo menos su neutralidad cuando la situación lo requiriera. Las autoridades federales y estatales no olvidaron el nexo que su padre trabó con los "pintos" de la costa, movilizados tras don Juan en sus acciones políticas y militares.

La reelección de Francisco O. Arce en 1893 dio pie a una revuelta acaudillada por Canuto A. Neri, un aliado eventual tanto de Diego Álvarez como de Vicente Jiménez. Útil a Díaz, aunque con ambiciones políticas propias, Neri nació en Zumpango del Río. Tuvo una carrera larga como militar: participó en el sitio de Querétaro, apoyó el Plan de Tuxtepec y, al triunfo del movimiento, quedó como jefe de las fuerzas federales en la región. Fue vicegobernador cuando Rafael Cuéllar estuvo al mando del ejecutivo guerrerense.

Hacia finales de su segundo periodo gubernamental, Arce abrigó sospechas de que Neri pretendía sublevarse para deponerlo. Como medida precautoria ante un posible levantamiento, el presidente prometió reforzarlo militarmente en varios puntos de la entidad. Arce y Neri tenían además conflictos de otra índole: habían disputado terrenos que ambos reclamaban como propios.

El juez dio la razón al gobernador y, como los expedientes del litigio fueron robados, éste ordenó el cateo de la casa de su rival. Los papeles no aparecieron, pero los criados fueron apresados. En otra ocasión, la policía intentó, sin éxito, detener a Neri en una fiesta realizada en el popular barrio de San Mateo, en Chilpancingo.

Contra las expectativas de Arce, el desafío de Neri llegó por la vía electoral, al disputarle la gubernatura en la contienda de diciembre de 1892. Contaba con el apoyo de Diego Álvarez. La victoria de Arce calentó los ánimos y el grupo de Neri se negó a acatar el resultado oficial. Su carencia de una base política local lo hacía vulnerable ante la acometida de los poderosos de la región. Díaz tampoco estaba resuelto a sostenerlo a toda costa. Decidió prescindir temporalmente de él y puso en su lugar a Mariano Ortiz de Montellano.

Parecía una solución aceptable. No obstante, las huestes de Neri impugnaron el procedimiento de designación, el cual, ciertamente, era bastante irregular. Arce, según la Constitución estatal, debía tomar posesión el 1° de abril de 1893, pero no lo hizo. En lugar de convocar a nuevas elecciones, como estaba previsto en la ley, se nombró a Ortiz de Montellano gobernador interino con la intención de que, sorteada la tormenta, se pudiera reinstalar al jalisciense. Para tal efecto se modificó la Constitución, que ahora permitía al gobernador electo entrar en funciones cuando rindiera protesta, aun cuando no fuera en el día fijado. Mientras tanto, el interino ejercería el cargo.

Con cierta demora, el 6 de agosto del mismo año, los neristas acusaron recibo a través de un plan político expedido en Mezcala. El centro de su argumentación residía en negar la retroactividad de las leyes, hecho que violentaba el orden constitucional y razón por la cual el gobierno de Ortiz de Montellano era a todas luces ilegítimo. Debía convocarse a nuevas elecciones; mientras eso no ocurriera, “el pueblo” otorgaría la gubernatura a Neri. Las armas respaldaban su decisión.

La rebelión se extendió en seis distritos, los situados en la parte central de la entidad, no sólo porque Neri contaba con adeptos

tos, sino también porque tenía el mando de las fuerzas federales destacadas en la región. Díaz siguió una estrategia en dos planos: por un lado, hizo que Arce renunciara a la gubernatura, dimisión que fue aceptada por el Congreso el 11 de noviembre; por el otro, decidió someter a los alzados enviando 8 000 hombres a combatirlos. Muchos procedían de los estados circunvecinos, y otros, de los norteños; estos últimos llegaron por mar a Acapulco.

Acorralado en Mezcala, desde donde quizá pretendía atacar Chilpancingo para después internarse en la sierra, Neri se rindió el 19 de noviembre, después de una persuasiva plática con Manuel Guillén, diputado federal por Guerrero. Para este momento, Díaz ya había logrado neutralizar a Álvarez por medio de un representante que mandó a pactar con él. Una amnistía beneficiaría a quienes depusieran las armas en un plazo no mayor de 15 días.

Dueño de la situación después de someter a los caciques guerrerenses, en enero de 1894 el presidente impuso a otro fuereño, Antonio Mercenario, como nuevo gobernador interino. Neri fue sometido a proceso en la capital de la República y quedó bajo vigilancia federal a su regreso a Chilpancingo. Evidencia de su derrota fue que, en la elección de diciembre de 1895, tanto Neri como Álvarez respaldaron la candidatura de Mercenario. *El Imparcial* (Chilpancingo, 2 de junio de 1895) anticipó: “Continúe el señor Mercenario el camino que ha emprendido y no faltarán ni la cooperación valiosa y eficaz del pueblo que gobierna, ni el elogio imparcial de los hombres honrados”.

Vicente Jiménez perdió la vida en 1894. Sin renunciar nunca al anhelo de volver a gobernar su estado natal, el general zumpangueño murió envenenado en 1897 cuando concurría a un banquete oficial. Dos años después, Diego Álvarez murió en La Providencia. Los tres hombres fuertes que emergieron en el sur después de la Intervención francesa desaparecieron de la escena pública en un lapso de cinco años. Nuevos actores políticos surgidos en el seno de la sociedad porfiriana, pertenecientes varios de ellos a la clase media urbana y rural, ocuparían su sitio y encabezarían la oposición al gobierno de Mercenario, quien se caracterizó por su despotismo, a tal grado que se le recuerda

como uno de los gobernadores más duros en la historia de la entidad. Con frecuencia abandonó el cargo para atender asuntos personales. Se hizo de haciendas y premió a sus allegados con riquezas y poder. Al igual que Arce, se reeligió y acabó por irritar profundamente a los guerrerenses.

Aunque en 1897 su nominación provocó descontento, cuando se postuló para la gubernatura del periodo 1901-1905 alentó el crecimiento de una oposición política dispuesta a tomar el poder. Primero en Guerrero y después fuera de la entidad, la prensa publicó los dichos que la oposición lanzaba en su contra. Ésta vería en un licenciado oriundo de la Tierra Caliente, Rafael Castillo Calderón, al hombre capaz de enfrentarlo en las urnas. Castillo Calderón tenía un pasado porfirista: fue secretario de gobierno en el régimen de Arce y varias veces diputado local. En 1899 organizó en Guerrero la "Gran Junta de Amigos del señor general Díaz". También era un importante propietario agrícola en el norte del estado.

El Congreso declaró a Mercenario gobernador y, como ocurrió en 1893, la inconformidad por el resultado se hizo patente. La violencia tampoco demoró en aparecer. A pesar de que Porfirio Díaz lo apuntaló tanto como pudo, Mercenario tuvo que renunciar antes de tomar posesión. Agustín Mora, hacendado nacido en Puebla, fue designado para ocupar el cargo. La oposición, acosada y perseguida, optó por pasar a las armas. La lucha contra la imposición germinó en Mochitlán, donde se lanzó una proclama revolucionaria que reivindicaba el derecho popular de votar libremente en las próximas elecciones.

Anselmo Bello acaudilló la rebelión, caracterizada por su deficiente planeación, escasa articulación y nula influencia. Díaz envió a Victoriano Huerta a sofocarla. Como sería habitual en él, Huerta fue terrible con los alzados: fusiló a muchos, deportó a otros y persiguió a los demás. Castillo Calderón logró huir de la entidad, pero fue detenido en la ciudad de México e indultado a condición de no volver a Guerrero. Años después se convertiría al maderismo. Su amigo, el terrateniente Anselmo Bello, no corrió con la misma suerte y fue ejecutado en Mezcala.

A pesar de su escaso efecto militar, mucho menor al que tuvo la revuelta de Canuto A. Neri, el movimiento de Castillo Calderón puede ser calificado de precursor de la Revolución mexicana en Guerrero, por su composición social. Su derrota y la intervención militar permitieron a Mora gobernar hasta 1904. En ese año comenzó el gobierno de Manuel Guillén, un porfirista probado, quien dejó el cargo en 1907 después de solicitar una licencia que resultó definitiva.

No obstante las presiones populares y los conflictos con las élites políticas locales, los gobernantes porfirianos lograron imponer su ley en la entidad. Caciques y caudillos surianos fueron neutralizados, dominados o vencidos, como de hecho aconteció en todo el país. Sólo era posible desafiar al régimen a escala nacional por medio de un movimiento que articulara fuerzas políticas y sociales de distinto signo, ya que las revueltas regionales y locales estaban condenadas al fracaso, debido en buena medida a la eficacia con que Díaz había cooptado a la clase política, maniatado a los poderes federales, acabado con sus rivales, controlado el ejército y reducido a su mínima expresión a los líderes regionales.

III. LA MOVILIZACIÓN POPULAR

UNA LÍNEA QUE RECORRE LA HISTORIA guerrerense es la que articula la resistencia con la movilización popular. Desde tiempos prehispánicos, los pueblos mesoamericanos vivieron continuos periodos de guerra, ya fuera para ensanchar dominios, sojuzgar poblaciones y obtener tributos, o bien para hacerse de prisioneros con los cuales alimentar a unos dioses exigentes. Otros pueblos se rebelaron para sacudirse la opresión. También hubo conflictos internos dentro de los mismos pueblos, como suelen aducir antropólogos e historiadores cuando tratan de explicar el colapso de algunas culturas.

Como vimos en el capítulo 1, los yopes enfrentaron la expansión mexicana encabezada por Ahuízotl y se rebelaron contra la dominación española en el siglo XVI. Antes de 1810, hubo en el territorio sureño varios conatos de revuelta local y, a partir de ese año, la Costa Grande nutrió el contingente insurgente. Un reiterado ajuste de cuentas contra los españoles fue la respuesta de los mulatos costeños a viejos agravios. La lucha contra el Primer Imperio también tuvo un bastión en el sur, donde Vicente Guerrero buscó hacerse fuerte en su lucha contra Agustín de Iturbide. Lo mismo ocurrió cuando Anastasio Bustamante lo despojó de la presidencia de la República, aunque esa vez el resultado no le favoreció.

En contrapartida, el periodo virreinal ofreció un panorama más tranquilo, en parte como consecuencia de la mengua de la población indígena, suceso que permitió a los españoles apropiarse más fácilmente de sus tierras. La violencia rural se concentró más en las áreas periféricas de la Nueva España. Sin embargo, el caso colonial estuvo acompañado de un levantamiento campesino general y de la expansión de la violencia agraria, la cual mantuvo una intensidad alta a escala nacional hasta la década de 1930.

El siglo XIX reavivó la protesta rural. La aparición del liberalismo abrió la política a las comunidades indígenas en la medida que las dotó de nuevos instrumentos y recursos para exponer sus demandas. Sin embargo, el mismo liberalismo en el poder detonó otros conflictos, pues con base en esa doctrina se atacaron las formas de propiedad de los pueblos, de tal suerte que hubo una correlación entre el incremento del poder político de los liberales y el aumento de las insurrecciones campesinas.

Durante el porfiriato estallaron en Guerrero varias rebeliones locales contra los prefectos políticos y el alza de impuestos o en favor del reparto agrario. De mayor repercusión fue la de Juan Galeana, ocurrida entre 1890 y 1891 en la Costa Chica. El 16 de enero de 1902 ocurrió un fuerte temblor en las costas de Guerrero, por lo que el secretario de Hacienda, José Yves Limantour, envió 20 000 pesos como ayuda para reparar algunos de los cuantiosos daños. Pero ocho años después se produjo una sacudida más fuerte, de mayores consecuencias y de más amplio alcance geográfico: el diputado Damián Flores, miembro del grupo científico, despachaba en el palacio de gobierno de Chilpancingo cuando comenzó la lucha armada, en 1910. Los Figueroa, Julián Blanco y Jesús H. Salgado, entre otros, reunieron contingentes armados que los llevaron en uno u otro momento a alcanzar el poder, así fuera efímeramente. Salgado fue la cabeza más visible del zapatismo en Guerrero y, en el verano de 1914, estableció en Chilpancingo un gobierno de orientación popular.

El fin de la lucha armada en diversas regiones del país no fue suficiente para contener a los guerrerenses. En 1919, Juan Raulfo Escudero formó el Partido Obrero de Acapulco y dominó el Ayuntamiento porteño. Las medidas populares que impulsó lo dotaron de una apreciable base social y provocaron la ira de la oligarquía local, liderada por varios propietarios de origen español. Tras su muerte, vino el movimiento agrario de los hermanos Amadeo y Baldomero Vidales, proclamado en el "Plan del Veladero" y acremente antiespañol. Más cercanos a nuestros días están el movimiento popular de las principales ciudades del estado que derrocó en 1961 al general Raúl Caba-

llo Aburto y los brotes guerrilleros de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas.

Miradas en conjunto, la resistencia y la movilización popular guerrerenses se han desarrollado en la Montaña y, más señaladamente, en la costa. Desde Morelos, pasando por los Galeana, Juan N. Álvarez, Juan Galeana, Valente de la Cruz, Juan R. Escudero y Amadeo S. Vidales, hasta Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, a los que se podrían agregar los miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, víctimas de los sucesos sangrientos del 28 de junio de 1995; el epicentro de las luchas populares se ha localizado en alguna de las costas y, en ocasiones, ha esparcido su influencia al resto de la entidad.

EL CAMPO

A lo largo del siglo XIX, en las élites políticas mexicanas hubo un consenso sobre la necesidad de incrementar la población del país. Una nación poderosa se apoyaba en la abundancia de brazos y México estaba muy lejos de alcanzar esa situación. El problema de la falta de población no se trató de manera aislada. Así, para la segunda mitad del siglo, las políticas públicas en materia de poblamiento y colonización estuvieron asociadas: poblar el territorio nacional suponía en primera instancia colonizarlo, es decir, establecer control sobre él, dominarlo.

Para atraer a la población extranjera, se legisló con el fin de otorgar incentivos a los inmigrantes. Otro recurso a mano del Estado para promover la colonización fue la venta de los terrenos baldíos. La Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos del 20 de julio de 1863 comprendía dentro de esta categoría a “todos los terrenos de la República que no hayan sido destinados a un uso público por la autoridad facultada para ello por la ley, ni cedidos por la misma, a título oneroso o lucrativo, a individuo o corporación autorizados para adquirirlos”. La ley dio a los propietarios la posibilidad de acumular una gran cantidad de tierras al otorgar a todos los habitantes de la República el derecho

a denunciar hasta 2 500 hectáreas de terreno baldío, “con excepción de los naturales de las naciones limítrofes de la República y de los naturalizados en ellas, quienes por ningún título pueden adquirir baldíos en los estados que con ellos lindan”.

El gobierno federal recibiría un pago en efectivo equivalente a un tercio del precio del terreno baldío, y los gobiernos estatales otro tanto. Los precios fijados a los terrenos fueron realmente ridículos; por ejemplo, una hectárea en Guerrero tenía un precio de un peso y 75 centavos. De esta manera, entre 1863 y 1867 se vendieron en todo el territorio nacional 1 733 468 hectáreas a 309 personas y sociedades por un total de 109 719 pesos.

En medio de ese furor colonizador, en agosto de 1875 Manuel Carrera Sabat encabezó a un grupo de empresarios que pretendía comercializar una inmensa franja del estado de Guerrero. Se encontraba situada en las jurisdicciones de Tela del Río, Ajuchitlán, Coyuca, Zirándaro, Zacatula, Tecpan, Atoyac y Chilpancingo. Parte de su atractivo residía en su vinculación con el proyecto de comunicación interoceánica conectado con la ruta fluvial Atoyac-Balsas: “Las tierras de esta sierra, tan luego como se comiencen a explotar debidamente sus riquísimos minerales, precisamente han de subir de valor sobre el mérito que ya en sí tienen su feracidad y variedad de riquezas vegetales”, destacaba el vendedor.

Riesgos y males fueron minimizados porque “mucho se ha exagerado y supuesto confusamente en lo general de los habitantes de Guerrero, la índole feroz, lo insano de su clima y la *jiricua* o mal de los pintos”. En relación con la naturaleza de los guerrerenses se añadieron algunas consideraciones: “que de su docilidad hayan abusado algunos caudillos revolucionarios o que exacerbados por el rigor de sus invasores hayan sido conducidos hasta el crimen, es una verdad; mas también es que, en la mayor parte del estado, como en ningún otro, no se conoce el robo o plagio: se camina con seguridad”.

Se decía que estas tierras eran de propiedad particular, ya que fueron adjudicadas por remate a Ignacio Celis Rábago el 8 de octubre de 1794. A los clientes se les ofrecía su usufructo o adquisición según cuatro modalidades: usufructo perpetuo, en el

que, de ser el caso, el adjudicatario tendría que dar al dueño 10% de todos los frutos a partir del tercer año; venta directa, a razón de \$52.50 por caballería. La venta en abonos y sin intereses implicaba duplicar la cantidad pagada. Si se hacía por contrato con las compañías colonizadoras, se dividirían equitativamente el terreno entre los propietarios y los colonizadores, quedando a cargo de las compañías los gastos de deslinde y medición.

Esta última opción resultó atractiva para una organización de trabajadores fundada en 1872 en la ciudad de México y denominada el Gran Círculo de Obreros de México. A este respecto, *El Socialista* informó (23 de enero de 1876): "El Gran Círculo ha recibido [...] diferentes solicitudes de distintos cuerpos de trabajadores", y convino con el propietario en "que dichas tierras se dividan en lotes bajo el sistema de tableros americanos, siendo la propiedad del Círculo los números pares, reservándose para él los impares". Para acometer esta labor, hizo al presidente Sebastián Lerdo de Tejada una solicitud modesta: transportar a los colonos a estos terrenos y dotarlos "de las semillas necesarias para su manutención en seis meses, así como de útiles y animales propios para la labranza y armas para su defensa". Después, con la mitad de los productos obtenidos, los ocupantes saldarían el importe del préstamo. No hay pruebas de que la operación se haya concretado.

Más que propiciar la colonización, objetivo constante pero nunca alcanzado plenamente en el siglo XIX, la política gubernamental provocó el acaparamiento de tierras y dio pie al desarrollo del latifundismo. Para la envergadura del proyecto colonizador, y dada la magnitud de las medidas adoptadas, los resultados en esta materia fueron más bien magros. No obstante este revés, en otro campo los sucesivos gobiernos liberales consumaron durante el porfiriato uno de sus objetivos más caros: la privatización del dominio público. Con este fin, las políticas gubernamentales tendieron a dejar de lado la promoción de la inmigración —por la vía de la colonización— y favorecieron simple y llanamente la cesión de los terrenos nacionales a los particulares.

En lo tocante a la propiedad, la expresión jurídica de la doctrina liberal había sido la Ley Lerdo, concebida por Miguel Lerdo de Tejada, ministro de Hacienda del gobierno de Ignacio Comonfort, y promulgada el 25 de junio de 1856. La norma obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas propietarias de fincas rústicas y urbanas a venderlas a los arrendatarios y a entregar al gobierno un porcentaje por concepto de impuestos. En el mundo rural, como han destacado Friedrich Katz y John Tutino, esta disposición significó legalizar la disolución de la propiedad comunal; el paso siguiente sería la expropiación de las tierras campesinas. La propiedad comunal constituía el fundamento de la autonomía de los campesinos. Éste fue el telón de fondo de muchos de los conflictos agrarios ocurridos en todo el país durante la segunda mitad del siglo XIX.

La desamortización de la propiedad corporativa y las leyes sobre deslinde de terrenos baldíos permitieron el crecimiento de las haciendas y el desarrollo de los ranchos a expensas de las comunidades campesinas, de la Iglesia y de los terrenos nacionales, los cuales fueron privatizados progresivamente. Así, hacia finales del porfiriato, la propiedad agraria en Guerrero estaba repartida, aunque no equitativamente, entre las comunidades indígenas, las haciendas y los ranchos (cuadro III.1).

CUADRO III.1. *Nómina de haciendas, pueblos, ranchos o cuadrillas del estado de Guerrero entre los años 1871-1901*

Año	Pueblos	Haciendas	Ranchos o cuadrillas
1871	343	51	328
1880	306	103	583
1894	309	139	637
1901	313	100	901

FUENTE: Jaime Salazar Adame (1987), "Periodo 1867-1910", en *Historia de la cuestión agraria mexicana. Estado de Guerrero, 1867-1940*, México, Gobierno del estado de Guerrero/Universidad Autónoma de Guerrero/Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México, p. 67.

Algunos ejemplos: Carlos Pérez Varela era propietario de cerca de 20 ranchos en Coyuca; Silvestre Jaimes llegó a ser dueño de dos terceras partes de las tierras del municipio de Cutzamala; la Cofradía de las Ánimas poseía buena parte de las tierras del distrito de Aldama. En la Costa Chica había un poderoso grupo de ganaderos compuesto por las familias Miller, Reguera, López Moctezuma, Zamora y Guillén, y en la Costa Grande, unos cuantos comerciantes españoles eran dueños de las propiedades agrícolas aledañas a Acapulco y de muchas otras no tan cercanas. También había inversiones de capital estadounidense y mexicano en esas zonas.

Como se observa en el cuadro III.1, si bien aumentó el número de haciendas en el porfiriato, el incremento mayor y más constante fue el de los ranchos. Mientras que las haciendas eran preponderantes en la costa, en el norte de la entidad se desarrolló la pequeña propiedad agraria, aunque no por ello desapareció la de tipo comunal, ni las haciendas dejaron de tener importancia, aunque ésta era mucho menor que la que poseían en el vecino

CUADRO III.2. *Propietarios de más de 5 000 hectáreas en el norte de Guerrero (1910)*

<i>Nombres</i>	<i>Hectáreas</i>
Miguel Montúfar	22 346.19
Alberto Rivera	19 193.00
Mucio Romero	14 182.40
Emigdio Pastrana	14 160.17
Febronia Gómez	13 831.71
Rafael Castillo Calderón	11 799.41
Atlixtac y Anexas, S. A.	9 357.49
Manuela Mojica	6 825.00
Isaac Mathewson	5 476.50
Julián y Ponciano Salgado	5 200.00

FUENTE: Ian Jacobs (1992), *La Revolución mexicana en Guerrero. Una revuelta de los ranche-ros*, México, Era, p. 90.

estado de Morelos (cuadro III.2). Las haciendas fueron beneficiarias de la desamortización de la propiedad corporativa, si bien fue un tanto tardía en la región. Casi no se conoció el peonaje, aunque se contrataban braceros. Predominaba el arriendo de la tierra a cambio de una renta fija en maíz, pues el pago en dinero era excepcional.

REBELIONES RURALES

El conflicto agrario se alimentó de la tensión entre los pueblos y las haciendas que ensancharon su espacio a expensas de las tierras de aquéllos. En la prensa de la época era constante la inserción de llamados dirigidos por los pueblos indígenas a los poderes federales solicitándoles frenar esta expansión, reconocida en privado por la propia autoridad, como fue evidente con la carta que el gobernador Arce envió al presidente Díaz (Chilpancingo, 30 de marzo de 1892) acerca de un problema suscitado en Ometepc: “Hay en esta localidad un reducido círculo de personas inquietas que [...] esperan seguir dominando la situación en su provecho y en contra de los infelices indígenas, a quienes poco a poco han ido despojando de sus terrenos”.

Otras protestas y revueltas populares fueron propiciadas por la manera como se conducían los prefectos políticos, por las cargas fiscales o incluso por demandas agrarias, como la que en 1884 encabezó en Tepetlapa, bajo la consigna “Tierra, industria y armas”, el “coronel del ejército del pueblo Pascual Claudio”. El “coronel” exigía al gobierno dotar a los jefes de familia de terrenos y animales para poder producir. Unas más tuvieron un móvil religioso.

En 1887, Juan P. Reyes y L. León, del Ejército Regenerador, firmaron una proclama que eximía del pago de contribuciones a varios pueblos de la Montaña. De este y otros conflictos se decía que eran instigados por Diego Álvarez desde su hacienda de La Providencia. Cuatro años después fue asesinado el recaudador y segundo juez menor de San Marcos; el ejército federal intervino para aplacar un conato de rebelión.

Jaime Salazar Adame encontró testimonios de varias insurrecciones violentas en la Colección Porfirio Díaz de la Universidad Iberoamericana. Por ejemplo, el 11 de marzo de 1881, en Zitlala, Avelino Solís, Nazario Herrera y otras personas armadas liberaron de la prisión a Manuel Onofre, Agustín Chepillo y Epifanio Zacarías, mientras gritaban muera al gobierno del estado por las altas contribuciones sufragadas por la población. La represión corrió a cargo del coronel Jesús H. Malda, quien en unas horas detuvo a Solís y a Herrera, así como a los presos fugados.

La inconformidad popular no siempre se manifestó de manera violenta; a veces, apeló al paternalismo de la autoridad central para destituir a los funcionarios locales incómodos. Al menos ése fue el recurso de los habitantes de Acatepec, que en abril de 1892 solicitaron a Porfirio Díaz que, “como padre amoroso”, atendiera la súplica de “sus hijos” y remplazara a Felipe León por Juan López Portillo, “porque como anciano lo conocemos por hombre honrado”, en tanto que el otro, preceptor de la comisaría mayor, “tiene a esta vecindad por esclavos en tantos servicios que exige”.

Movidas por distintos resortes y sirviéndose de recursos variados, estas protestas y rebeliones hacían explícita la tensión entre las autoridades locales y las comunidades de su jurisdicción. Ya fuera por la arbitrariedad con que actuaban o por las medidas económicas y políticas que imponían, no hay duda de que lograban exacerbar los ánimos y provocar la respuesta de la población. Aunque por lo general los personeros del gobierno tendieron a desestimarlas o a verlas como conflictos localizados propiciados por unos cuantos cabecillas virulentos, lo cierto es que siempre hubo personas y grupos dispuestos a seguirlas. Incluso la acusación de que había otros intereses detrás de los de los propios rebeldes, señaladamente los del cacicazgo de Álvarez, mueve a pensar que no se trataba de acciones intrascendentes. Las miradas atentas de la prensa y del presidente Díaz apuntan en la misma dirección.

En la última década del siglo XIX, la rebelión popular de mayor importancia fue la de Juan Galeana en la Costa Chica. Se trataba de un labrador nacido en Ayutla de los Libres que entró en liti-

gio con José Pandal, prefecto político, pues éste hostigaba a su mujer. Aunque se retiró a La Sabana para poner alguna distancia, finalmente se desesperó y acabó matándolo. Para ese momento ya había integrado a una cuadrilla que asolaba la región. Testimonios de su trayectoria como rebelde quedaron asentados en la causa judicial que le instruyó el fiscal Jesús Labastida.

El fiscal lo acusó de varias fechorías: del asalto a la cuadrilla de Chautipa, ocurrido en abril de 1889; del ataque a la plaza de Ayutla y de la liberación de los presos de la cárcel local; de otra incursión allí mismo, en febrero de 1890; de lesiones a Juan Abarca y del fusilamiento del prefecto José Pandal; de rebelión, por haber secundado el Plan Revolucionario de Cornelio Álvarez y Cortés de asaltar el poblado de Cuautepec, y del delito de robo.

En su declaración, Galeana manifestó que la noche del 19 de abril de 1889 fue a Chautipa acompañado de 30 personas con la intención de atrapar a Rosalio Loeza. Contraviniendo la orden de Eugenio Ojendi (otro de los cabecillas) de matarlo, lo dejó escapar. En su huida, el antes cautivo “mató a Bruno Catalán y [a] Serafín Hernández, que estaban comprometidos en asesinar al expresado Loeza”. Su casa fue incendiada, según Galeana, “por los vecinos de la cuadrilla de Chautipa”.

También dijo que en otra acción se propuso apresarse al prefecto Pandal porque éste lo había ofendido. El relato de este ajuste de cuentas es como sigue: como a las dos de la mañana “de un día cuya fecha no recuerda”, acompañado por Leandro Soto, Rafael Villasana, Fernando Neri y Chon Mayo se dirigió a la cárcel de Ayutla y, “abriendo las puertas, logró sacar la prisión con el objeto de que ésta lo ayudara a aprehender al señor Pandal, pero como no pudo lograrlo, se retiró solo para Tecumulapa”. Dos de sus compañeros fueron muertos en Cuautepec.

Allá se presentó ante él Pomposo Morales, quien se dijo también “ofendido del señor Pandal por un poco de ganado que le había quitado, y que era conveniente acordar la manera de matarlo”. Decidieron reunirse días más adelante en un lugar conocido como “Mal Paso”, cercano a Ayutla, y convocar a más personas para detener al prefecto. Atacaron de madrugada y, “como a las

seis de la mañana, lograron ocupar la plaza aprehendiendo el declarante personalmente al señor Pandal, en virtud de que uno de los mozos de este mismo señor denunció que se hallaba dentro de un horno”.

El prefecto fue entregado a Morales, “quien resolvió desde luego matarlo”. Al atardecer fue fusilado en Tejería, disparando sobre él “tres vecinos de Cruz Grande y dos de la hacienda de San José”. Galeana y Morales se apoderaron de los objetos personales de Pandal, además de sus armas y caballos, aunque ni uno ni otro “cometieron robos de ninguna naturaleza en el pueblo de Ayutla, ni vejaron a ningún otro individuo, y sólo Morales exigió a don Patricio Gazón cien pesos”. Después de la acción, la gavilla se dispersó.

Casi un mes después, Galeana recibió un recado de Morales en el que le indicaba que se hiciera presente en Cruz Grande. “Allí se encontró con un general llamado Cornelio Álvarez y Cortés, cuyo individuo indicó a Morales que traía facultades para levantar a los pueblos contra el gobierno.” Galeana no se comprometió a ello, pero “aceptó acompañar a dicho general, y los dos, con cien hombres armados con rifles de 14 adarmes, se dirigieron para Cuauhtepic con el fin de levantar a la gente”. Morales, entretanto, con un contingente armado enfiló hacia la barra de Teconapa. En Cuauhtepic, Arcadio Chona “les proporcionó gente, unas cuantas armas, pólvora y plomo”. A los tres días tuvieron su primer encuentro con las fuerzas armadas. Los rebeldes fueron batidos.

Entonces, Galeana regresó a Tecomulapa y permaneció únicamente un día allí. En seguida “se echó a huir con su familia, viniendo a vivir abajo del río Chacaliuitla, en donde estuvo como un mes”. Posteriormente se dirigió hacia El Tamarindo a cobrar un adeudo de cinco pesos. Allí fue atacado y sufrió siete lesiones, “cuya curación se la fue a hacer en unas cuevas que existen en un cerro que está cerca de San Marcos”. Acosado por la persecución, dejó la Costa Chica y se encaminó hacia la Costa Grande. “Ya de vuelta, en El Papayo, lo hirieron y fue aprehendido” en un sitio llamado La Tamalera. La lesión que sufrió en la pierna lo dejó al borde de una amputación. Esto ocurrió en enero de 1891.

El prefecto del distrito de Tabares, y después otras autoridades, abundaron en detalles acerca de la captura "del cabecilla" y sobre las implicaciones políticas de la rebelión. En primer lugar, informaron a Porfirio Díaz que el movimiento en sí no tenía un signo de este tipo. Los desmanes del prefecto Pandal habían desatado la violencia, ya que con ellos humilló a la población local; la respuesta era, si no legítima, por lo menos explicable. Sin embargo, sectores ajenos al conflicto se habían beneficiado de la oportunidad de desestabilizar al gobierno del general Arce. En concreto, los allegados de Diego Álvarez medraban con él.

Es más, Galeana fue detenido en "terrenos propiedad del teniente coronel don Matías Flores, hijo político del señor don Diego Álvarez", después de esconderse allí durante un mes. En consecuencia, el acusado era sólo un individuo agraviado que simplemente quería cobrar venganza. Otras personas se le sumaron porque Pandal "era odiado en el distrito a causa de sus exacciones injustificadas, de los despojos que había consumado y de sus arbitrariedades insufribles, tanto que si él no lo hubiera matado, habría sobrado gente que lo hubiera hecho". Cornelio Álvarez y Cortés, junto con Pomposo Morales, fue el conducto por el que se "entendieron los alvaristas con Juan Galeana".

Otras acusaciones que pesaban sobre Galeana eran las de haber realizado una incursión en Cuauhtepac en abril de 1890; de autorizar el plagio de Francisco Romano y Simón Lobato, consintiendo en el robo de la casa del primero, y de asesinar a Fermín Padua, juez menor de aquel lugar. Galeana negó tales afirmaciones y dijo que, aunque "estaba presente cuando tuvieron lugar estos hechos", no pudo evitarlos "porque no tenía mando alguno sobre la gente de Morales, tanto más que allí se encontraba también Cornelio Álvarez y Cortés".

Después de que se le leyeron todos los cargos y se le presentó "como trastornador del orden y la paz pública, en unión de Pomposo Morales, Cornelio Álvarez y Cortés y otros, fungiendo como uno de los jefes principales del vandalismo", Galeana alegó en su defensa "que él no era el jefe principal, sino Cornelio Álvarez y Cortés" y que incluso éste le había conferido "el grado

de coronel". Agregó que no se pudo separar del grupo, pues, una vez metido en él, "no le quedaba otro recurso que seguir con los mismos sublevados". Por su parte, el fiscal pidió para Juan Galeana una pena de 18 años de prisión, "que deberá sufrir en el lugar que tenga a bien determinar el tribunal". Su destino final fue San Juan de Ulúa, donde pereció ahogado.

El resto de la gavilla continuó asolando la región y las autoridades persiguiéndola. En julio de 1891 cayeron Sabino y Arcadio Deloya en la Costa Chica, en tanto que Pomposo Morales y Nicolás Rafaela seguían merodeando por los bajos del municipio de Cruz Grande. "Beneficiados por la espesura de los bosques, han podido aún sustraerse a la acción de la justicia", decía un informe. Otros más vivían en Xaltianguis o "estaban a corta distancia de La Providencia", lo que hacía necesario dirigir hacia allá una fuerza armada guiada por personas conocedoras del terreno.

LA REVOLUCIÓN

El régimen porfiriano pretendía lograr la paz y el orden y generar las condiciones propicias para un despegue económico sustentado en la coinvertión extranjera y nacional impulsada por una legislación permisiva en materia de propiedad y concesiones. Un contexto internacional favorable hizo posible reducir el peso de la deuda externa y lograr la expansión económica en los lustros finales del siglo xix. Sin embargo, al comenzar el siglo xx se hicieron evidentes las limitaciones del proyecto y la vulnerabilidad de la economía mexicana ante las sacudidas económicas externas. Cuando se inició la Revolución, el "milagro" económico porfiriano había dejado de serlo.

Como aconteció con las reformas borbónicas del siglo xviii, la modernización porfiriana no fue asimilada por la sociedad política y acabó en una gran movilización social que socavó los fundamentos del propio régimen. Al respecto, John Womack Jr. ha señalado: "Más que entre las clases bajas y altas, la lucha que empezó en 1910 fue entre elementos frustrados de la clase

media y elementos favorecidos de las mismas clases". En esta lucha, abunda, "intervinieron masas populares, pero de forma intermitente, con diferencias regionales, las más de las veces dirigidas por la clase media, menos en causas económicas y sociales que en una guerra civil burguesa".

Aunque realizó en parte el sueño liberal de crear una clase media, don Porfirio fue incapaz tanto de abrir un ámbito de representación a los nuevos actores sociales como de resolver su propia sucesión presidencial. A la par, despuntó en las ciudades una opinión pública atenta a los acontecimientos nacionales e interesada en intervenir en los asuntos públicos. Periódicos, círculos, clubes y partidos fueron espacio de debate y de elaboración de una alternativa política al régimen, así como de formación de algunos de sus dirigentes. El Partido Liberal Mexicano, encabezado por los hermanos Flores Magón, el movimiento reyista y el Partido Antirreeleccionista, dirigido por Francisco I. Madero, aglutinaron a una parte de la oposición. Mientras tanto, en el mundo rural las añejas disputas agrarias, los más recientes conflictos por el poder local e incluso las últimas contiendas electorales definían a una porción significativa de los futuros actores del conflicto revolucionario.

De esa clase media procedía una familia de rancheros asentada en Huitzucó, en el norte de Guerrero, la cual estableció un poderoso cacicazgo que relevó el que fincaron los Álvarez en el siglo XIX, que dominaría la región y que, con la Revolución, extendería su influencia en toda la entidad: los Figueroa. Se dice que la familia llegó al estado en la época colonial procedente de Cotija, Michoacán. Mudó varias veces de residencia hasta instalarse finalmente en la rancharía de Quetzalapa, en el municipio de Huitzucó. Allí poseía una importante mina de mercurio Manuel Romero Rubio, suegro de Porfirio Díaz. Ésta constituía el eje de la economía y la política locales. Antonio Mercenario administró la empresa hasta 1894, cuando, como ya vimos, ocupó la gubernatura guerrerense.

Los Figueroa formaron parte del grupo opositor que desafió en el ámbito municipal el poderío político de los administrado-

res de la mina. Como apunta Ian Jacobs, estudioso del cacicazgo figueroísta, esta oposición tenía una orientación liberal y destacaban en ella los nombres de Francisco, Rómulo y Ambrosio Figueroa, Martín y Félix Vicario, Fidel Fuentes, Urbano Astudillo, Ireneo Robles, Miguel Tejada, Francisco de P. Castrejón y José Castrejón Fuentes. Entre 1884 y 1910 controlaron varias veces el gobierno de Huitzucó. Cuando creció el movimiento de Rafael Castillo Calderón, sumaron sus fuerzas a las de él. La represión que se desató luego en contra de los opositores obligó a varios a refugiarse en Jojutla, Morelos. Controlaban el ayuntamiento local al momento en que Madero inició su campaña en pos de la presidencia. Cuando Octavio Bertrand, agente maderista, llegó a tierras guerrerenses, encontró a un núcleo opositor dispuesto a escucharlo. Formarían el Club Juan Álvarez.

La actividad de estas y otras fuerzas opositoras guerrerenses era observada constantemente por las autoridades porfirianas. En diciembre de 1910, Delfino Castro Alvarado fracasó en su intento por realizar un levantamiento armado en Tepecoacuilco. Al mes siguiente, fueron detenidos Matías Chávez y José Inocente Lugo, abogado oriundo de la Tierra Caliente que después sería gobernador, acusados de instigar a la rebelión. Por esas fechas, dos grupos estudiantiles procedentes de la ciudad de México, encabezados por Vicente J. González y Miguel F. Ortega y financiados por Eucaria Apreza, próspera terrateniente y comerciante de Chilapa, fueron dispersados antes de entrar en acción. Mientras tanto, el Club Juan Álvarez preparaba su propia insurrección. A partir de este momento, para bien o para mal, los Figueroa quedarían indisolublemente ligados a los destinos de la entidad.

La familia Figueroa encabezó el primer grupo guerrerense que se levantó en armas durante la Revolución. Ambrosio y Rómulo Figueroa, Martín Vicario y Fidel Fuentes, al frente de un grupo compuesto fundamentalmente por rancheros, proclamaron el 12 de febrero de 1911, en Huitzucó, su adhesión a la causa maderista y el respaldo al "levantamiento de nuestros valientes y agueridos compatriotas del norte de la República". Demandaban una

república de “ciudadanos dignos” y desconocían “al actual gobierno porque no lo hemos favorecido con nuestro voto”.

El “Manifiesto al Pueblo Suriano” denunciaba la autocracia de Díaz, su falta de respeto a la Constitución, la reelección del Ejecutivo, el incumplimiento de las promesas hechas en los planes de La Noria y Tuxtepec, la supresión de la división de poderes y de la autonomía municipal, la subordinación incondicional de los gobernadores de los estados y el acaparamiento de los cargos públicos por parte de los “científicos”, lo que orillaba a quien “quiere prosperar” a “sacrificar su dignidad y a afiliarse en el servil grupo de amigos del presidente, o a resignarse a vivir a merced de la insaciable ambición de los caciques”.

El día 25, Ambrosio Figueroa lanzó en Atenango una proclama que reforzaba los argumentos esenciales del manifiesto, exigiendo “un gobierno democrático” y la defensa de la integridad de la República. Las demandas se sintetizaban en cuatro puntos: 1) desconocimiento del gobierno de Díaz; 2) su renuncia y sustitución provisional a cargo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 3) eliminación de las jefaturas políticas y su remplazo por los ayuntamientos, y 4) cancelación de las elecciones secundarias y elección directa y popular de todas las autoridades. Figueroa fue nombrado general en jefe del autodenominado Ejército Libertador del Sur. El 17 de abril, un agente maderista, Guillermo García Aragón, lo confirmó en el puesto. Cinco días después, en Jolalpan, Puebla, Zapata y Figueroa se reconocieron recíprocamente como jefes militares de sus respectivos territorios.

El inicio de las hostilidades bélicas no había sido del todo satisfactorio. Antes de terminar el mes, las tropas del capitán Manuel Arroyo Limón derrotaron al Ejército Libertador del Sur, compuesto aproximadamente por 300 hombres, después de varias horas de combate. Los Figueroa no se destacarían por ser grandes estrategias militares, aunque siempre que pudieron se beneficiaron de su condición de pioneros de la lucha armada en la entidad. Pero el brote insurreccional comandado por ellos no fue el único ocurrido en el territorio. También a principios de 1911 Julián

Blanco inició su lucha y logró esparcir el maderismo en el centro del estado y en la costa. Jesús H. Salgado, un propietario agrícola con intereses en la minería, se levantó en Teloloapan, Enrique Añorve se sublevó en Ometepec y Juan Andrew Almazán hizo lo propio en Tlapa. Silvestre G. Mariscal se rebeló en Atoyac.

Mariscal había nacido en Atoyac y administraba la oficina de correos cuando estalló la Revolución. Según su propio relato, durante un tiempo volvió a sus negocios mercantiles hasta que recibió una carta de Octavio Beltrán, quien lo exhortó "a que revolucionara la Costa Grande". En enero de 1911, después de una entrevista personal con Beltrán, resolvió levantarse en armas. Para junio de ese mismo año ya ocupaba Acapulco, con la ayuda de Arnulfo Radilla.

Teófilo Escudero, el último gobernador porfiriano que tuvo Guerrero, renunció después de las tomas de Iguala, encabezada por los Figueroa y por Martín Vicario, y de Chilpancingo, a cargo de Julián Blanco. Este hecho acentuó la autonomía *de facto* que alcanzó la entidad en el transcurso de la lucha armada, de la cual surgió hegemónica la facción encabezada por los Figueroa, que incluso había negociado antes un armisticio con Porfirio Díaz, lo que, en los hechos, reforzaba su carácter de jefes de la revolución guerrerense. Una de las razones de esta hegemonía fue su estrecha alianza con los hacendados de la región.

Francisco Figueroa fue designado gobernador provisional en una junta de jefes militares celebrada en Iguala el 16 de mayo de 1911, la cual no incluyó a todos los cabecillas rebeldes. El mayor Fidel Fuentes se opuso a la designación arguyendo que el cargo debería recaer sobre alguien que poseyera una formación militar. Madero ratificó a Figueroa al poco tiempo. El nuevo gobierno guerrerense se proponía reducir algunos impuestos y eliminar otros, apegarse a los lineamientos políticos trazados por Francisco I. Madero, cancelar el Congreso local "mientras se restablece el orden y se convoca a nuevas elecciones de representantes del pueblo" y realizar en Chilpancingo una asamblea popular, "integrada por un representante de cada municipio del estado", que designaría al gobernador interino. Este puesto debería ser ocu-

pado por un civil, responsable de emitir la convocatoria a las elecciones de gobernador constitucional y de diputados al Congreso local.

El gobernador Figueroa, aunque cumplió por lo menos en parte las promesas que hizo su familia cuando se levantó, al abolir las prefecturas políticas y los juzgados especiales, restablecer el municipio libre y cancelar algunos impuestos, no logró dejar la gubernatura en manos del coronel Martín Vicario, uno de los suyos, tras las elecciones estatales de finales de 1911. José Inocente Lugo ejerció la gubernatura del 1º de diciembre de ese año al 31 de marzo de 1913. Los Figueroa acusaron a Lugo de advenedizo. Madero, de todos modos, no dejó desprotegidos a los Figueroa, ya que les había concedido el privilegio de conservar el mando de sus "colorados", soldados ataviados con camisa roja, cuando ordenó el desarme de los grupos rebeldes.

Díaz tardó unos cuantos meses en caer. El 21 de mayo de 1911, sus representantes firmaron un acuerdo con Madero que ponía fin a la insurrección y que lo obligaba a dimitir. Se instaló entonces un gobierno presidido por Francisco León de la Barra, ministro de Relaciones Exteriores, a quien, de acuerdo con la Constitución, le correspondía sustituir al presidente. Por otra parte, hacia finales de septiembre, Ambrosio Figueroa fue nombrado gobernador del estado de Morelos, con la reticencia de la familia, que pensaba que ello debilitaría su control sobre Guerrero. Esto fue posible gracias a la promoción que le hicieron comerciantes y terratenientes morelenses.

En un manifiesto expedido en Cuernavaca el 25 de septiembre, Ambrosio Figueroa fijó su posición ante el problema agrario: afirmó que no estaba en su mano resolverlo, que él se había alzado en armas únicamente para recuperar las libertades que había conculcado la dictadura, las cuales consideraba ya recuperadas; su papel sería garantizar el orden. Así, cuando los zapatistas reiniciaron el reclamo agrario, Figueroa se dio a la tarea de reprimirlos. Después de perder el apoyo de Madero, dejó el cargo el 18 de enero de 1912. A su regreso a Guerrero fue retirado de la jefatura del ejército en la entidad. A mediados de ese año,

un balazo accidental lo dejó tullido de una pierna. El 23 de junio de 1913, las tropas huertistas lo asesinaron junto con su primo Odilón y miembros de su estado mayor.

El 18 de marzo de 1911, comunidades campesinas de los estados de Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Campeche, Puebla y el Distrito Federal habían proclamado, en la sierra de Guerrero, el "Plan Político Social" que, según François-Xavier Guerra, fue redactado por conspiradores clasemedieros de la ciudad de México que después se dispersarían en distintos grupos revolucionarios. En nombre de los pueblos guerrerenses firmaban el plan Joaquín Miranda padre y Joaquín Miranda hijo.

El texto, a diferencia del ideario figueroísta, no sólo quería "libertades", sino que abogaba por reformas sociales profundas "exigidas por las necesidades de la generación contemporánea". Lograrlo era factible, puesto que "el pueblo es el soberano único y el supremo legislador" y su parecer estaba reflejado en el documento, que comienza defendiendo las garantías individuales, atropelladas por el régimen porfiriano, para después criticar las reiteradas reelecciones de Díaz. Más adelante plantea el desconocimiento de todas las autoridades "en virtud de las omisiones, fraudes y presiones que tuvieron lugar en las elecciones pasadas". En contrapartida, reconoce a Madero como presidente provisional y jefe supremo de la Revolución y proclama "como ley suprema la Constitución de 1857, el voto libre y la no reelección".

En materia social, pugna por la federalización de la enseñanza; la protección de "la raza indígena, procurando por todos los medios su dignificación y su prosperidad"; la devolución a sus antiguos dueños de las propiedades usurpadas; el aumento de los jornales agrícolas y urbanos para los trabajadores de uno y otro sexo; la jornada laboral de un máximo de nueve horas; la obligación de las empresas extranjeras de contratar por lo menos a la mitad de trabajadores mexicanos; la reducción de los alquileres a la población pobre de las ciudades; la construcción de viviendas "higiénicas y cómodas", pagaderas a plazos largos, para "las clases obreras"; el arrendamiento de las tierras incultas, y la abolición de todos los monopolios.

El 1° de octubre de 1911, contando con más de 50% de los votos, Francisco I. Madero, candidato del Partido Progresista Constitucional, ganó la elección presidencial. José María Pino Suárez alcanzó la vicepresidencia. Durante su régimen, la economía vivió un proceso de crecimiento y se extendió la organización de sindicatos obreros en los sectores económicos de punta. Dentro del ramo textil y en algunos oficios urbanos se verificaron huelgas. Se constituyó en la ciudad de México la Casa del Obrero, de influencia anarquista. También se formó el Departamento de Trabajo. El campo continuó siendo un polvorín, en particular en territorio zapatista, donde se le acusó de no resolver satisfactoriamente el problema agrario.

El zapatismo tuvo presencia en Guerrero con Pablo Barrera, quien, en Tepecoacuilco, conminó a los campesinos a dejar de pagar las rentas a los propietarios. Pero la figura más importante de esa corriente revolucionaria fue Jesús H. Salgado, quien no había quedado conforme con la designación de Francisco Figueroa como gobernador provisional y se levantó en su contra. Rebasó por la izquierda al gobierno de José Inocente Lugo y, a principios de 1912, tomó los poblados de Tepecoacuilco, Balsas, Teloloapan, Chilapa, Iguala y Tixtla y asedió Acapulco. El gobernador lo definía como "magonista". Salgado se sumaría después a la lucha de los zapatistas morelenses y regresaría a territorio guerrerense a combatir a Huerta.

La fracasada rebelión antimaderista de Félix Díaz, sobrino de don Porfirio y con apoyo de los "científicos", fue secundada en Guerrero por Julián Radilla, quien se apoderó de una amplia porción de la Costa Grande. Más adelante, Silvestre G. Mariscal, que ya había tenido fuertes enfrentamientos con los Figueroa, los cuales culminaron con su encarcelamiento en Acapulco, se sumó al alzamiento. Compondría su ejército con los famosos pintos de la Costa Grande. El cuartelazo de La Ciudadela tendría en él a uno de sus seguidores. Del otro lado, Ambrosio Figueroa, Julián Blanco y Juan de la Luz Romero acordaron en Chilpancingo combatir al huertismo. Guerrero se fragmentó en zonas de influencia de las distintas facciones: los Figueroa controlaban

Iguala y Huitzucó; Julián Blanco dominaba Acapulco; Salgado la Tierra Caliente, y Mariscal la costa oeste.

Mientras permaneció en el cargo, a José Inocente Lugo no le quedó más remedio que reconocer la autoridad de Victoriano Huerta, como hicieron casi todos los gobernadores del país, excepción hecha de Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila. Al finalizar su régimen, el general Manuel Zozaya se hizo cargo del gobierno. Ocuparía la silla hasta febrero de 1914. Zozaya, antiguo miembro del ejército federal, representó al régimen huertista en la entidad y se dedicó a reprimir a los núcleos rebeldes. Su misión fue poco exitosa: Gertrudis G. Sánchez capturó Zirándaro; Julián Blanco se levantó en Dos Caminos y se apoderó de Tierra Colorada y San Marcos; los Figueroa tomaron Tepecoacuilco, Metlapa y Mezcala. Chilapa y Tixtla también fueron dominadas por los rebeldes, aunque la capital se resistía a caer.

La sublevación de la guarnición tlapaneca facilitó el avance sobre Chilpancingo. El propio Emiliano Zapata estableció su cuartel general en Tixtla y, en marzo de 1914, cercó la capital. Encarnación Díaz, Heliodoro Castillo, Julián Blanco, Pedro Aranda y Jesús H. Salgado reforzaron las posiciones del general morelense, que procuró evitar un ataque frontal enviando destacamentos a realizar emboscadas. El asalto final se consumó después de 15 horas de combate. Cuando las fuerzas huertistas evacuaron la plaza, fueron perseguidas hasta Mochitlán. Un testigo declaró que sólo seis meses después pudo regresar a Chilpancingo.

El 5 de abril, en Tixtla, Emiliano Zapata, Jesús H. Salgado y Encarnación Díaz dirigieron un manifiesto al pueblo mexicano que censuraba a los gobiernos de Díaz y Huerta y que calificaba de "sucios" los Tratados de Ciudad Juárez, que llevaron a la presidencia a Francisco León de la Barra. A Madero lo tildaban de traidor. Opuesto a ellos, "el verdadero pueblo oprimido" había enarbolado el "Plan de Ayala". Los combatientes zapatistas, dice el documento, "luchamos por ideales y no por ambiciones bastardas, y [...] no somos bandidos, como acostumbra llamarnos el mal gobierno ilegal". Ofrecía la amnistía a todos los soldados de tropa y "a aquellos individuos que directa e indi-

rectamente ayudaron al mal gobierno ilegal de Huerta". A este último y a los jefes y oficiales del ejército federal prometía indultarlos siempre que no fuesen responsables de delitos del orden común. Aunque contaban con el apoyo de Zapata, los guerrerenses mantuvieron autonomía respecto al mando de Morelos.

La victoria zapatista llevó a Salgado a la gubernatura; fue ratificado en el cargo el 8 de octubre de 1914, en una reunión de oficiales. Designó a Brígido Barrera secretario particular. Antes de ser ratificado, Salgado se había hecho llamar "director general del estado" y, al parecer, contaba con una base social conformada por campesinos pobres, sin tierra, muchos de ellos indígenas. Su régimen, según cuenta Marcelo González Bustos, no reconoció las deudas de los gobiernos anteriores; fijó un salario mínimo de un peso diario para los jornaleros con el fin de que "desde hoy el trabajo predomine sobre el capital y no el capital sobre el trabajo"; prohibió las tiendas de raya; reorganizó los municipios y retiró de los cargos a las antiguas autoridades; eliminó las prefecturas políticas; emitió billetes; fundó el Banco Revolucionario del Sur; instaló escuelas; expropió haciendas, incluida una de Eucaria Apreza, y repartió tierras entre los campesinos. El 8 de junio de 1919, Salgado murió a manos de las fuerzas del general obregonista Fortunato Maycotte.

El Banco Revolucionario del Sur se fundó con una emisión de 10 millones de pesos, garantizada con todo el metal extraído de las minas de la entidad, con las haciendas de fundición, expropiadas o adquiridas por compra, y con las industrias manufactureras cuyo producto rebasaba un valor de 40 000 pesos anuales. Se entregaría un millón de pesos a las víctimas de la Revolución; otro tanto se emplearía en el fomento de la industria agrícola; un millón más se erogaría por indemnización de los deslindes de tierra y se darían 50 000 pesos mensuales al gobierno de Morelos mientras restablecía el orden en su territorio. Funcionaron sucursales en los poblados principales.

Derrocar a Huerta no fue fácil. Al comenzar 1914 había afianzado su poder: dominaba militarmente dos tercios del territorio nacional, controlaba todos los puertos y con maniobras hábiles

había reducido a los grupos de interés. Tenía ya apoyos sociales; no obstante, carecía del respaldo del gobierno de los Estados Unidos, que lo veía como un agente de las empresas petroleras británicas. Los estadounidenses levantaron el embargo de armas a los constitucionalistas y éstos se reagruparon.

Cuando Huerta fue derrotado, después de una gran ofensiva militar proveniente del norte, tres grupos armados luchaban por el poder en Guerrero: los zapatistas de Salgado, los carrancistas, dirigidos por Julián Blanco, y los antiguos huertistas, encabezados por Silvestre G. Mariscal, que ahora se habían pasado al bando constitucionalista. Salgado y Blanco rompieron después de que derrotaron a los huertistas. Blanco, que fue reconocido por Carranza como jefe militar del constitucionalismo en la región, desplazó a los zapatistas de Chilpancingo y alcanzó la gubernatura el 26 de diciembre de 1914. Ya en el cargo, enfrentó sin éxito a Mariscal, quien, después de deponerlo, lo mandó asesinar cuando estaban en prisión él y su hijo Bonifacio.

Enterado de la muerte de Blanco, Carranza designó gobernador al teniente coronel Simón Díaz, cercano a Mariscal, que ocupó el puesto del 11 de agosto de 1915 al 7 de noviembre de 1916. Rafael Castillo Calderón, coronel de las fuerzas mariscalistas, había rechazado el ofrecimiento. Sin embargo, las riendas del poder estaban en las manos de Mariscal, quien por propia iniciativa acometió contra los zapatistas: en el norte del estado batió a Encarnación Díaz y a Heliodoro Castillo. Consciente de que Mariscal era el hombre fuerte del momento, Carranza lo nombró cabeza del ejecutivo estatal en noviembre de ese mismo año. El 6 de mayo de 1917, fungiendo Mariscal como gobernador provisional, el Congreso guerrerense promulgó una nueva Constitución política que derogaba la del 29 de noviembre de 1880.

La intención de Mariscal de dominar los territorios contiguos a Guerrero y la manera como ejerció el mando, que acentuó los enconos en la entidad, llevaron a Carranza a retirarlo del cargo cuando tuvo la suficiente fuerza para hacerlo. En diciembre de 1917, Mariscal fue aprehendido y se le instruyó un juicio por insubordinación y abuso de autoridad. Lo reemplazó Julio Adams.

Pero Mariscal no carecía de adeptos en Guerrero, de tal forma que su destitución propició una revuelta que se prolongó hasta octubre del año siguiente. Conjurada ésta, la puerta del regreso al poder se abría a los Figueroa de par en par: Francisco Figueroa sería gobernador sustituto provisional de enero de 1919 a marzo de 1921.

En 1920, Guerrero se había convertido otra vez en escenario de la política nacional. El hostigamiento a la campaña presidencial de Obregón, quien desafiaba el intento de Carranza de imponer a Ignacio Bonillas, condujo a la detención de varios de sus adeptos y a la represión abierta de su movimiento, a la vez que obligó al general norteño a escapar de la ciudad de México en abril. Viajó escondido en el ferrocarril del Balsas. En la estación de Iguala, Rómulo Figueroa estuvo presto a recibirlo. El general Héctor F. López, que en nombre del carrancismo había combatido a los zapatistas en la Tierra Caliente, se adhirió también a la causa del sonorenses. Lo mismo harían los diputados locales Teófilo Olea y Leyva y Alejandro Sánchez, así como Rodolfo Neri, hijo de Canuto y miembro del Partido Liberal Constitucionalista, organización que el 9 de febrero había incorporado a su seno al Centro Director Obregonista, presidido por Fernando Iglesias Calderón.

Con la anuencia del gobernador, el 20 de abril la legislatura guerrerense desconoció al gobierno carrancista. Esa noche, desde el balcón del palacio de gobierno, el licenciado Olea y Leyva, el dirigente obrero Luis N. Morones y Álvaro Obregón hablaron a los chilpancingueños. Por su parte, Francisco Figueroa lanzó un manifiesto que ratificaba la decisión del Congreso.

El texto de la legislatura suriana hace recordar la proclama con que la familia Figueroa se levantó en armas contra Porfirio Díaz en 1911: acusaba a Carranza de haber “puesto en práctica procedimientos apartados completamente de las leyes que nos rigen, con la ya indiscutible mira de violar el voto público” al imponer gobernadores en los estados de Veracruz, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León y Tamaulipas y ayuntamientos en el Distrito Federal; de no respetar la Constitución, atropellando

las garantías individuales y pasando por encima de las decisiones del Congreso y de las resoluciones de la justicia federal; de recompensar sólo a los favoritos, haciendo de lado a funcionarios y militares honestos; de dilapidar los recursos públicos en campañas proselitistas y de convertirse “en jefe de un partido político, a lo que no tiene derecho”.

Firmaban el documento Alejandro Sánchez, diputado presidente por el distrito de Guerrero; Leopoldo Carrasco Cardoso, diputado secretario por el distrito de Hidalgo; Desiderio Borja, diputado secretario por el distrito de Mina; Marcos V. Castillo, diputado por el distrito de Abasolo; Rosendo H. Beltrán, diputado por el distrito de Aldama; Gonzalo N. Ramírez, diputado por el segundo distrito electoral de Álvarez; Fidencio Barrera, diputado por el distrito de Allende; Teófilo Olea y Leyva, diputado por el distrito de Bravos; Ramón Solís, diputado por el distrito de Galeana; Policarpo Sierra y Guevara, diputado por el distrito de Morelos; Henoc Tabares, diputado por el distrito de Tabares; Heladio Ayala, diputado por el distrito de Zaragoza, y Antonio Estrada, diputado por el distrito de Alarcón.

Diez días después, Obregón lanzó en Chilpancingo un manifiesto en el que recordaba que el principio esencial de la revolución maderista había sido la libertad del sufragio, que Venustiano Carranza traicionaba. También, como en el texto del legislativo guerrerense, le reclamaba que hubiese olvidado “su alta investidura de suprema autoridad”, convirtiéndose “en jefe de una *bandera política* [que] puso al servicio de ésta todos los recursos que la nación le confió para su custodia”. Por estas y otras razones era imposible continuar la campaña política por la vía civil “e indispensable empuñar de nuevo las armas para reconquistar, con las armas en la mano, lo que con las armas en la mano se trata de arrebatar”. El *Manco de Celaya* concluía el texto poniéndose al frente del Gran Partido Liberal y a las órdenes del gobernador del estado de Sonora, Adolfo de la Huerta, que el 23 de abril había proclamado el Plan de Agua Prieta.

Hay que recordar que el plan censuraba a Carranza por haberse convertido en cabeza de un partido en lugar de comportarse

como presidente de una nación, criticaba su intromisión en los asuntos locales y lo acusaba de violar la soberanía de los estados y de haber desvirtuado “radicalmente la organización de la República”; ratificaba la Constitución de febrero de 1917 como la Carta Magna de la nación y ponía a Adolfo de la Huerta a la cabeza del Ejército Liberal Constitucionalista. Asumiéndose como “Movimiento Reivindicador de la Democracia y de la Ley”, la rebelión de Agua Prieta destacaba la soberanía estatal en contraposición al centralismo político. Esta propuesta debió haber sonado muy bien en los oídos de los grupos políticos guerrerenses, que rápidamente, como acabamos de ver, se adhirieron al movimiento.

El oportuno apoyo de los Figueroa a Obregón no les alcanzó para establecer un dominio duradero del ejecutivo estatal: en buena medida les ocurrió lo mismo que en los tiempos del régimen maderista. Rodolfo Neri recibió el espaldarazo del sonorense (quien el 12 de mayo de 1920 había entrado triunfante a la ciudad de México) para relevar a Francisco Figueroa en la gubernatura en abril del año siguiente, tras derrotar en las elecciones a Donaciano López, miembro del círculo figueroísta. Dos años después, a consecuencia de la rebelión de Adolfo de la Huerta, perdió el cargo, que en adelante sería ejercido por Urbano Lavín.

Otra faceta de estos años agitados fue el surgimiento de movimientos populares en diversos estados de la República, encabezados por políticos radicales. Adalberto Tejeda en Veracruz, Felipe Carrillo Puerto en Yucatán y Juan Ranulfo Escudero Reguera en Guerrero fueron algunos de ellos. Este último nació en Acaapulco el 27 de mayo de 1890. Francisco Escudero y Espronceda, su padre, era originario de Torrelavega, Santander; Irene Reguera, su madre, nació en Ometepepec. Hizo sus estudios básicos en el puerto y, ya adolescente, fue enviado a los Estados Unidos para cursar la secundaria y prepararse como mecánico electricista en el Saint Mary's College, de Oakland, California.

En los Estados Unidos, dice Mario Gill, Escudero entró en contacto con los magonistas, que desde 1903 habían constituido allá un núcleo revolucionario. Al año siguiente, en Laredo, Texas, los

PRESENTACIÓN

EL FIDEICOMISO HISTORIA DE LAS AMÉRICAS nace de la idea y la convicción de que la mayor comprensión de nuestra historia nos permitirá pensarnos como una comunidad plural de americanos y mexicanos, al mismo tiempo unidos y diferenciados. La obsesión por caracterizar la historia exclusivamente como nacional desdibuja el hecho de que la realidad de México es más compleja y pluridimensional y de que, por lo tanto, la dimensión regional es parte sustantiva de ella. El desarrollo histórico de cada una de las regiones mexicanas, desde su primer poblamiento hasta su plena configuración como estados soberanos en la República Mexicana, nos muestra hasta qué punto nuestro pasado y nuestro presente se han caracterizado por una convivencia plural en la comunidad nacional.

El Colegio de México promueve y encabeza este proyecto que, como los otros de esta colección, fue patrocinado por el gobierno federal. El estímulo de esta serie nace de la idea de Luis González y del interés mostrado por Miguel de la Madrid H., director general del Fondo de Cultura Económica, quien hizo posible que se sumaran esfuerzos académicos e institucionales con el apoyo generoso de los gobiernos de cada entidad federativa. El Fideicomiso Historia de las Américas dio forma a esta idea y elaboró, con historiadores de distintas instituciones, las obras que hoy presentamos. Confiamos en que sean recibidas con interés por el público.

Al personal del Fondo de Cultura Económica debemos el excelente cuidado de nuestras publicaciones. En especial, mi reconocimiento a Lucía Guzmán de Malo y a Alejandro Ramírez Flores.

ALICIA HERNÁNDEZ CHÁVEZ
Presidenta
Fideicomiso Historia de las Américas

hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, Juan y Manuel Sarabia, Santiago de la Hoz, Librado Rivera, Antonio I. Villarreal, Rosalío Bustamante y Francisco R. de la Vega formaron el Club Liberal Ponciano Arriaga y volvieron a editar el periódico *Regeneración*, que había circulado por primera vez en 1900.

Este encuentro resultó significativo en la vida de Escudero, quien asumió el ideario del Partido Liberal Mexicano. A su regreso a México, en 1915, organizó a los trabajadores portuarios en un sindicato. Su conducta hizo recelar a los poderosos locales, por lo que Silvestre G. Mariscal, jefe militar de la zona, lo expulsó de Acapulco. Durante los tres años que pasó fuera del estado se vinculó con la Casa del Obrero Mundial, entabló correspondencia con Ricardo Flores Magón y profundizó en el conocimiento de la Constitución federal recientemente promulgada en Querétaro.

Cuando volvió al puerto, en el intermedio de una función cinematográfica, Juan se puso de pie y arengó al público pidiéndole que se organizara a través de un partido. El 7 de febrero de 1919 se constituyó el Partido Obrero de Acapulco, en el que participaron los herreros Sergio Romero y Santiago Solano, Juan, Felipe y Francisco Escudero, José y Mucio Tellechea, el zapatero Ismael Otero, los hermanos Diego, estibadores del puerto, el poeta Lamberto Chávez, los hermanos Dorantes, Pablo Riestra, Cresenciano Ventura y Camerino Rosales. Titularon *Regeneración* a su periódico.

El partido planteaba reivindicaciones simples pero muy deseadas por la población acapulqueña, lo que permitió a Escudero ganar las elecciones municipales de 1920: 1) pago justo por la jornada del trabajo; 2) protección de las garantías individuales; 3) limpiar el gobierno de elementos nocivos; 4) participar en las elecciones; 5) jornada laboral de ocho horas; 6) obtención de tierras para los campesinos; 7) extender la educación; 8) gestionar la construcción de la carretera México-Acapulco, y 9) campaña contra las enfermedades.

Resistiendo presiones de todo tipo, Escudero pudo aplicar medidas populares al frente del ayuntamiento porteño: fijó salarios

de cinco pesos a los regidores y de ocho al presidente municipal; nombró una policía pagada por el ayuntamiento; designó a su hermano Felipe tesorero municipal y le exigió una fianza que garantizara un manejo honrado, la cual solventó su padre; redujo las contribuciones; formó juntas municipales, y tomó medidas contra la insalubridad.

El Partido Obrero de Acapulco apoyó la candidatura presidencial de Obregón y la de Rodolfo Neri a la gubernatura. La intervención en la política estatal y nacional le permitió difundir su programa por toda la costa y llamar a la formación de comités agrarios. La alarma creció no sólo en el puerto, sino también en la capital de la entidad. El 30 de enero de 1921, el coronel Novoa intentó capturar a Escudero en su domicilio. El gobernador Francisco Figueroa giró la orden de aprehensión en su contra. No lograron detenerlo hasta el 5 de abril, cuando el jefe de la guarnición lo encarceló a él y a varios militantes del partido. En junio fue liberado. Mientras esto ocurría, Arsenio Leyva se hizo cargo de la alcaldía.

Una disputa entre campesinos y dos hacendados españoles que resultaron muertos sirvió para reiniciar los ataques en contra de Escudero y solicitar su reaprehensión. Dicen Rogelio Vizcaíno y Paco Ignacio Taibo II que Escudero se amparó, después solicitó licencia al ayuntamiento y se internó en la cárcel en espera de ser procesado. Fue absuelto, regresó a su cargo y comenzó a publicar un periódico titulado *El Mañana Rojo*. También instaló en el palacio municipal un taller de fabricación de bolsas de papel y canastas, organizó la cooperativa de pescadores, montó la Casa del Pueblo —cooperativa de consumo que compraba directamente los productos a los campesinos—, formó un comité que pidió la expropiación de dos haciendas de españoles para establecer una colonia agrícola e inició una campaña alfabetizadora.

Como fue reelecto en las elecciones municipales de diciembre de 1921, la ofensiva en su contra alcanzó toda su fuerza. Así, los regidores Ignacio Abarca, Ismael Otero, Emigdio García y Plácido Ríos fueron comprados para evitar que el ayuntamiento aprobara políticas contrarias a la oligarquía porteña. También se re-

currió a la violencia: el 11 de marzo de 1922 fuerzas militares cercaron el ayuntamiento y los celadores se agregaron al asalto. Escudero fue herido y después el mayor Flores le disparó a la cabeza, dándole por muerto. No fue así, pero perdió un brazo, le quedó paralizada la mitad del cuerpo y en adelante tuvo dificultades para escribir y hablar.

Desde un sillón, Escudero seguía interviniendo en los asuntos del partido y dirigía la escuela de comercio fundada por él. En ese mismo año de 1922, Juan y su hermano Francisco fueron electos diputados federales propietario y suplente por el primer distrito de Acapulco. Su partido ganó también las elecciones para el Congreso local. El ayuntamiento continuaría en sus manos, aunque por poco tiempo: la rebelión de Adolfo de la Huerta contra Obregón fue encabezada en Guerrero por Rómulo Figueroa y modificó el panorama político de la entidad. Escudero, habitantes del puerto y campesinos de la costa resistieron en Acapulco, sin éxito, a los militares rebeldes. Él y sus hermanos fueron apresados en el fuerte de San Diego y después trasladados al Aguacatillo, donde fueron ejecutados. Juan murió a la entrada del puerto.

En Tecpan de Galeana, Valente de la Cruz, un profesor de primaria nacido en 1894 en el rancho de San Luis-La Loma, también había iniciado un movimiento en contra de los monopolios y por la justicia social. Presidió el Comité Agrario de Tecpan y, por iniciativa de Juan R. Escudero, fundó el Partido Obrero de Tecpan. En las elecciones de noviembre de 1922 participó como candidato a diputado al Congreso local —se dice que ganó, pero no le fue reconocido su triunfo—. En esta contienda electoral alcanzaron la victoria varios militantes del Partido Obrero de Acapulco. De la Cruz murió fusilado en septiembre de 1926.

Amadeo S. Vidales, presidente municipal de Tecpan, Baldomero Vidales y Feliciano Radilla Ruiz, miembro de la Liga de Campesinos de Atoyac, apoyaron a los Escudero durante la rebelión delahuertista. Los hermanos Vidales eran dueños de una compañía mercantil de productos agrícolas en Acapulco que tenía sucursales en varios puntos costeros. En 1925 formaron la colo-

nia agrícola militar Unión de Ambas Costas. Más adelante acaudillaron una lucha guerrillera radical en Atoyac, el Movimiento Libertario de Regeneración Económica Mexicana, cuyo programa social era el Plan del Veladero del 6 de mayo de 1926, presentado como una modificación del manifiesto lanzado en Linares, Nuevo León, por Roberto y Ricardo Fernández y F. Bautista el 16 de septiembre de 1922.

Por esos años, la minoría extranjera más numerosa era la española, que representaba poco más de 25% del total de extranjeros que vivían legalmente en México. Sus espacios económicos privilegiados fueron el comercio, la agricultura y los servicios. En algunos lugares, los inmigrantes se incorporaron a la actividad industrial, fundamentalmente la textil. Durante la Revolución surgieron innumerables roces y tensiones entre las fuerzas rebeldes mexicanas y las minorías extranjeras; estadounidenses, chinos y españoles fueron quienes más daños sufrieron.

En el sur, el conflicto entre los españoles y la población local se localizó particularmente en la Costa Grande, como había acontecido durante la Independencia. Tres casas controlaban la economía acapulqueña y su entorno costeño: Alzuyeta y Compañía, fundada en 1821 por vascos; B. Fernández y Compañía, instalada entre 1824 y 1826 por asturianos, y Fernández y Hermanos, constituida en 1900 también por asturianos.

Estas firmas eran dueñas de una pequeña flota de embarcaciones que transportaban mercancías a Manzanillo y Salina Cruz. Sus empleados armaban las naves y, con sus propios chalanes, realizaban las tareas de carga y descarga, ya que Acapulco no contaba con un muelle. Controlaban también el transporte terrestre y tenían agentes situados en varios puntos de la entidad, los cuales adquirían las cosechas. Abastecían al comercio en pequeño. Además, estaban en manos españolas grandes extensiones de tierra en ambas costas, trabajadas por medieros y jornaleros; las fábricas de hilados y tejidos El Ticuí y Aguas Blancas y la fábrica de jabón La Especial. Tenían gran influencia en la designación de las autoridades locales y federales del puerto, ya fuera en el ayuntamiento, en los juzgados, en la jefatura de la guarnición o

en las aduanas. Eran las casas españolas las que pagaban a la policía acapulqueña. Fundaron también el Colegio Guadalupano.

El texto del Plan del Veladero, después de hacer un rápido recorrido por la historia de México, en el que anota todos los daños causados por los españoles a la nación, resalta la lucha agraria zapatista y el “socialismo nacional” inaugurado con la Revolución. Más adelante, pide desconocer el capítulo del Plan de Iguala que garantizaba la vida y propiedades de los ciudadanos de “la monarquía” y afianzar los principios de la Constitución de 1917; expulsar a los españoles, nacionalizar sus bienes y que éstos fueran manejados por los ayuntamientos; fomentar la educación; tecnificar la agricultura y modernizar sus procedimientos; restituir las tierras usurpadas a los pueblos y repartir los grandes latifundios; respetar la vida, pagar daños y proteger las propiedades de los extranjeros —a excepción de los españoles— durante las luchas revolucionarias; indemnizar a inválidos, huérfanos y viudas a causa de los movimientos armados; confiscar las empresas mineras y controlar las industrias; administrar las embarcaciones y apoderarse de los medios de transporte, y nacionalizar la ganadería y los bancos. Firmaron el documento Amadeo S. Vidales, jefe del Movimiento Libertario; Baldomero S. Vidales, general en jefe de las Fuerzas Libertadoras; Roberto D. Fernández, jefe de propaganda en el centro de la República; coronel Feliciano Radilla, jefe de propaganda en ambas costas de Guerrero, y el mayor médico Manuel Estévez, secretario. Cerca de 30 jefes y oficiales dieron también su firma en apoyo al movimiento antiespañol.

Adrián Castrejón y Miguel Henríquez Guzmán fueron los encargados de combatir a la guerrilla de los Vidales. Al cabo de dos años no la acabaron, pero le restaron fuerza. Las autoridades federales dudaban de su honestidad y se les acusaba de abusar de la población. En marzo de 1929, Amadeo Vidales y sus principales seguidores se rindieron. El presidente Emilio Portes Gil los amnistió y les entregó tierras en Cacalutla, cerca de Atoyac. Al comenzar el año siguiente, los guerrilleros indultados establecieron la colonia agrícola Juan R. Escudero.

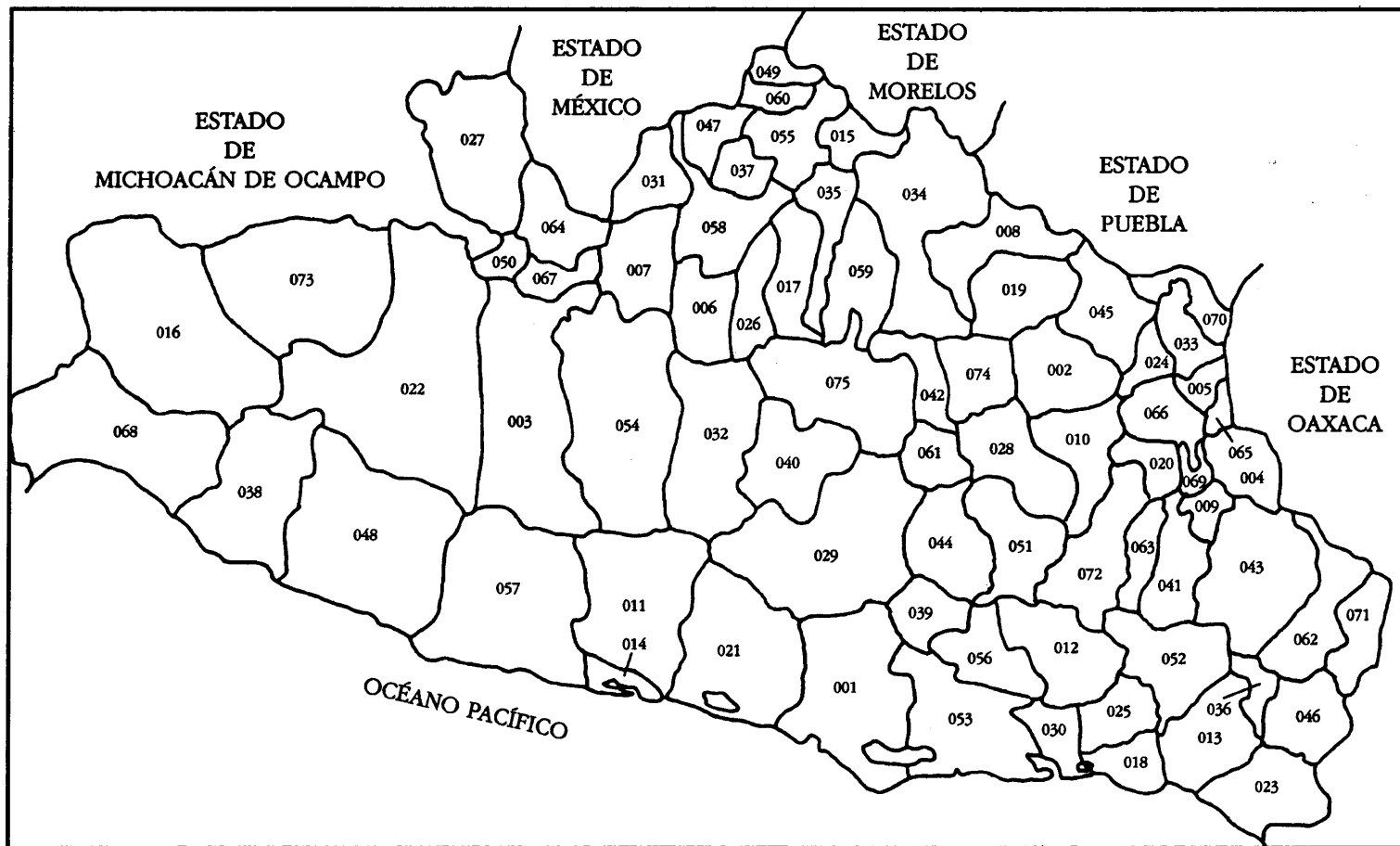
IV. LOS ÍNDICES DEL ATRASO

LA POSTRACIÓN ECONÓMICA constituye un rasgo perdurable en la historia suriana. Durante el virreinato, dos ejes económicos y un par de espacios geográficos fueron los más beneficiados por su articulación con la economía mundial: el centro minero de Taxco y el puerto mercantil de Acapulco. Lugares como Iguala se fortalecerían en el porfiriato debido a su dinámica económica doméstica y a la ventaja de tener una terminal ferroviaria. A la vez, regiones como la Montaña y amplias porciones de las costas, donde se formaron haciendas, quedaron muy rezagadas.

Ya en 1892, el erudito Alfonso Luis Velasco, en su *Geografía y estadística del estado de Guerrero*, se había percatado del potencial económico de la entidad. Destacó en primer término su riqueza minera: la plata de Taxco, el cinabrio de Huitzucó, el antimonio de Acamixtla, el mercurio de Pregones y de Xalpitlán y el mármol de Chontalcuatlán. Otros sitios poseían zinc, plomo, piedras preciosas, sal y carbón de piedra. Sin embargo, constataba con desazón que, de las 1 391 minas conocidas hacia 1889, muy pocas estaban en explotación, pues la minería se hallaba paralizada por carecer la entidad de buenas vías de comunicación.

La agricultura, aunque tenía un nivel precario, presentaba grandes posibilidades de expansión: maíz, ajonjolí, alfalfa, algodón, arroz, añil, cacao, caña de azúcar, chile, café, frijol, garbanzo, maguey, tabaco, trigo, coco, dátiles, naranja, limón, guayaba, plátano, mamey, calabaza, jitomate, lechuga y otros muchos productos se cultivaban en el estado. El maíz era el que se producía en mayor escala. Madera, fauna silvestre y pescado completaban el cuadro de su riqueza natural. Como resumió José Juan Tablada en un artículo periodístico: "Guerrero poseía los climas más diversos. La naturaleza ha sido pródiga allí, porque pueden verse

MAPA 1 Guerrero, División Municipal, 1990



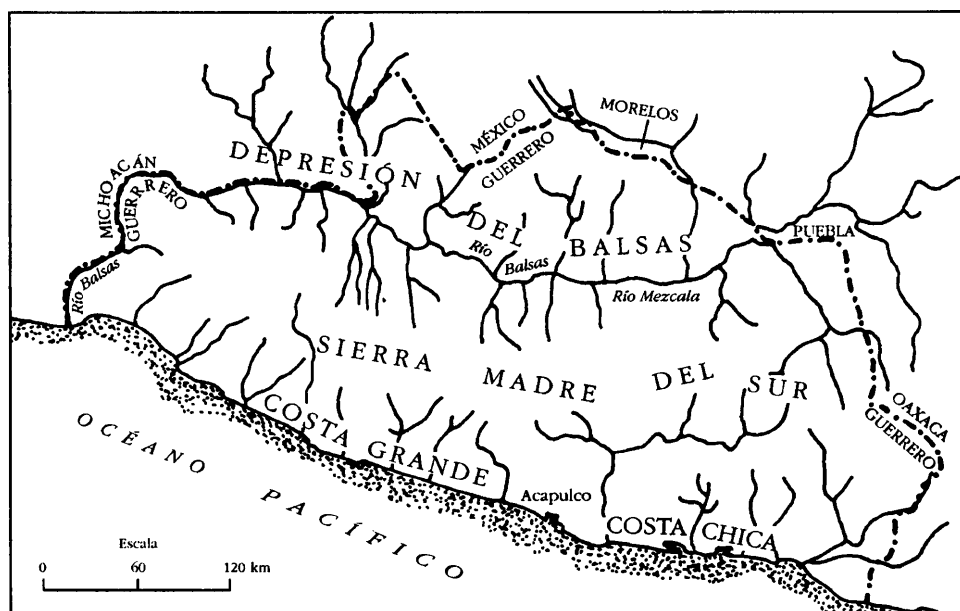
el pino y las coníferas de las grandes altitudes, el algodón, la caña llena de miel y los más capitosos frutos tropicales". El potencial económico del territorio guerrerense estaba en franco contraste con las limitaciones del estado en materia de infraestructura y servicios. La modernización porfiriana tocó unos pocos lugares de Guerrero. A principios del siglo xx, el viaje de la capital del estado a Tixtla se hacía en mula y no fue sino hasta 1927 cuando se construyó la carretera que comunicó a Chilpancingo con el puerto de Acapulco. El ferrocarril sólo llegó a la región norte del estado, que fue la más beneficiada durante el periodo. Iguala tuvo entonces una expansión comercial apreciable y se convirtió en el centro de intercambio regional. Las industrias aceitera y jabonera también florecieron allí. Pero ni la agricultura tecnificada ni la industria de transformación arraigaron en la entidad. Aunque desde el segundo tercio del siglo xx comenzó el despegue de la industria turística, que atrajo inmigrantes y generó cinturones de miseria en el puerto de Acapulco, no ha sido suficiente para remontar el atraso.

TERRITORIO Y COMUNICACIONES

Actualmente el estado de Guerrero comprende 16 distritos judiciales: Abasolo (con cabecera en Ometepec), Alarcón (Taxco), Aldama (Teloloapan), Altamirano (San Luis Acatlán), Álvarez (Chilapa), Allende (Ayutla), Bravos (Chilpancingo), Galeana (Tecpan), Guerrero (Tixtla), Hidalgo (Iguala), Mina (Coyuca de Catalán), Montes de Oca (La Unión), Morelos (Tlapa), Tabares (Acapulco), Zaragoza (Huamuxtitlán) y Cuauhtémoc (Arcelia). Estaba dividido en 75 municipios (mapa 1).

De orografía accidentada, la entidad tiene tres formaciones geográficas: la depresión del río Balsas, la Sierra Madre del Sur y la costa del Océano Pacífico (mapa 2). La primera, en dirección norte, es una amplia zona de tierras bajas que no sobrepasan los 1 000 metros de altura. El clima es seco —la sequía suele presentarse entre octubre y mayo— y predomina una vegetación com-

MAPA 2. *Las grandes divisiones geográficas del estado de Guerrero*



puesta por cuajilotes y órganos. La sierra, formada a finales del Cretácico superior, corre paralela al mar, entre la costa y la depresión del Balsas. Sin tener una precipitación pluvial abundante, su vegetación la forman bosques de encino, árboles tropicales, carpes, alisos, helechos gigantes y orquídeas. La llanura costera es de clima caliente y semiseco. Hay en ella acacias, leguminosas, ficus, tulipanes y parotas.

Se distinguen cuatro regiones naturales que, aunque diversas, todas tienen clima tropical y suelos sedimentarios: la Tierra Caliente, la Montaña, Costa Grande y Costa Chica. La primera, situada debajo del Balsas, en los límites con Michoacán, abarca un tercio de su superficie y cuenta con abundantes tierras fértiles. Allí hay una enfermedad endémica conocida como mal del pinto. La Montaña, en la cuenca alta del río, hace frontera con el estado de Puebla y ocupa casi 40% del territorio guerrerense. Lomas y

barrancas hacen difícil la agricultura. Costa Grande es la región que corre desde el puerto de Acapulco hasta la desembocadura del Balsas en el Océano Pacífico. Cuenta con pastizales, tierras de labor, salinas y yacimientos mineros. La Costa Chica es la superficie comprendida entre Acapulco y el estado de Oaxaca. Tiene mucha vegetación, praderas, sabanas y bosques. En ambas costas se encuentra el mosquito que transmite el paludismo.

Su río más importante es el Balsas, el segundo con mayor caudal del país. El río cambia de nombre en su curso y adopta los de los lugares por donde pasa (Zahuapan, Atoyac, Mezcala, Balsas y Zacatula), cruza varios estados (Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Michoacán), es frontera natural de dos de ellos (Michoacán y Guerrero) y atraviesa diversas regiones con actividades económicas y niveles de desarrollo desiguales. Siempre ha sido considerado por las élites políticas y económicas como un medio para alcanzar ciertos fines (abasto, comercio, expansión económica o algo tan etéreo como el "progreso") y acabó por convertirse en un fin en sí mismo (extracción de plata, oro, cobre y plomo; explotación de maderas preciosas de los territorios que surca, y caza del lagarto que habitaba en el río).

Las expediciones y proyectos sobre el río Balsas se sucedieron a lo largo de 150 años, desde finales del siglo XVIII hasta poco después de la Revolución de 1910. Su estudio ofrece una imagen muy viva de las expectativas y los intereses en juego: se aprecian las posturas de los gobiernos estatales y la pluralidad de puntos de vista de topógrafos, ingenieros y geógrafos.

Ante el desabasto de maíz que sufrió Valladolid en 1785, los párrocos de Tecpan y Urecho concibieron el primer proyecto de navegación a través del río Balsas para llevar a la villa parte de las cosechas levantadas en Tecpan. Más ambicioso, hacia 1848 el gobernador de Puebla vio en su cauce la posibilidad de establecer la comunicación interoceánica. La idea era sencilla: se trataba de entroncar el ferrocarril México-Veracruz con la vía fluvial Atoyac-Balsas. Puebla sería entonces no sólo una ciudad industrial, sino también centro de acopio de mercancías ultramarinas. En las dos décadas posteriores, estadounidenses y franceses obtu-

vieron concesiones para explotar los depósitos de hierro de Michoacán y Guerrero y transportar en vapores el mineral. Por su parte, Justo Mendoza intentó crear un puerto de cabotaje en algún punto cercano a la desembocadura del río.

Los proyectos económicos vinieron acompañados de estudios de campo. Avanzadas de técnicos y científicos hicieron un reconocimiento detallado del río y aseguraron que era factible navegarlo si se nivelaban algunos tramos y se canalizaban otros. En 1868, Adam Dydynski, ciudadano polaco residente en Puebla, comandó una expedición del embarcadero de Zirándaro hasta su salida al Pacífico. Después hizo lo propio su connacional Juan Bochotnecky. El ingeniero Robert B. Gorsuch, enviado en 1870 por el gobierno federal, concluyó que era imposible utilizarlo para el tráfico fluvial.

Mientras que los gobiernos de Puebla, Estado de México y Michoacán renunciaron a la pretensión de navegar el río, el de Guerrero, encabezado por Francisco O. Arce, la retomó con nuevos bríos. En 1886 partió de Coyuca de Catalán una expedición al mando del explorador francés Augusto Tardy, que, después de un azaroso viaje, llegó al pueblo de Mezcala. El éxito de Tardy recreó la expectativa de dominar el río. Sin embargo, al paso del tiempo, el ejecutivo guerrerense vislumbró más viable la construcción del ferrocarril. En la última década del siglo se tendió la línea que unió la ciudad de México con la orilla del Balsas, pasando por Cuernavaca e Iguala. A manera de testimonio de las oportunidades perdidas, el sonido del tren del Balsas se escucha todavía en la ciudad de México y, de vez en cuando, intrépidos navegantes montados en modernas embarcaciones recorren el río, aún famoso por sus rápidos.

Junto con el fracasado proyecto de navegar el Balsas, el otro gran objetivo en materia de comunicaciones era el ferrocarril. Ya desde 1837 se había considerado la posibilidad de unir Veracruz con Acapulco a través de una línea. Después el eje rotaría en dirección de la ciudad de México, aunque recurrentemente se volvería a la otra opción.

El 8 de julio de 1880, el gobierno federal suscribió un convenio

con el ejecutivo guerrerense, representado por Rafael Cuéllar, para instalar una vía férrea, con su correspondiente telégrafo, que uniría el puerto de Acapulco con la capital de la República. Al año siguiente se otorgó a Delfín Sánchez y compañía la concesión para construirlo. Las obras deberían iniciarse seis meses después, para lo cual los concesionarios adquirirían en Londres la herramienta, rieles y material necesario. Nunca se construyó la línea.

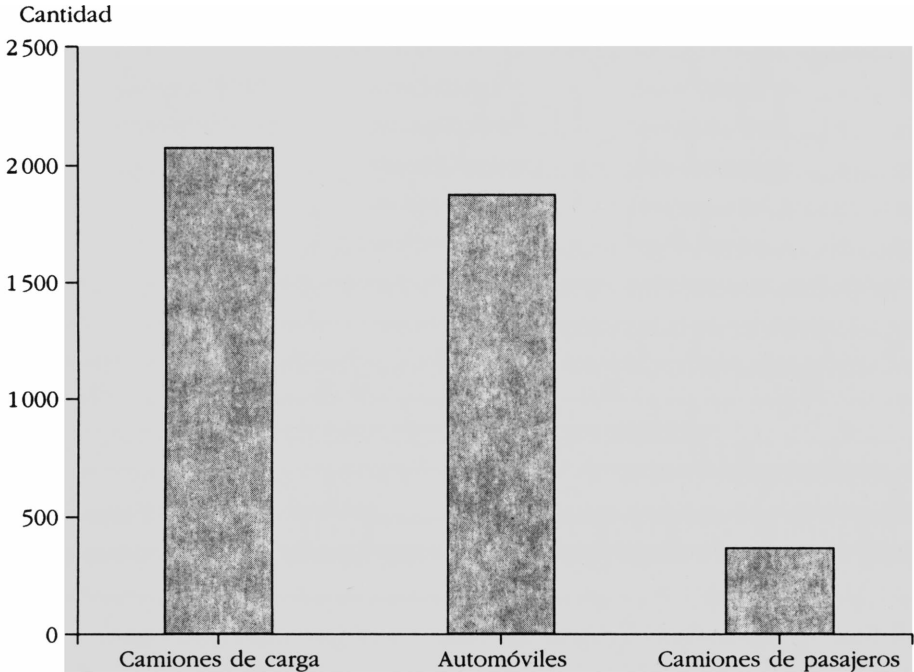
Después vendría el proyecto de hacer un ferrocarril interoceánico que uniera Veracruz con Acapulco. Para tal efecto, y con la participación del propio Delfín Sánchez, se constituyó la empresa del Ferrocarril Nacional Interoceánico. La accidentada topografía guerrerense fue una de las razones que impidieron concluir el proyecto. El tendido de la línea férrea llegó hasta Puente de Ixtla. En 1891 se integró con capital mexicano e inglés la compañía ferrocarril México-Guernavaca-Pacífico, la cual acabó por adquirir la línea y completar la ruta hasta la desembocadura del Balsas. Esto requirió construir más de 110 kilómetros dentro de territorio guerrerense. La obra fue terminada en 1901.

La situación de los caminos de tierra no era mejor, como lo expresó un editorial de *El Avisador* (Acapulco, 25 de noviembre de 1891): “Mientras otros estados, mucho más lejanos de la metrópoli que el nuestro, cuentan ya con una o más líneas férreas, nosotros no tenemos siquiera un regular camino de herradura”. La senda que comunicaba a la ciudad de México con el puerto de Acapulco era muy difícil, tanto “por el estado pésimo en que se encuentra”, como porque en algunas partes “hay que atravesar por peligrosos desfiladeros, donde se hace preciso echarse pie a tierra para franquear un barranco o un precipicio”. Particularmente tortuosos eran los tramos de “El Peregrino, Agua del Perro, Los Cajones, Cañada de Acahuitzotla y Salto de Valdez, entre Chilpancingo y Acapulco”. La situación era tal que “muchos viajeros que llegan a este puerto con el propósito de proseguir su viaje por tierra hasta México desisten de su intento, luego que adquieren informes tan espeluznantes respecto del camino, prefiriendo dar una vuelta y hacer un viaje más costoso pero más cómodo por la vía de Manzanillo o San Blas”.

En 1906 se inició la construcción de un camino para unir a Chilpancingo con Iguala. Cuatro años después, la carretera quedó abierta. Vicente de Paúl Andrade la recorrió en 1911 y dejó testimonio del ahora rápido viaje: “En automóvil, en cuatro horas llegué a Chilpancingo. Gratisísimo me fue ese trayecto, por la velocidad con que íbamos, gracias al buen estado del camino”. Le asombró la aridez del cañón del Zopilote. Para cruzar el río Mezcala tuvieron que introducir “el automóvil en el chalán; un cuarto de hora nos detuvimos en espera del dicho chalán, que estaba en la ribera opuesta”. Llegar a Tixtla desde la capital del estado le consumió tanto tiempo o más que el empleado en el otro tramo del viaje. El contraste resultaba evidente. Al respecto, Manuel Payno había escrito que quien se atrevía a pasar el río era “víctima de los pintos y del mal clima”.

El 11 de noviembre de 1927 se concluyó la carretera México-Acapulco. Aquel día, 12 automóviles procedentes de la capital llegaron al puerto. Sin embargo, el viaje continuaba siendo difícil, pues la carretera carecía de asfalto, puentes y alcantarillas. Al promediar el siglo, Guerrero contaba con casi 600 kilómetros de caminos pavimentados, de los que alrededor de la mitad pertenecía a la ruta que unía dichas ciudades; circulaban principalmente camiones de carga y, en segundo término, automóviles particulares (gráfica iv.1). En 1980, la red básica estatal tenía 1 238 kilómetros. Durante el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu (1987-1993) se construyó la Autopista del Sol, que acortó el trayecto entre la ciudad de México y Acapulco. Recientemente, la carretera fue rescatada por el gobierno federal, dadas las deudas de las empresas que la construyeron y a causa también del esceso aforo vehicular ocasionado por sus peajes elevados.

En 1870 se colocaron los primeros postes telegráficos para conectar a Amacuzac con Acapulco, tarea en la que participaron el gobierno federal y los de Morelos y Guerrero. El cableado llegó a Chilpancingo y a Tixtla dos años después. En 1873, Acapulco quedó conectado, aunque no fue hasta 1878 cuando se logró regularizar la comunicación. La compañía del ferrocarril México-Cuernavaca-Pacífico llevó la línea telegráfica desde la

GRÁFICA IV.1. *Vehículos de motor en el estado de Guerrero, 1954*

FUENTE: *Guerrero: esquema social y económico* (1957), México, Almacenes Nacionales de Depósito.

ciudad de México hasta el Balsas. Su desarrollo sería lento. Para 1960, poblados como Zumpango del Río y Tepecoacuilco todavía carecían de oficinas de telégrafo, y la entidad en su conjunto tenía poco menos de 2 000 kilómetros de líneas. La mayoría de los pueblos no contaba siquiera con oficinas de correo. En 1982 había en el estado 256 de estas oficinas.

El proyecto pionero de instalación de la telefonía en Guerrero fue presentado en 1881 por Guillermo Téllez. Siete años después, la red tendida se aproximaba a 350 kilómetros, gracias a la participación tanto del gobierno como de los particulares. Las líneas propiedad del gobierno enlazaban a los poblados más importantes; las de los particulares comunicaban a las haciendas y centros mineros con algunas ciudades. En 1960, todo el estado poseía casi 500 kilómetros de líneas telefónicas y 84 oficinas que brin-

daban el servicio. Veintidós años después había 42 677 líneas y 96 305 aparatos telefónicos.

Aunque las comunicaciones han crecido considerablemente a lo largo de 100 años, están lejos de ser suficientes debido al tamaño de la población y a la extensión territorial de Guerrero. Muchos pueblos de la Montaña y otros de ambas costas todavía carecen de caminos pavimentados y la telefonía aún no llega a puntos remotos y de difícil acceso. En 90 años, la red ferroviaria no tuvo expansión alguna. En estos sitios, la población y la actividad económica resintieron los efectos de este atraso. Otros lugares, por ejemplo los situados a lo largo del eje México-Acapulco, tuvieron condiciones más favorables y un desarrollo relativamente superior.

POBLACIÓN

México ha sido un país con una población distribuida en el campo y reunida en una gran cantidad de poblados. En el siglo XIX, esta tendencia se acentuó significativamente a pesar de las epidemias y guerras: había 4 800 000 habitantes en 1790 y, en 1900, se contaban 13 600 000. Durante el porfiriato, las ciudades vivieron una fase de crecimiento territorial y poblacional, aunque esto no bastó para que la inmensa mayoría de los mexicanos abandonara el medio rural. Al comenzar la Revolución de 1910, 80% de los habitantes vivían en el campo.

Esta situación continuó durante varias décadas. En 1960, como reveló el censo general de población y vivienda, la concentración demográfica en las ciudades mexicanas superó a la rural por primera vez. Del campo, más pobre, emigraron brazos a la urbe. Para 1940, en Guerrero se contaban 16 ciudades al lado de 380 poblados y congregaciones; no fue sino hasta 1990 cuando quedó constancia estadística de que la población citadina superaba a la rural (cuadro IV.1).

CUADRO IV.1. *Población (1910-1990)*

<i>Año</i>	<i>Urbana</i>	<i>Rural</i>	<i>Total</i>
1910	91 429	502 849	594 278
1930	97 336	544 354	641 690
1950	199 251	720 135	919 386
1970	569 145	1 028 215	1 597 360
1990	1 369 536	1 251 101	2 620 637

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1994), *Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos*, México, p. 500.

La población guerrerense mermó durante la lucha armada: de 594 278 habitantes censados en 1910, pasaron 11 años después a 566 836. En 1930, el municipio de Chilpancingo contaba con aproximadamente 20 000 almas; 10 años más tarde, había sumado otras 3 000. Durante el mismo lapso, la población del municipio de Acapulco pasó de poco más de 21 000 a más de 29 000 habitantes, por lo que creció más del doble que el municipio donde está la capital del estado. Esta tendencia se mantendría en las décadas siguientes, fundamentalmente por el desarrollo de la industria turística en el puerto.

Si se comparan los datos de los censos de 1970 y 1990, se tendrá que la población guerrerense pasó de 1 597 360 a 2 620 637 habitantes (cuadro iv.1); la población menor de 15 años se redujo de 48 a 42.7%. De acuerdo con el último registro, la población femenina total ascendía a 1 338 417 personas, y 1 282 220 pertenecían al sexo masculino. El municipio de Acapulco de Juárez era el más poblado, con casi 600 000 habitantes; seguían los de Chilpancingo de los Bravo, con 136 164; Iguala de la Independencia, con 101 0667; Taxco de Alarcón, con 86 864; Chilapa de Álvarez, con 85 621; José Azueta con 63 366; Coyuca de Benítez con 60 761; Tecpan de Galeana, con 59 224; Atoyac de Álvarez, con 58 568; Teloloapan, con 55 466; y Tlapa de Comonfort, con 44 177.

El censo de 1930 reveló que el número de nacimientos duplicó el de defunciones. La mayoría de los guerrerenses, según el

CUADRO IV.2. *Índices demográficos (1900-1990)*

<i>Año</i>	<i>Nacimientos</i>	<i>Defunciones</i>	<i>Matrimonios</i>
1900	19 584	16 537	2 661
1907	20 043	19 760	2 358
1922	17 594	11 413	1 529
1930	30 309	15 505	4 435
1940	31 081	12 547	5 928
1950	42 402	12 964	7 851
1960	58 613	12 088	10 737
1970	77 237	13 252	14 209
1980	99 018	12 786	19 091
1990	97 905	8 928	21 967

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1994), *Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos*, México, p. 511.

registro de la década siguiente, se concentraba en dos grandes grupos de edad: de cero a 14 años y de 20 a 59 años, reunidos por lo general en familias numerosas. Los niveles de vida predominantes en la entidad se encontraban entre los más bajos de la República. La diarrea y la enteritis provocaban casi la mitad de los decesos, seguidas por la neumonía y el paludismo. Las muertes violentas se situaban en el cuarto lugar. Para 1990, la cifra de nacimientos era más de 10 veces mayor que la de defunciones (cuadro IV.2). Mejoras en la asistencia social, particularmente en los sistemas de salud, dan cuenta de dicha proporción.

Actualmente, Guerrero tiene una población joven, aunque, de acuerdo con la tendencia nacional, se está incrementando el número de adultos y viejos. Al respecto, el censo de 1990 indica que la mayoría de la población está en el grupo de edad de 15 a 64 años, 1 363 615; seguida por el de cero a 14 años, compuesto por 1 119 169 personas. La amplia mayoría se declaró católica, 2 006 165, y 91 637, protestantes.

La población indígena conserva importancia numérica en la entidad, aunque es la que vive en las peores condiciones económi-

cas, de salud y de educación. Según esta misma fuente, del total de los habitantes mayores de cinco años, 298 512 hablan alguna lengua indígena, 193 706 hablan además español y 86 219 no son hispanoparlantes.

ECONOMÍA

Buena parte del siglo XIX transcurrió en medio de guerras internas y conflictos internacionales, propiciados por la falta de regímenes con una base social amplia, por la reacción de las instituciones poderosas —como el ejército o la Iglesia— ante las políticas gubernamentales que las perjudicaban y por los afanes expansionistas de vecinos poderosos. El parto de la nación independiente estuvo acompañado de sucesivas pérdidas territoriales: Centroamérica en 1823, Texas en 1836, Nuevo México y la Alta California en 1848.

Esa falta de estabilidad política también tuvo consecuencias económicas. México, que tenía una economía poderosa antes de lograr la independencia, retrasó su desarrollo durante décadas al no generar las condiciones que propiciaran una expansión de la actividad productiva. Tal fue el caso de la tardía construcción de una infraestructura caminera, la lenta introducción de transportes modernos o el fracaso de las políticas de fomento industrial, como lo muestran la breve historia del Banco de Avío, puesto a funcionar en 1830, y la inoperancia de la Dirección General de Industria Nacional, encabezada por Lucas Alamán.

Otro factor que detuvo el desarrollo del país fue la debilidad de las finanzas públicas. Mantener el territorio nacional en relativa paz requería contar con los recursos suficientes para pagar a la burocracia y a un ejército inquieto y proclive a los pronunciamientos. Lejos estaba el Estado de poder solventar el reto, en primer término, porque se tuvo que hacer cargo de los adeudos que el régimen novohispano había contraído con los particulares. Por otro lado, porque la independencia desarticuló el sistema fiscal colonial y lo despojó de algunos recursos, como los provenientes del tributo indígena. Así, desde sus orígenes, el Estado

mexicano cargó con deudas diversas, que se incrementaron al recibir préstamos del exterior, por ejemplo el obtenido en 1823 de casas británicas, o al recurrir al endeudamiento interno, como cuando recibió dinero de los agiotistas a cambio de onerosos réditos, concesiones, licencias y privilegios fuera de toda proporción.

Antes de acabar el siglo XIX, la modernización, aunque desigual y poco armónica, llegó a concretarse en algunas ramas económicas: el tendido de vías férreas, la expansión bancaria a nivel nacional, la exportación de materias primas, la instalación de fábricas, una agricultura comercial y la minería de exportación fueron los signos más evidentes. El desarrollo en estos campos tuvo su impacto social: la población creció y con ella las ciudades, tanto en tamaño como en cantidad. Aparecieron la clase media rural y la urbana; ganaron presencia el proletariado industrial y el asalariado rural. Si bien reducida en términos absolutos, la inmigración extranjera creció, la emigración de mano de obra hacia los Estados Unidos se incrementó y las migraciones internas se acentuaron considerablemente. El Distrito Federal, Coahuila, Tepic, Tamaulipas y Durango recibieron a muchos mexicanos procedentes de Zacatecas, Estado de México, San Luis Potosí, Guanajuato e Hidalgo.

La demanda de mano de obra y mercancías que generó la segunda Guerra Mundial, la solución del problema de la deuda externa, que había vuelto a crecer después del equilibrio de las cuentas nacionales logrado en el porfiriato, y la aplicación de una política industrial conocida como sustitución de importaciones marcaron el medio siglo. La devaluación del peso, que pasó de 4.85 a 8.65 por dólar, fomentó las exportaciones, al abaratarlas, y mejoró la balanza comercial al disminuir las importaciones. También crecieron y mejoraron los servicios públicos, aparecieron mecanismos estatales de asistencia social y se amplió la cobertura educativa oficial.

Con todo, la distribución del ingreso, social, sectorial y geográficamente, no fue ni por mucho equitativa y la existencia de enormes brechas sociales fue la norma. Así, en 1950, 10% de la población concentraba casi la mitad del ingreso nacional. Cuando gobernaron los presidentes Manuel Ávila Camacho y Miguel

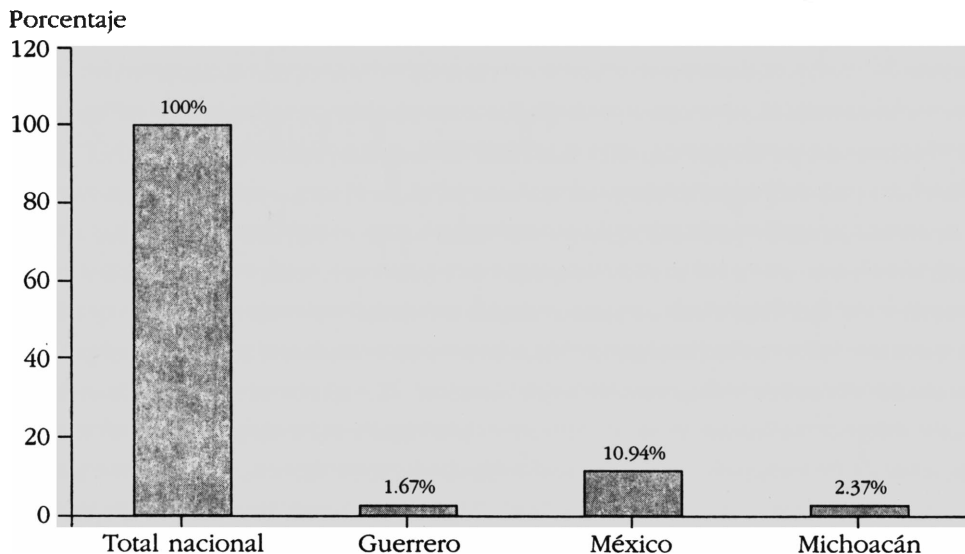
Alemán Valdés, México vivió un crecimiento económico considerable, que alcanzó tasas cercanas a 7% anual y, para la década de 1950, muy próximas a 6%, índices situados muy por encima del incremento demográfico.

A pesar de este crecimiento, que se prolongó por décadas, la aportación de la economía suriana al producto interno bruto (PIB) ha sido insignificante: en 1960 fue de 1.32%; en 1970, de 1.21%, y en 1980, de 1.68% (gráfica iv.2). En este último año los servicios vinculados con el turismo representaron 34% del PIB de la entidad; los servicios comunales, sociales y personales, 17%; el sector agropecuario, silvícola y pesquero, 14%; los servicios financieros, seguros y bienes inmuebles, 10%; el sector transportes, almacenamiento y comunicaciones, 8%; la industria manufacturera, 6%; la industria de la construcción, 6%, y el sector eléctrico tan sólo 2% (gráfica iv.3).

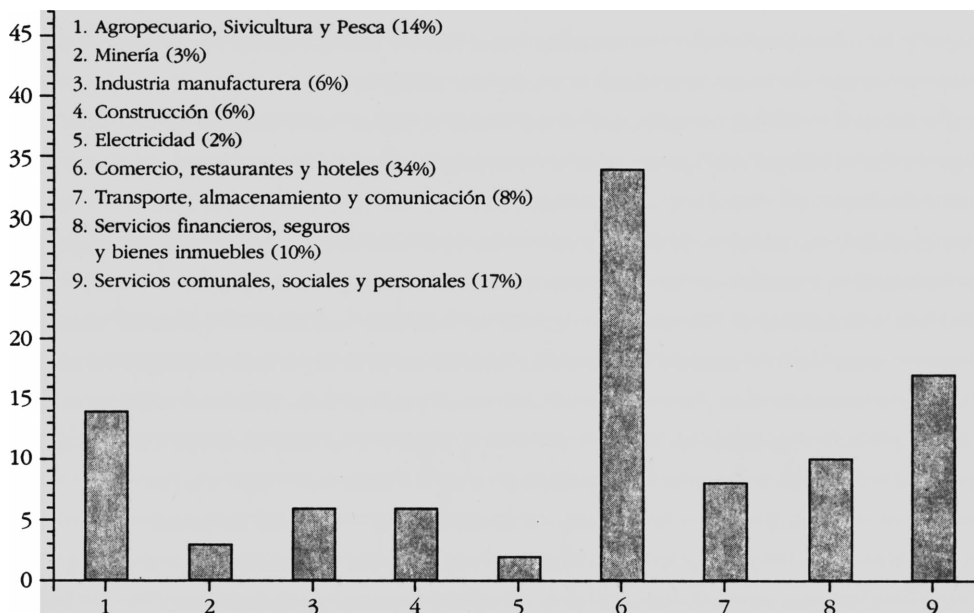
Acapulco fue y es un punto estratégico del sur. Habilitado como puerto desde la Colonia, sirvió como lugar de tránsito de hombres, mercancías e ideas que conectaban al país con el Pacífico, se trataba de Asia, Norteamérica o América Central. Narraba un periódico que, antes de terminar el siglo XIX, hacia ese último sitio se embarcaban trabajadores temporales: "Casi en todos los vapores de la Mar del Pacífico que salen de este puerto con rumbo al sur hemos visto tomar pasaje a multitud de individuos, especialmente de la clase pobre, que se dirigen a Centroamérica en busca de trabajo, obligados por la miseria que cada vez más se acentúa en nuestras costas" (*El Avisador*, 27 de octubre de 1891).

Acapulco también fue escenario de las guerras civiles e internacionales y objetivo militar prioritario de las distintas fuerzas. No obstante, al menos hasta principios del siglo XX, no era muy grande ni estaba muy poblado. Una descripción publicada en *El Avisador* (17 de octubre de 1891) lo pintó en los siguientes términos: "cualquiera que durante los últimos días de lluvias haya recorrido la población y sus alrededores habrá observado la multitud de charcos de fango y aguas estancadas, que son otros tantos focos de infección, especialmente por el rumbo del Barrio Nuevo y El Rincón". En esos lugares, "los niños se entretenían en

GRÁFICA IV.2. *Cuadro comparativo PIB, 1980*



GRÁFICA IV.3. *Producto interno bruto total (PIBT) y por división de actividad económica del estado de Guerrero, 1980*



FUENTE: *Estructura económica del estado de Guerrero, México, 1988.*

sacar pescaditos, ranas y aun *lagartitos* de esos charcos”. La población total del puerto era de unos 5 000 habitantes.

Cerca de Acapulco, en Aguas Blancas, se situaba el establecimiento metalúrgico Progreso del Sur, propiedad de los señores Fernández, grandes comerciantes de origen español de los que ya hablamos en el capítulo anterior. Aunque edificado en las afueras del pueblo, articulaba la vida local y llamaba la atención por la disciplina y el orden que había introducido en la conducta de los lugareños. El poblado se estableció al comenzar la década de 1890, y según una descripción de la época, vivían poco más de 1 000 en “su caserío ordenadamente cimentado”, cuyas “calles rectas tiradas a cordel desembocan en la plaza de comercio, donde se encuentran la oficina telegráfica, un establecimiento de instrucción pública y un elegante templo católico” (*El Avisador*, 3 de febrero de 1896).

En 1910, el viaje de Acapulco hacia Pie de la Cuesta se realizaba a caballo y requería tres horas. Solamente había un hotel y acababa de inaugurarse el alumbrado público. Diez años después, la situación no había mejorado mucho: en todo el poblado nada más circulaba un carro, la capitania del puerto contaba con una lancha de motor, y un carro tirado por mulas recogía la basura de las calles. Los servicios públicos eran precarios. Las cosas mejoraron cuando se terminó la construcción de la carretera México-Acapulco y, a pesar de que no eran muchos los turistas que se aventuraban a visitar el puerto, comenzó a crecer la oferta hotelera. Durante la presidencia de Pascual Ortiz Rubio empezó el levantamiento topográfico para construir calzadas que atravesaran Acapulco y llegaran a Pie de la Cuesta y Puerto Marqués.

El régimen de Miguel Alemán incentivó la economía a través de la expansión de la obra pública y de la inversión directa de la iniciativa privada nacional y extranjera (cuadro IV.3). El turismo inició la ruta que lo convertiría en la actividad económica más importante de la entidad. En Acapulco se hicieron grandes hoteles y la industria turística se fue constituyendo en el núcleo que eslabonó a otras ramas económicas. Con el desarrollo de esta actividad vino una demanda de brazos que atrajo no sólo a

CUADRO IV.3. *Inversión nacional bruta (1946-1952)*

Años	Pública	Privada (millones de pesos)	Total
1946	1 130	2 156	3 286
1947	1 431	2 726	4 157
1948	1 631	2 917	4 548
1949	1 964	3 087	5 051
1950	2 666	3 294	5 960
1951	2 981	3 900	6 881
1952	3 417	4 732	8 149

FUENTE: Tzivi Medin (1990), *El sexenio alemanista*, México, Era, p. 118.

los habitantes del puerto, sino también a migrantes de otras partes del estado e incluso de otras entidades. Luis Echeverría Álvarez desarrolló el complejo Ixtapa-Zihuatanejo y José Francisco Ruiz Massieu fraccionó los terrenos de Punta Diamante, en Acapulco.

Inicialmente el turismo era nacional y arribaba al puerto de Acapulco por tierra. Ya para la década de 1940, la presencia del turismo extranjero era de consideración, dado que representaba 25% del total. La devaluación de la moneda abarataría los costos a estos visitantes. Cada clase de turismo obedecía a un ciclo estacional. Entre diciembre y marzo se registraba la mayor afluencia de turistas mexicanos.

Los viajes por avión se volvieron cada vez más frecuentes. En la temporada alta, la población flotante igualaba a la residente y los servicios disponibles eran rebasados por la demanda. El agua era insuficiente y parte de los alimentos, incluidos pescado y mariscos, provenía de otros sitios. Un cuarto de lujo podía costar hasta 65 pesos por noche, aunque los precios variaban de acuerdo con la época del año. Los alimentos del día podían sumar 30 pesos. Este crecimiento de la actividad turística se reflejó en los ingresos del municipio de Acapulco, que en 1960 alcanzaron la cifra de \$6 927 114, equivalentes a 50% del total de los ingresos municipales del estado.

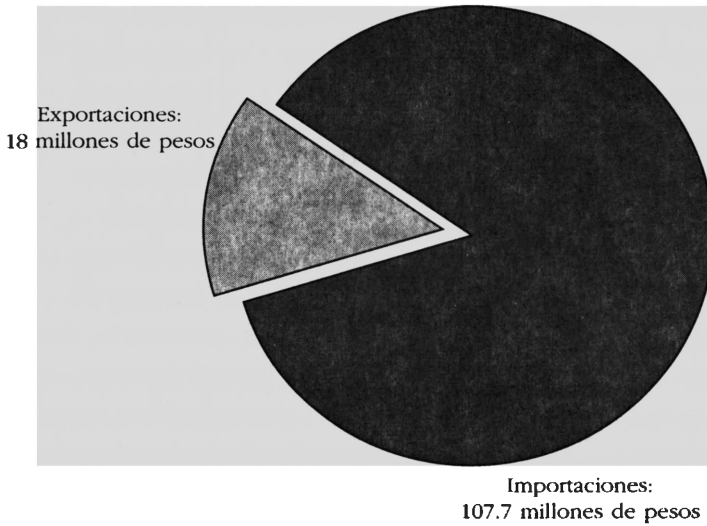
Como puerto mercantil, el papel de Acapulco ha sido menos significativo, pues el Golfo de México, como ya había notado Humboldt a principios del siglo xix, es la principal vía marítima de entrada y salida de bienes. A mediados del siglo xx desembarcaban en el puerto guerrerense importaciones por un valor de casi \$108 000 000 y se exportaban productos que alcanzaban los \$18 000 000 (gráfica iv.4).

Una cuarta parte de la tierra de Guerrero es cultivable. Ajonjolí, copra, mamey, cacahuete, jícama, cacao, coco de agua, flor de jamaica, chabacano, mango, ciruela, café, arroz, maíz, frijol, sorgo, caña de azúcar, plátano, papaya, limón, jitomate, aguacate y algodón son sus principales productos agrícolas (gráfica iv.5). Desde finales del siglo xix se fomentó el cultivo del algodón. Así, Domingo Alzuyeta, rico comerciante oriundo de España, a quien ya citamos en el capítulo iii, convocó a los hacendados de ambas costas a concurrir a su finca de La Sabana, situada a tres leguas de Acapulco, para ensayar con ayuda de un especialista nuevas técnicas para mejorar la producción algodonera. La convocatoria argumentaba que los agricultores utilizaban “métodos rutinarios y anticuados y, por ende, poco provechosos”. La Cámara de Comercio del puerto proporcionaría a los asistentes “los instrumentos de labranza, las semillas y demás útiles necesarios para que semejante proyecto llegue a su feliz realización” (*El Avisador*, 1° de septiembre de 1891).

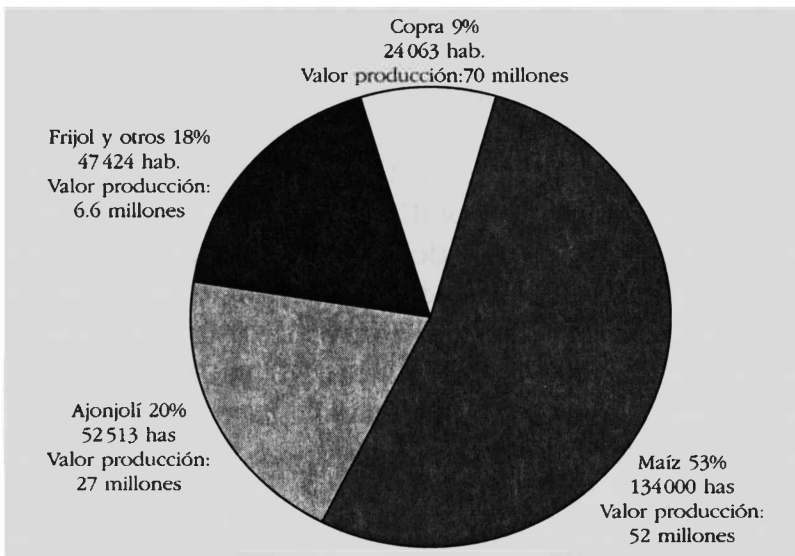
La agricultura predominante en Guerrero es la de subsistencia, abastecida por aguas de temporal. Según el censo de 1940, había en todo el estado poco menos de 700 000 hectáreas de tierras de labor, de las cuales casi 11 000 estaban dotadas de riego. Veinte años más tarde contaba con sólo nueve distritos de riego, todos de tamaño reducido: Atoyac de Álvarez, Ayutla, Ciudad Altamirano, Coyuca de Benítez, Coyuquilla, Laguna de Tuxpan, Quechultenango, San Luis de la Loma y San Luis San Pedro. De acuerdo con el censo de 1970, casi 80% de la tierra estaba en posesión de ejidatarios y comunidades agrarias, aunque las más productivas quedaron en manos de latifundistas.

El 22.4% de la superficie del estado corresponde a pastos na-

GRÁFICA IV.4. *Comercio: importaciones y exportaciones desde el puerto de Acapulco en 1954*



GRÁFICA IV.5. *Tierras cultivadas en el estado de Guerrero en 1954*



FUENTE: *Guerrero: esquema social y económico* (1957), México, Almacenes Nacionales de Depósito.

turales. Sin embargo, las recurrentes sequías los han hecho insuficientes; por ejemplo, para 1976, el coeficiente promedio de agostadero en el estado era de 7.3 hectáreas. La ganadería es extensiva: en 1940 había alrededor de 400 000 cabezas de ganado vacuno, unas 300 000 de porcino y más de 1 200 000 aves. Cuarenta años después, la producción ganadera ascendió a 2 601 214 cabezas (48.8% de bovinos, 26.4% de porcinos, 23.4% de caprinos y 1.4% de ovinos).

Guerrero posee 5% de las costas mexicanas, además de ríos y lagos aptos para la cría de peces; sin embargo, no ha alcanzado una producción importante. Más aún, debido en parte a la demanda turística, importa estos bienes de otras costas mexicanas. En 1946 se capturaron casi 260 000 kilogramos de productos del mar. Diez años después se extrajeron 487 000 kilogramos, cantidad equivalente a un magro 2% del total nacional, que situaba a la entidad en el lugar 17 del país.

En 1977 no había ningún barco mayor de 100 toneladas; cuatro años después, la producción pesquera representaba 1.2% de la alcanzada en toda la República. Las especies más explotadas son el pargo, el robalo, el huachinango, la mojarra y el camarón. La ausencia de políticas de fomento congruentes, una flota pobre y pequeña y la virtual ausencia de frigoríficos y transportes adecuados son algunos factores que explican el escaso éxito en el sector.

La minería se concentra en la zona montañosa del norte, en particular en Taxco. Allí, la extracción de plata tuvo gran importancia desde la época colonial. También se produce mercurio, zinc, plomo, oro y cobre. En la costa hay yacimientos de antimonio, azufre, uranio, tungsteno, titanio, fierro, oro y platino. En 1934 se obtuvieron 34 000 toneladas de plata, cifra que se duplicó entre 1940 y 1943. En 1955, el valor de la producción minera guerrerense fue del orden de \$140 721 000. Por su parte, la industria de la transformación es precaria, y tiene gran peso la manufactura artesanal indígena, que produce textiles, tejidos de palma, artículos de barro y objetos de madera, como las famosas cajitas de Olinalá, elaboradas con lináloe. El padrón industrial de 1944 consignó 308 establecimientos, cifra que ascendió a 2 284 para 1975.

En las dos últimas décadas, México ha sufrido cambios notables y descabros mayúsculos. Se vivió el agotamiento del modelo económico basado en el desarrollo del mercado interno, la sustitución de importaciones, el proteccionismo comercial, el déficit fiscal, el endeudamiento externo y la intervención del Estado en la economía, por lo que fue remplazado por otro fundado en la gestión de la iniciativa privada, la apertura comercial, la reducción del papel económico del Estado, el desarrollo del sector externo, el equilibrio de las finanzas públicas y la promoción del ahorro interno. De todos modos, con uno u otro modelo, el país no escapó a las crisis económicas recurrentes que, por lo general, acabaron en devaluaciones bruscas de la moneda, el crecimiento de las deudas interna y externa y una caída drástica del nivel de vida de amplios segmentos de la población: 1976, 1981-1982, 1987 y 1994-1995.

Resultado de las dificultades económicas ha sido la caída del empleo. En Guerrero, entre 1960 y 1990, la población económicamente activa (PEA) bajó de 38.9% a 37.6% y se desplazó sobre todo al sector terciario, que pasó de 19.3% a 42.6%. Como consumidores de mano de obra destacaron, en el segundo periodo, el comercio, los transportes, la construcción, las manufacturas, la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca. El grupo de ingreso más numeroso se sitúa entre uno y dos salarios mínimos.

De los guerrerenses mayores de 12 años, según el último censo, 636 938 forman parte de la PEA y 1 023 128 no. La mayoría de esta población se concentra en los municipios de Acapulco de Juárez (187 016), Chilpancingo de los Bravo (37 378), Iguala de la Independencia (28 472), Taxco de Alarcón (23 155), José Azueta (20 485) y Chilapa de Álvarez (17 614). No obstante, todos estos lugares tienen una mayor población económicamente inactiva, lo que muestra que no sólo no se abatieron los rezagos seculares, sino que tampoco se crearon los empleos suficientes para que los jóvenes guerrerenses se incorporaran al mercado de trabajo. En las áreas rurales, únicamente Chiapas supera a Guerrero en los índices de pobreza extrema.

Estos datos indican también que la concentración de la pobla-

ción aumentó en zonas provistas de centros urbanos (aunque muchos continuaron viviendo en el campo) y donde había un mercado laboral, sobre todo en el sector de los servicios: 227 670 personas de la población empleada trabajaban en el sector primario, 103 128 en el secundario, y 270 760 en el terciario. Del total, 244 201 eran empleados u obreros, 224 964 trabajaban por su cuenta, 71 283 eran peones o jornaleros y 9 514 eran patrones o empresarios. La mayoría percibía un ingreso situado en el rango que va de menos de uno a dos salarios mínimos.

Según el censo de 1960, más de las tres cuartas partes de los espacios de habitación que había en la entidad se reducían a un cuarto ocupado por toda la familia, en promedio de cinco personas. Sólo 10% tenía drenaje y el adobe predominaba como material de construcción. Había 152 televisores en todo el estado. Entre 1970 y 1990, el número de viviendas se incrementó más o menos de acuerdo con el crecimiento poblacional y las habitaciones mejoraron escasamente sus servicios. Según el último censo, de 501 725 viviendas particulares, sólo 188 596 disponían de drenaje y 138 592 de agua entubada. Predominaban las de dos cuartos sobre las de uno. Contaban con energía eléctrica 393 351 y 408 077 tenían cocina. Leña y carbón se usaban casi en la misma proporción que el gas.

EDUCACIÓN

Hacia finales del siglo XIX, había sólo dos escuelas primarias públicas en Acapulco, a las que concurrían aproximadamente 100 alumnos de uno y otro sexo. Guardaban un estado lamentable, aunque no peor que en el resto de la entidad, excepción hecha de Chilpancingo. Una de ellas, para niños, se localizaba en los suburbios del puerto y fue descrita como

un jacalón construido hace más de un siglo, y cuyo techo se nos dice se reparó hace treinta años; las paredes amarillentas y manchadas por las goteras que forman las lluvias; un cielo de manta hecho girones por la mano severa del tiempo; el piso húmedo y

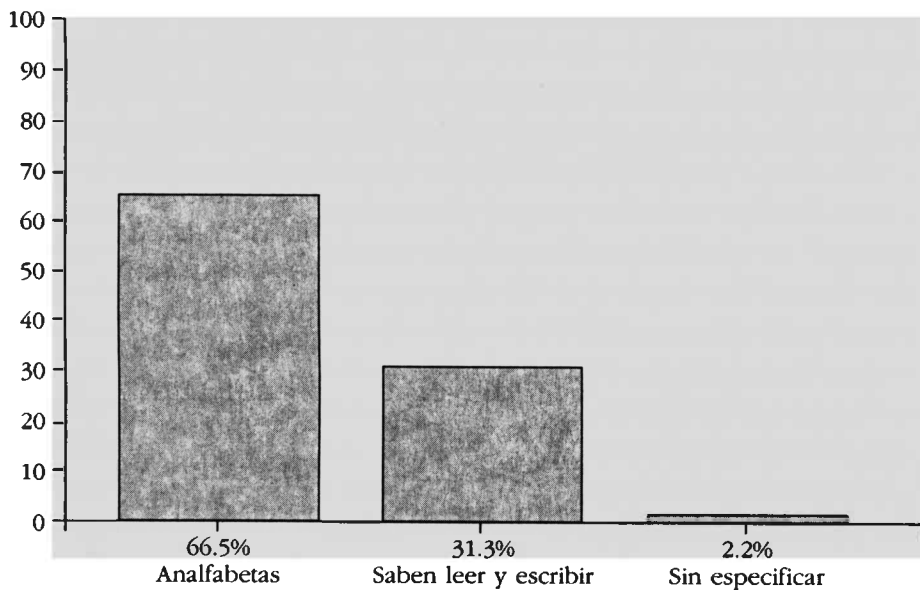
sucio y por todo mobiliario unas pesadísimas mesas con bancos adheridos a las mismas, donde se colocan con gran incomodidad seis u ocho niños. Hay un pequeño pizarrón en regular estado, que el director del establecimiento mandó construir y pagó con su propio sueldo.

Los servicios sanitarios eran muy precarios, pues estaban “bajo un pequeño ciado de teja y formados por un zanjón descubier-to, y como de dos metros de profundidad, [y] unas tablas hechas pedazos [...] que los niños acomodan cada vez que van a hacer sus necesidades corporales”. Quizá eso no era lo peor, sino la carencia de útiles y “la suma irregularidad con que concurren los niños a la escuela”. Otros “no leen porque no hay libros suficientes”. Los profesores ganaban 16 pesos al mes o quizá menos. Después, el autor de la nota formuló un juicio concluyente: “Parece por demás decir, visto esto, que las prescripciones de la ley de que la enseñanza sea laica, gratuita y obligatoria son una mera utopía desde el momento en que se hunde en tan desgraciada situación un ramo de tan indiscutible importancia” (*El Avisador*, 31 de noviembre de 1891).

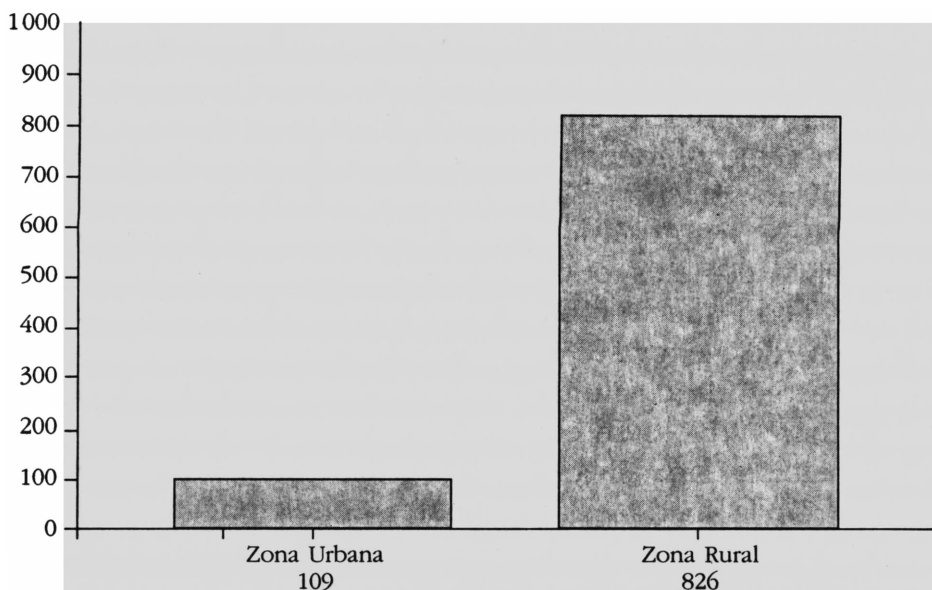
En 1930 había menos de 600 escuelas en el estado y casi 52 000 estudiantes inscritos. El porcentaje de la población analfabeta era de 79.37%, que contrastaba con el nacional, que era de 59.26%. Dieciséis años después, este índice había descendido sólo dos puntos en Guerrero y ocho a escala nacional. Para ese momento, sólo Oaxaca superaba a Guerrero en este poco envidiable rubro. Al respecto, el gobernador Rafael Catalán Calvo reconoció: “El problema de la educación de las masas es uno de los más grandes que sufrimos; la parte del presupuesto de egresos que puede ser aplicada a este ramo es todavía muy pequeña; la población está muy dispersa y el territorio es amplio y escaso en comunicaciones”.

En 1950, dos tercios de la población era analfabeta (gráfica iv.6) y la inmensa mayoría de las escuelas estaban dispersas en el medio rural (gráfica iv. 7). El censo de la década siguiente indicó que había más de 1 400 escuelas y que el analfabetismo afec-

GRÁFICA IV.6. *Nivel de educación en Guerrero, 1950*



GRÁFICA IV.7. *Escuelas primarias en Guerrero, 1952*



taba a 62.81% de la población, predominantemente a la asentada en el campo, a pesar de que allí fue donde se edificaron más aulas. En el nivel básico, cada maestro atendía en promedio a 48 alumnos de una población escolar de 66 025 educandos.

En 1980, las escuelas federales daban servicio a 77.5% del alumnado; las estatales, a 15%, y los sectores particular y autónomo (incluida en éstos la educación superior) al resto. Había 6 892 escuelas, pero el déficit entre la oferta y la demanda educativa era de 13%. Casi un millón de guerrerenses requerían servicios educativos de distintos niveles. La Universidad Autónoma de Guerrero todavía concentraba la educación superior, aunque en años recientes se instalaron universidades particulares y crecieron los centros de enseñanza tecnológica.

Los datos de los censos generales de población y vivienda de los años 1970 y 1990 indican que el porcentaje de personas alfabetizadas de 15 años o más se incrementó en Guerrero de 51 a 73%. Tomando como universo la población mayor de 15 años, de acuerdo con el censo de 1990, 1 073 014 eran alfabetas y 394 310 analfabetas. De este último grupo, 240 354 eran mujeres. Además, 234 356 habitantes habían completado solamente la primaria y 472 466 continuaron la educación media.

Los índices del atraso en Guerrero siguen siendo muy elevados, y no obstante el éxito relativo de algunas políticas públicas en materia de salud o educación, la pobreza y la marginación continúan siendo moneda corriente en la entidad. La desigualdad social no sólo no se abatió, sino que se incrementó en los últimos años, y no está a la vista la oportunidad de menguarla siquiera. El turismo es todavía la actividad económica fundamental, pero, dado que se reduce a una porción de la zona costera y a Taxco, deja enormes franjas del territorio al margen de su derrama económica. Ni una agricultura dinámica ni una industria sólida echaron raíces en el sur. Sólo el sector de servicios apunta en dirección expansiva y está en posibilidades de absorber el aumento de la mano de obra. Estas condiciones, entre otras, abren las puertas a los conflictos sociales.

V. EL ÚLTIMO TRAMO

OTRO HILO DE LA HISTORIA GUERRERENSE es la inestabilidad política. Juan N. Álvarez fue la figura indiscutible del segundo tercio del siglo XIX, factor de contención de las fuerzas políticas y sociales surianas, interlocutor del gobierno nacional y mediador en las disputas locales. Vicente Jiménez, de la Montaña, Diego Álvarez, de la costa, y Canuto A. Neri, del centro, fueron las tres cabezas que surgieron tras su muerte. Como ya narramos en el capítulo II, Jiménez y Álvarez vivieron enfrentados y se alternaron las riendas de Guerrero. Neri incluso desafió los designios de Porfirio Díaz y perdió la vida a causa de ello. Por su parte, Díaz canceló la autonomía del estado al imponer a los gobernadores y, si bien logró dominarlo, propició una relación muy tirante entre las fuerzas políticas locales y los personeros del régimen, por lo general carentes de bases de apoyo y dependientes de la voluntad del oaxaqueño. Las revueltas de Neri (1893), de Rafael Castillo Calderón (1905) y de Francisco y Ambrosio Figueroa (1911) expresaron esta tensión irresuelta.

La lucha armada de 1910, como vimos en el capítulo III, constituyó un periodo de fuerte inestabilidad política en el que el sur recuperó parte de la autonomía perdida. El grupo más compacto fue el que integraron los Figueroa, maderistas convencidos y primeros beneficiarios de la Revolución. Muestra de su poderío fue que Francisco Figueroa gobernó dos veces la entidad; Rubén Figueroa Figueroa estuvo un sexenio entero a cargo del Ejecutivo estatal y Rubén Figueroa Alcocer, su hijo, lo encabezó por tres años. Varias veces gobernaron miembros de su círculo.

La posrevolución trajo una relativa estabilidad política al país pero no a Guerrero, donde fueron constantes tanto la declaratoria de desaparición de poderes por parte del Senado de la República como las renunciaciones de los jefes del Ejecutivo, eufemísti-

camente llamadas voluntarias. Uno de ellos murió estando en funciones. Entre 1925 y 1996, sólo seis gobernadores se sostuvieron en el cargo todo el periodo que les correspondía de acuerdo con la ley electoral: Gerardo Rafael Catalán Calvo, Baltasar Leyva Mancilla, Raymundo Abarca Alarcón, Rubén Figueroa Figueroa, Alejandro Cervantes Delgado y José Francisco Ruiz Massieu. Por su parte, Héctor F. López, Adrián Castrejón, Alberto F. Berber, Alejandro Gómez Maganda, Raúl Caballero Aburto, Caritino Maldonado Pérez y Rubén Figueroa Alcocer, además de varios interinos, no culminaron su periodo.

LA POSREVOLUCIÓN

La rebelión de Agua Prieta y el asesinato de Carranza acabaron con la hegemonía civil en el gobierno. El Ejecutivo quedó en manos de los militares revolucionarios sonorenses. Álvaro Obregón Salido gobernó hasta 1924 al frente de una heterogénea coalición formada por sindicatos obreros, líderes agrarios y militares que respondían a los difusos principios del “nacionalismo revolucionario”.

La sucesión presidencial de 1924 llevó a la ruptura del grupo sonorenses: Obregón apoyó a Plutarco Elías Calles, y Adolfo de la Huerta recibió múltiples adhesiones que incluían las de los enemigos políticos de aquél. A no dudarlo, la más importante fue la de dos terceras partes del ejército, que se rebelaron en diciembre de 1923. Obregón hizo hábiles maniobras políticas y militares para reducirlos; fue implacable con los sublevados y ordenó el fusilamiento de 54 generales que pelearon a su lado durante la Revolución.

Rodolfo Neri venció a los delahuertistas guerrerenses en marzo de 1924, más como consecuencia del declive de la rebelión a nivel nacional que como producto de sus propias acciones. El triunfo militar le permitió reasumir la gubernatura. Rómulo y Francisco Figueroa fueron internados en la prisión de Santiago Tlatelolco. Neri concluyó su mandato en 1925 y lo reemplazó el

general Héctor F. López, quien en la década anterior había combatido a los zapatistas en la Tierra Caliente. Ya gobernador, tuvo que enfrentar a los rebeldes del Plan del Veladero y a los cristeros que se levantaron en Tlapa y Buenavista de Cuéllar, sumando a Guerrero en un movimiento que para entonces se extendía por más de 10 estados. Dimitió a principios de 1928 a resultas de las presiones del ejército federal que, ante los brotes rebeldes, había adquirido el poder *de facto* en la entidad.

Después de una crisis política en Guerrero, en la que hubo dos legislaturas simultáneas, el coronel Enrique Martínez, impuesto por los militares, ocupó la gubernatura como interino en lo que se convocaba a elecciones para sustituir a Héctor F. López. Adrián Castrejón, un antiguo general zapatista convertido al obregonismo, gobernó en los años siguientes. Castrejón aplicó una política populista: creó organizaciones, repartió tierras en los primeros tiempos de su mandato (a tono con lo que hizo Emilio Portes Gil a nivel nacional), sobre todo para restar fuerza a los rebeldes cristeros que, para 1929, contaban con 50 000 en sus filas. También dictó una ley de educación.

Pascual Ortiz Rubio encabezó un gobierno débil que fue tiroteado desde diversos frentes. El ejército, dominado por Calles, lo sometió a una presión constante, de la cual no pudo escapar. La economía resintió los estragos de la crisis de 1929. Finalmente, Ortiz Rubio dimitió el 3 de noviembre y fue sustituido por el general Abelardo L. Rodríguez. En Guerrero se celebraron elecciones gubernamentales dos meses después, las cuales fueron ganadas por el candidato del Partido Nacional Revolucionario (PNR), el general Gabriel R. Guevara, un hacendado hostil al agrarismo.

La elección guerrerense tuvo secuelas negativas: el Congreso local, dominado por los guevaristas, destituyó a Castrejón el 28 de marzo de 1933, tres días antes de concluir su mandato, y nombró en su lugar al diputado Ladislao Alarcón. Entonces, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión envió al senador Francisco Arlanzón y al diputado Enrique Pérez Arce a que verificaran si el desafuero se había realizado conforme a dere-

cho, dado que los diputados federales por Guerrero lo habían objetado aduciendo que se trataba de “una nueva y flagrante violación a la Constitución del estado” (*El Universal*, 30 de marzo de 1933).

En medio de este clima político se estableció en Guerrero el Partido Comunista Mexicano (PCM). La figura que articuló las primeras células fue el ingeniero Hipólito Cárdenas, profesor de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Después, la organización sumó militantes en el resto de la entidad: Domingo Torres y María de la O encabezaron el partido en Acapulco; Juan R. Campuzano, F. Encarnación y Miguel Aroche Parra, en el corredor Chilpancingo-Tixtla; Febronio Díaz, Victórico y Carlos López Figueroa, en Iguala; los profesores Bedolla, Adalberto Reza Sotelo y Rafael Jaimes, así como los hermanos Franco e Isauro Fabián, en la Tierra Caliente; Rafael Bustamante, en Taxco; el profesor Saulo Ramírez y Gonzalo Guerrero, en la Costa Chica; Isidro Mesa, en Atoyac, y los profesores José Gutiérrez y Herón Varela, en Tlapa. Este último llegó a ser presidente municipal allí mismo.

El general Guevara tomó posesión en la fecha prevista. Como gobernador, contaba con el apoyo de Rubén Figueroa Figueroa, electo diputado local en 1934. Sin embargo, los acontecimientos nacionales vinieron otra vez a trastornar la política guerrerense: la disputa por el poder entre los generales Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles hizo que Guevara y otros seis gobernadores callistas fueran retirados de sus cargos en 1935. El viejo gobernador maderista José Inocente Lugo se ocupó del Ejecutivo hasta las nuevas elecciones. El fantasma de diciembre de 1911, cuando el propio Lugo reemplazó a Francisco Figueroa en la gubernatura, se les volvía a aparecer a los Figueroa, quienes no pudieron colocar a uno de los suyos.

El régimen de Francisco Figueroa había iniciado tímidamente el reparto agrario, movido más por presiones políticas que por un agrarismo afín a los rancheros de Huitzucó, más proclives a la promoción del minifundio. Salvo en los gobiernos de Rodolfo Neri, en parte como respuesta a la rebelión delahuertista, y del general Adrián Castrejón, durante la década de 1920 no se hicie-

CUADRO V.1. *El reparto agrario en Guerrero*

<i>Periodo</i>	<i>Hectáreas</i>	<i>Campesinos beneficiados</i>
1920-1934	490 133	36 367
1935-1940	534 897	51 207
1941-1985	895 727	38 432
TOTALES	1 920 752	126 006

FUENTE: Tomás Bustamante Álvarez (1987), "Periodo 1934-1940", en *Historia de la cuestión agraria mexicana. Estado de Guerrero, 1867-1940*, México, Gobierno del estado de Guerrero/Universidad Autónoma de Guerrero/Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México, p. 397.

ron entregas importantes de tierra. Castrejón repartió cerca de 130 000 hectáreas en 1929, la cifra más alta alcanzada por el gobierno estatal antes del cardenismo.

En el periodo 1915-1933 se distribuyeron en todo el país 7 600 000 hectáreas. Durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas se entregaron a los campesinos mexicanos 18 000 000 de hectáreas; a los guerrerenses, más tierras que en los tres lustros anteriores y más de la mitad de las que se repartieron en los 45 años siguientes. Además, se distribuyeron entre un mayor número de personas (cuadro v.1). La Costa Grande, la Costa Chica y el norte de la entidad concentraron muchas de las tierras repartidas, que, conviene apuntar, no solían ser muy adecuadas para la agricultura. Los latifundios y algunas pequeñas propiedades se vieron perjudicados con la asignación de más de 350 dotaciones agrarias.

La reforma agraria cardenista se topó con grandes obstáculos y disputas en el norte de la entidad, donde tenía propiedades la familia Figueroa, acaudillada ahora por una nueva generación, compuesta, entre otros, por el ingeniero Rubén Figueroa Figueroa, sobrino de Ambrosio y Rómulo, y por Jesús Figueroa, hijo del segundo. Jesús era presidente municipal de Huitzucó en el momento de la ejecución de la reforma, que le costó a su padre la pérdida de 67 hectáreas.

CUADRO v.2. *Expropiación a dueños de más de 5 000 hectáreas en el norte de Guerrero (1919-1940)*

<i>Nombre</i>	<i>Hectáreas afectadas</i>
Miguel Montúfar	10 902
Alberto Rivera	10 965
Mucio Romero	1 529
Emigdio Pastrana	10 339
Febronia Gómez	10 774
Rafael Castillo Calderón	4 251
Atlixnac y Anexas, S. A.	8 916
Manuela Mojica	6 414
Isaac Mathewson	5 157
Julián y Ponciano Salgado	4 774

FUENTE: Ian Jacobs (1992), *La Revolución mexicana en Guerrero. Una revuelta de los ranche-ros*, México, Era, pp. 184-186.

Cabe señalar que en la zona norte se vio más afectada la hacienda que la pequeña propiedad; por ejemplo, en el distrito de Hidalgo, a los terratenientes les fueron expropiadas cerca de 100 000 hectáreas, incluidas muchas de Rafael Castillo Calderón, precursor y protagonista de la Revolución en Guerrero (cuadro v.2). Sin embargo, la respuesta de los minifundistas al reparto agrario fue más violenta que la de los terratenientes. Al respecto, baste el ejemplo de los asesinatos de agraristas en Tlaxmalac, cerca de Huitzuc. En otras regiones, como en la Costa Chica, los terratenientes recurrieron a las guardias blancas, como sucedió en Ometepec.

El reparto agrario cardenista tuvo móviles políticos en lugares conflictivos: en Zumpango del Río, Taxco, Tixtla y Chilapa, el gobierno federal utilizó la distribución de tierras para ensanchar su propia base social y restar fuerza a la Unión Nacional Sinarquista. Ésta se había fundado en León, Guanajuato, el 23 de mayo de 1937 como respuesta de la derecha radical y católica al régimen de Cárdenas, quien, con su política agraria podía arre-

batarle el campesinado. En Chilapa, el sinarquismo fue encabezado por Valentino Silva, el doctor Lidio Sánchez Vázquez y el sacerdote Rafael Altamirano. Casi simultáneamente, el movimiento se extendió al norte y al centro de la entidad. Por su parte, los agraristas radicales se organizaron en la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Guerrero.

A la mitad del sexenio de Cárdenas, el general Alberto F. Berber tomó posesión como gobernador. Como los demás, tenía un pasado revolucionario: combatió a las órdenes de Tomás Gómez y Rómulo Figueroa. Fue también diputado local y secretario particular del general Héctor F. López. Durante su régimen, iniciado en abril de 1937, tuvo conflictos con el Partido de la Revolución Mexicana (PRM). Esta formación política había sido producto de la organización en sectores —obrero, campesino, popular y militar— del Partido Nacional Revolucionario (PNR), ocurrida en 1938. Dicha organización sectorial fue un mecanismo de cohesión de los grupos sociales al tiempo que permitió un sólido control sobre obreros, campesinos y clases medias. Las más de las veces, la disputa por el poder se resolvió dentro de las filas del partido gobernante, el cual no sufrió escisiones de consideración, aun cuando no se resolvieran los conflictos internos.

En 1939, el PRM acusó a Berber de haber cometido fraude en las elecciones municipales. Esto le impidió concluir su mandato: el Senado de la República declaró la desaparición de poderes en Guerrero el 18 de febrero de 1941. El profesor Carlos F. Carranco Cardoso concluyó el periodo gubernamental encomendado a Berber y realizó las elecciones que llevaron al general e ingeniero Gerardo Rafael Catalán Calvo al Ejecutivo guerrerense para el periodo 1941-1945. Durante su interinato, Carranco Cardoso realizó obras públicas, como carreteras, mercados municipales, introducción de agua potable en algunos lugares apartados, escuelas y hospitales. En el mismo tono transcurrió el gobierno de Catalán Calvo, que dejó en caja \$45 000 000, en parte como resultado de la racionalización administrativa.

Sin grandes sobresaltos internos, Catalán Calvo entregó la silla al general Baltasar Leyva Mancilla, quien gobernaría seis años

beneficiándose de la reforma constitucional realizada por su antecesor. El 1° de abril de 1951 tomó posesión como gobernador constitucional un civil, el escritor Alejandro Gómez Maganda, quien repartió tierras, construyó escuelas y realizó obras públicas en Chilpancingo y Acapulco. Al igual que el de Berber, su régimen fue interrumpido por la desaparición de poderes, decretada por la Cámara alta. Su remplazo fue el ingeniero Darío L. Arrieta Mateos, el cual ocupó el cargo entre el 21 de mayo de 1954 y el 31 de marzo de 1957. Arrieta Mateos fundó la Dirección de Pensiones del estado.

Para 1960, la política nacional entró en una fase de estabilidad, en la que se consolidó la hegemonía de un partido prácticamente único, que en las elecciones tuvo adversarios meramente nominales: el Partido Revolucionario Institucional, heredero del PNR y del PRM. En Guerrero fue distinto. El general Raúl Caballero Aburto fue electo gobernador para el sexenio 1957-1963. El militar nacido en Ometepepec se caracterizó por su mano dura en el manejo de los conflictos políticos, lo que le valió el rechazo de amplios segmentos de la población. Un movimiento popular propiciaría su caída.

EL MOVIMIENTO DE 1960

El conflicto que costó la silla a Caballero Aburto se inició en Acapulco. Según la crónica del *Excélsior* (19 de octubre de 1960), el 18 de octubre, el gobernador ordenó cerrar las cajas fuertes de la tesorería del ayuntamiento porteño, medida aprobada previamente por el Congreso local y por los síndicos municipales, dado que se acusaba al alcalde de malversación de fondos.

Por su parte, Jorge Joseph Piedra, edil acapulqueño, aseguraba que el gobernador había cometido numerosos crímenes y despojos, además de ser directamente responsable de la deuda que cargaba el erario costeño. También lo acusaba de haberlo amenazado de muerte, de sobornar y amenazar a los síndicos para que le exigieran la renuncia, así como de imponer a Alfonso Villalbazo Alarcón como su remplazo.

Macrina Rabadán, diputada federal por Guerrero, terció en la disputa al declarar que Caballero Aburto usó como grupo de choque a 3 000 hombres del ejido La Laja, comandados por Alfredo López Cisneros, el célebre *rey Lopitos*, para presionar al alcalde y forzar su renuncia. La turba apedreó la casa de Joseph Piedra y lo llenó de injurias. Al día siguiente, una manifestación de aproximadamente 2 000 personas recorrió las calles del puerto en apoyo del alcalde destituido. El Partido Nacionalista de México denunció la corrupción en Guerrero, en tanto que el Frente Reivindicador de Juventudes Guerrerenses celebró "la actitud digna de un verdadero servidor del pueblo como es el señor Jorge Joseph Piedra". La Asociación Cívica Guerrerense, fundada en 1959 y presidida por Darío López Carmona, fue más lejos y pidió la desaparición de poderes en la entidad, abrir una investigación federal al régimen de Caballero Aburto y convocar a una huelga cívica popular en Guerrero. Grupos afines al gobernador respondieron el mismo día con una marcha en el puerto (*Excélsior*, 20 de octubre de 1960).

La inconformidad con el gobierno de Caballero Aburto se extendió rápidamente a otros lugares de Guerrero e incluso motivó el apoyo de grupos externos al estado. En realidad, los sucesos de Acapulco fueron el catalizador de un rechazo mucho más generalizado, que tenía un sustrato de agravios reiterados. El 20 de noviembre se verificó en Chilpancingo una manifestación en la que intervinieron más de 10 000 personas. Mujeres y estudiantes guerrerenses y alumnos del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México recorrieron las calles de Juárez, Morelos y Álvarez, entre otras, hasta llegar a la Universidad de Guerrero. La consigna, de nueva cuenta, era la desaparición de poderes en la entidad. Después se le sumaría la demanda de autonomía para la universidad. Policías y soldados vigilaron su tránsito (*Excélsior*, 21 de noviembre de 1960).

Estudiantes normalistas llamaron a un mitin en Iguala y, en Chilapa, un contingente de marchistas portaba pancartas con la leyenda "¡Muera Caballero Aburto!". El comercio cerró. En Taxco, los propietarios de giros mercantiles acordaron realizar un paro

de actividades y dejar de pagar impuestos en protesta contra el gobernador. Los alumnos de secundaria y de las escuelas Normal y de Enfermería tenían ya varios días en huelga. Los comerciantes de Teloloapan anunciaron medidas semejantes a las de sus pares de Chilapa y Taxco (*Excélsior*, 22 y 23 de noviembre de 1960).

El 21 de noviembre, Joseph Piedra fue reincorporado efímeramente en su cargo, ya que, antes de finalizar la jornada, el cabildo lo destituyó de manera definitiva como presidente municipal. Antes, en un acto público celebrado al mediodía, había agradecido el apoyo de la población a su gestión lanzando vivas a Aca-pulco, al país, al ejército y al presidente Adolfo López Mateos. A las 11 de la noche fue depuesto y se le asignó el cargo de regidor de Obras Públicas y Turismo, que rechazó. Alfonso Villabazo Alarcón fue designado otra vez en su lugar. Una multitud se congregó afuera de la alcaldía para evitar la destitución. Todo fue inútil. Mientras tanto, el gobernador concentró fuerzas policiacas en las principales ciudades y preparó el asalto al edificio de la Universidad de Guerrero, ocupado por estudiantes inconformes. En Teloloapan y Huitzucó se realizaron actos en contra de Caballero Aburto (*Excélsior*, 22, 23 y 25 de noviembre de 1960).

La madrugada del 25 de noviembre, las fuerzas policiacas y militares desalojaron en Chilpancingo a los estudiantes y a otros ciudadanos que estaban congregados desde el inicio del mes en la alameda Francisco Granados Maldonado. Después de cortar energía y suministros, intentaron hacer lo mismo con quienes ocupaban el edificio de la universidad, tomado por un comité de huelga presidido por el estudiante Jesús Araujo Hernández. En el ataque a la alameda muchos resultaron heridos, aunque, finalmente, el asalto al inmueble no se consumió.

Iglesias y fábricas hicieron sonar campanas y silbatos, que congregaron a la población, provista de palos y piedras, alrededor del área del conflicto. Las fuerzas del orden se contuvieron. Fueron detenidos, entre otros, el doctor Pablo Sandoval, líder del Comité de Padres de Familia y militante del Partido Comunista Mexicano, y el profesor Genaro Vázquez Rojas, uno de los diri-

gentes de la Asociación Cívica Guerrerense, a pesar de que ambos estaban amparados. Había un virtual estado de sitio en la capital y la actividad económica estaba prácticamente paralizada: los contribuyentes se declararon en suspensión de pagos, y la burocracia estatal, en huelga. Los pequeños comerciantes llevaban 18 días en paro. Tres diputados progobiernistas quedaron a un paso de ser linchados por la población enardecida, que en calles adyacentes a la universidad enarbolaba banderas mexicanas y estandartes de la Virgen de Guadalupe (*Excélsior*, 26 y 27 de noviembre de 1960).

El conflicto se prolongó un tiempo más, a pesar de que desde finales de noviembre parecía que ya estaba en una situación límite. En Tierra Colorada, el presidente municipal encabezó el 27 de diciembre una manifestación que pedía la renuncia del gobernador. En Taxco, los estudiantes tomaron el palacio municipal, al parecer con la anuencia de las autoridades locales. Un día después, los ayuntamientos de Chilpancingo, Tixtla, Chilapa, Zumpango del Río, Taxco, Apango, Huitzuco y Tenango del Río desconocieron el régimen del general Caballero Aburto. Mientras tanto, los burócratas chilpancingueños se manifestaron por “derrocar al mal gobierno”. Un reportero resumió así la situación: “Los diputados locales son los únicos que aún apoyan al gobernador Caballero Aburto” (*Excélsior*, 28 y 29 de noviembre de 1960).

Pero el general no estaba dispuesto a dejar el cargo sin, por lo menos, dar una lección a la población insurrecta. Así, el 30 de diciembre, en la calle de Guerrero, la alameda Francisco Granados Maldonado y el edificio de la universidad, en Chilpancingo, la fuerza pública arremetió contra los inconformes, alegando que fue provocada. Después del confuso incidente en el que murió el electricista Enrique Ramírez, los trabajadores del ramo celebrarían un mitin en Acapulco.

En más o menos 30 minutos quedaron 13 muertos y 37 heridos graves, casi todos civiles. Dos soldados perecieron en la acción. La gente se encerró en sus casas, mientras que los estudiantes permanecían concentrados en el edificio de la universidad y los

funcionarios estatales se refugiaban en el céntrico hotel Muñiz. Los mandos del ejército se quejaban de la hostilidad de los chilpancingueños, que se negaban a venderles víveres (*Excélsior*, 31 de diciembre de 1960).

Poco antes de los acontecimientos sangrientos, el Senado de la República integró una comisión encabezada por Manuel Moreno Sánchez, que viajó a Guerrero a evaluar la situación. Además de Moreno Sánchez, formaban parte de ella los senadores Agustín Olivo Monsiváis, Nicolás Canto Carrillo, José Castillo, Tomás Valles, Antonio Mena Brito, Jesús López Lira, Ramón Ruiz, Natalio Vázquez Pallares, Maximiliano Ruiz Castañeda y Emilio Martínez Manautou (*Excélsior*, 31 de diciembre de 1960). No había pasado ni una semana del año nuevo cuando la Cámara alta resolvió declarar inexistentes los poderes en Guerrero y separar al general Caballero Aburto del Ejecutivo estatal.

Con la intención de aminorar tensiones entre los grupos políticos guerrerenses, Arturo Martínez Adame, un abogado nacido en Chilpancingo, fue designado para terminar el periodo gubernamental. Por causa de una enfermedad, Martínez Adame dejó el cargo un mes antes de lo previsto: el 4 de marzo de 1963 lo reemplazó Alberto Saavedra Torrija. A este último correspondió entregar la gubernatura al doctor Raymundo Abarca Alarcón, originario de Chilpancingo aunque vecindado en Iguala, quien concluyó su mandato el 31 de marzo de 1969.

El profesor Caritino Maldonado Pérez fue electo gobernador para el periodo 1969-1974. Nació en Tlalixtaquilla y se formó en la Escuela Normal Rural de Oaxtepec, en Oaxaca. Continuó sus estudios en la Escuela Nacional de Maestros del Distrito Federal. Fue diputado local y federal, presidente del comité estatal del PRI en Guerrero, secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y senador durante el periodo 1958-1964. En la primavera de 1971 perdió la vida en un accidente aéreo, ocurrido cerca de Miraval.

EL PASADO RECIENTE

Los acontecimientos de 1960 fueron un parteaguas en la historia guerrerense de la segunda mitad del siglo, referencia simbólica de la movilización popular y punto del cual surgieron algunos de los actores centrales de los conflictos de los siguientes lustros.

En el periodo posrevolucionario surgió un semillero de cuadros políticos, reclutados entre militares, abogados y maestros. Del magisterio salieron muchos miembros de la oposición de izquierda, como fue el caso de Genaro Vázquez Rojas. Éste nació en 1931 en San Luis Acatlán, estudió en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y ejerció la carrera docente en su estado natal. Participó en el Movimiento Revolucionario del Magisterio, en las jornadas que costaron la gubernatura al general Caballero Aburto y también en el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), constituido en 1961 bajo el liderazgo del general Lázaro Cárdenas. De orientación nacionalista y simpatizante de la Revolución cubana, el MLN reunió a intelectuales y políticos, entre los que se encontraban Narciso Bassols, Heberto Castillo, Alonso Aguilar, Carlos Fuentes, Manuel Marcué Pardiñas, Cuauhtémoc Cárdenas, Enrique González Pedrero, Jorge Carrión, Eli de Gortari e Ignacio García Téllez.

Vázquez Rojas intervino en 1959 en la formación de la Asociación Cívica Guerrerense (ACG). El movimiento popular que puso al general Caballero Aburto expandió la influencia de la ACG, que progresivamente se radicalizó. La organización, que 10 años después se transformaría en la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), tenía un programa político que demandaba la nacionalización de la minería, una reforma agraria integral, la adopción de una economía planificada, la alfabetización y el desarrollo cultural del pueblo y garantías para el ejercicio de la libertad política.

En 1966, la policía guerrerense detuvo a Vázquez Rojas en la ciudad de México; luego lo trasladó a Chilpancingo. Dos años después, un comando armado de la ACG lo liberó de la cárcel

estatal y, de allí hasta su muerte, ocurrida en febrero de 1972 en un accidente carretero en Michoacán, vivió en la clandestinidad. En ese momento, la lucha armada era ya la táctica de la ACNR y el secuestro de figuras políticas y de personas adineradas su recurso más exitoso de financiamiento. Así, en 1971 secuestró a Jaime Castrejón Díez, un próspero empresario de Iguala que fungía como rector de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Para entonces, la organización ya tenía instalado un núcleo guerrillero en la sierra de Guerrero y planteaba una revolución nacional para “lograr la plena independencia política y económica de México”. De acuerdo con su programa, un gobierno de coalición formado por trabajadores urbanos, campesinos, estudiantes y elementos “progresistas” de la sociedad sustituiría al régimen actual. El gobierno federal, encabezado por el licenciado Luis Echeverría Álvarez, desplazó a 27 000 soldados a la sierra para combatir a la guerrilla.

Al igual que Genaro Vázquez, Lucio Cabañas Barrientos se formó como profesor en Ayotzinapa. Nació en El Porvenir, municipio de Atoyac de Álvarez, en 1938. En 1962 fue secretario general de la Federación de Estudiantes Socialistas de México y militante del Movimiento de Liberación Nacional y del Partido Comunista Mexicano (PCM). También tomó parte en el derrocamiento de Caballero Aburto y colaboró en la organización de los campesinos de la Costa Chica. Por sus actividades políticas fue expulsado de la escuela Modesto Alarcón, junto con el profesor Serafín Núñez Ramos, y trasladado a Durango en diciembre de 1965. Sin embargo, la presión de los habitantes de Atoyac hizo que lo reinstalaran en su plaza.

Al parecer, Cabañas Barrientos y sus allegados decidieron formar un grupo de autodefensa armada a raíz de una matanza de maestros rurales ocurrida en Atoyac el 18 de mayo de 1967, perpetrada por pistoleros y policías judiciales estatales que los emboscaron en una plaza pública durante un mitin organizado por los padres de familia de la escuela primaria Juan N. Álvarez. Cabañas fue amenazado de muerte y decidió internarse en la sierra, donde, a lo largo de cinco años, reclutó, concentró, adiestró

y armó mal a un grupo guerrillero del que surgiría el Partido de los Pobres (PP), una formación política de ideología difusa y de actuar sectario, con un perfil que se podría catalogar genéricamente como socialista. Para entonces, Lucio Cabañas ya había abandonado las filas del PCM.

La primera acción armada de la guerrilla de Cabañas ocurrió en junio de 1972, cuando emboscó y acabó con un convoy del ejército federal. El acontecimiento impactó a la opinión pública, y la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo del general Hermenegildo Cuenca Díaz, percibió la magnitud potencial que entrañaba ese acto. La presencia militar se incrementó en Guerrero y llegó a alcanzar en 1974 la cifra de 50 000 hombres. Mientras el ejército se desplegaba, la guerrilla, que nunca alcanzó a ser un fenómeno de masas —se dice que en su mejor momento reunió a 200 elementos—, seguía la táctica de ejecutar acciones rápidas en distintos lugares del estado y después ocultarse en la espesura de la sierra o en los poblados: morder y correr y después reagruparse para repetir la acción.

Dos años transcurrieron sin variar mucho la escala de los encuentros entre militares y rebeldes hasta que, de pronto, se presentó a los segundos la ocasión de dar un golpe mayor: el senador Rubén Figueroa Figueroa, precandidato del PRI a la gubernatura estatal, quiso realizar una acción espectacular consistente en hablar directamente con Lucio Cabañas y persuadirlo de que dejara las armas y se incorporara a la vida civil por medio de un partido político, con lo que se convertiría en el artífice de la anhelada pacificación de la entidad. Su afán protagónico lo hizo subestimar los riesgos y desoír las advertencias de algunos miembros de su círculo y de las autoridades federales. Cabañas Barrientos no desperdició esta oportunidad de oro que le obsequiaba aquel verano de 1974 e hizo que el ingeniero Figueroa Figueroa se internara en la sierra para capturarlo sin mayor problema y exigir un cuantioso rescate.

Figueroa Figueroa había nacido en Huitzuco el 9 de noviembre de 1908. Según su propia narración, el primer trabajo lo obtuvo a los 15 años como mozo de Luciano Domínguez, teso-

rero de la línea de camiones San Ángel Inn. Estudió topografía en la Universidad Nacional Autónoma de México e impartió clases en la Escuela Normal de Chilpancingo. Los negocios y no la docencia fueron su actividad fundamental: en 1943 fundó la empresa Autotransportes Figueroa y, desde 1955, presidió la Alianza de Camioneros de México. Dueño de la línea de Autobuses Flecha Roja y concesionario del transporte del correo en el país, la política le sirvió para beneficiar su actividad empresarial, que extendió a sectores como la industria de la construcción y la ganadería. El virtual monopolio del transporte en la entidad le permitió amasar una fortuna considerable. La formación de su propio cacicazgo político le dio oportunidad de hacerse de las riendas de Guerrero por largo tiempo e incluso de heredarlas a sus descendientes. Dos veces diputado federal, Figueroa Figueroa fue senador en el periodo 1970-1974 y vocal ejecutivo de la Comisión del Balsas.

Cuatro meses duró el secuestro, que fue cada vez más difícil de manejar, dado el despliegue del ejército, que avanzaba peinando la sierra. La guerrilla resolvió no ejecutar a Figueroa Figueroa, lo que complicaba en extremo su repliegue, ya que se trataba de cargar con un hombre de 66 años de edad. Mientras tanto, en el cine Guerrero de Chilpancingo y, por supuesto, sin el senador, de quien se mostró una gran fotografía, los tres sectores del PRI, en presencia de su presidente, el licenciado Jesús Reyes Heróles, expresaron su respaldo a la candidatura de Figueroa al gobierno del estado.

Después de varias delaciones de los habitantes de la zona y de estrechar el cerco a la guerrilla cerca de El Quemado, el ejército dio alcance a la columna de Lucio Cabañas. El 8 de septiembre liberó a Figueroa Figueroa en medio de una tupida balacera. Muchos detalles del secuestro permanecen en la penumbra.

En 1985, un comando que decía pertenecer al Partido de los Pobres secuestró a Arnoldo Martínez Verdugo, secretario general del PCM en la época de la guerrilla cabañista, y exigió a este partido el reembolso del rescate pagado por los familiares de Figueroa Figueroa y entregado gracias a la mediación del sacerdote

Carlos Bonilla Machorro. El PP sostenía que el dinero fue puesto en manos del PCM y que nunca se lo entregaron.

Aunque herido en el cuello aquel 8 de septiembre, Cabañas y otros rebeldes lograron huir, pero su captura ya era sólo cuestión de tiempo: hacia finales de noviembre, guerrilleros y militares se trabaron en un combate que dejó un saldo de varios muertos en ambos bandos. El 2 de diciembre de 1974, en El Otatal, municipio de Tecpan de Galeana, los hombres de Cabañas y él mismo fueron avistados por el ejército. De acuerdo con el parte de guerra, murieron en un enfrentamiento armado.

Israel Nogueta Otero, nacido en la costa, había sido designado para terminar el sexenio iniciado por Caritino Maldonado, lo que no pudo hacer, pues fue destituido meses antes de entregar el puesto, acusado de corrupción. Lo sustituyó el abogado Javier Olea Muñoz. Finalmente, Figueroa Figueroa asumió la gubernatura el 1º de abril de 1975. En su discurso de toma de posesión —a la que acudieron el presidente Luis Echeverría, seis secretarios de Estado, 12 gobernadores, los presidentes del PRI, Jesús Reyes Heróles, y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Enrique Olivares Santana— aseguró que la honestidad sería “norma invariable” de su gestión y que no permitiría a nadie “hacer negocios al amparo del cargo que desempeñe”. Aludiendo a la guerrilla y a su enemigo político, el ex gobernador Israel Nogueta Otero, agregó: “Llego al gobierno del estado sin resentimientos ni fobias, ni afán de revanchas contra nadie, ni como jefe de una facción victoriosa que se apreste a usufructuar, en provecho personal, los frutos de la victoria” (*Excélsior*, 2 de abril de 1975).

A despecho de su discurso, lo cierto es que los negocios de Figueroa Figueroa prosperaron durante su régimen y la oposición, incluidos los resabios de la guerrilla, fue tratada con mano dura: su gestión se recuerda por la violencia y el poco respeto por los derechos humanos. Hubo además un conflicto permanente entre el gobierno estatal y las autoridades de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde se atrincheró la oposición de izquierda. La institución se convirtió en rehén de disputas internas y en botín de algunos universitarios corruptos.

El gobernador integró a su gabinete al doctor Virgilio Gómez Moharro como secretario general de gobierno, a Edmundo Moyao como director general de Hacienda y a Eduardo López Betancourt como procurador general de Justicia. El general Raúl Uriza Castro quedó a cargo de la dirección general de Policía y Tránsito; Raúl Pous Ortiz fue nombrado coordinador general de Educación Pública; Jesús Araujo Hernández, el principal dirigente del movimiento de 1960, presidiría el Tribunal Superior de Justicia; Leonel Altamirano recibió la cartera de desarrollo económico y Febronio Díaz Figueroa, su sobrino, fungiría como secretario privado (*Excélsior*, 2 de abril de 1975).

Ufano, Figueroa Figueroa declaró a la prensa días después del cambio de poderes en Guerrero: "Siempre ando armado y no se dará el caso de que me secuestren nuevamente; un muerto a nadie le interesa y a mí sólo muerto podrán llevarme a alguna sierra o a alguna madriguera de quien quiera que sea". Aceptó que su familia había pagado un rescate para salvar su vida, aunque no tan cuantioso como se especulaba en los medios impresos. Dijo también que para subsanar las grandes carencias de la entidad era necesario actuar de manera realista y no abusar de los contribuyentes, pues se corría el riesgo de que más pronto que tarde "nuestros amigos y nuestros electores se unificarán, pero para recordarnos a nuestros progenitores" (*Excélsior*, 4 de abril de 1975). Un periodista resumió así su gestión: "Figueroa concluye un sexenio caracterizado por la arbitrariedad y el estilo hosco que a veces quiso disfrazarse de pintoresco [...] Para suerte de la entidad, Alejandro Cervantes Delgado está en situación de imprimir al gobierno un modo por completo diverso" (*Unomásuno*, 1º de abril de 1981).

Después de la toma de posesión del licenciado Cervantes Delgado, electo para el periodo 1981-1987, el nuevo procurador de Justicia, José Naime Naime, prometió "que se investigarán todas las denuncias que el pueblo de Guerrero presente al actual régimen por actos represivos concretados durante el gobierno de Figueroa". Esto en respuesta a una manifestación que se realizó en Chilpancingo el día del cambio de poderes en la entidad, al

que concurrieron el presidente José López Portillo y miembros de su gabinete (*Unomásuno*, 2 de abril de 1981).

Alejandro Cervantes Delgado nació en Chilpancingo en 1927. Se preparó como profesor normalista y estudió después la licenciatura en economía en la UNAM, donde se graduó en 1958. Desde joven militó en el PRI y llegó a ser director general del Instituto de Estudios Políticos y Sociales (IEPES) en el año de 1978. Hizo una larga carrera en la administración pública: director de Estudios Técnicos y Económicos de la Secretaría del Patrimonio Nacional (1959-1963), director general de Hacienda y Economía del estado de Guerrero (1963-1965) y subdirector de Asuntos Económicos y Pesqueros de la Secretaría de Industria y Comercio (1966-1970). En la década de 1970 fue funcionario de la Secretaría de Hacienda y de Ferrocarriles Nacionales de México. Se desempeñó como diputado federal en el periodo 1973-1976 y como senador de la República en 1976-1981.

En su primer informe de gobierno, Cervantes Delgado apuntó que “los distintos indicadores revelan que tenemos un mayor grado de atraso [en Guerrero], expresado en carencias y necesidades sociales más agudas que en otros estados de la federación”. Señaló al turismo como la actividad económica más importante en la entidad, por lo cual le dedicó en 1981 una partida presupuestal de \$51 000 000, lo que representó 168% más que lo gastado en el año anterior. El apoyo federal también creció en el sector. La devaluación monetaria de 1981, decía, beneficiaba directamente a la actividad. En relación con el campo, declaró: “Tenemos la convicción de que la vía más efectiva para hacer justicia a los campesinos sigue siendo la reforma agraria integral”. Apuntó también que entre 1980 y 1981 había aumentado 8.2% la superficie irrigada en Guerrero. En cuanto a los demás sectores económicos, habló más de intenciones que de resultados.

Cervantes Delgado gobernó durante todo un sexenio. El 1º de abril de 1987 fue relevado por José Francisco Ruiz Massieu, quien, en su toma de protesta, prometió a la población desterrar “viejos abusos” y sustituirlos por nuevos usos políticos de carácter democrático, pues el “pueblo guerrerense reclama que se

haga más y mejor obra política”. Ofreció también realizar una reforma municipal integral, crear la Procuraduría Social de la Montaña, mejorar el abasto de agua potable en Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala y Taxco y “el saneamiento definitivo de la bahía de Acapulco”. El presidente Miguel de la Madrid Hurtado y 11 gobernadores acudieron al acto (*Unomásuno*, 2 de abril de 1987).

José Francisco Ruiz Massieu nació en Acapulco el 2 de julio de 1946. Estudió derecho en la UNAM (1965-1969) e hizo una maestría en ciencia política en la Universidad de Essex, Inglaterra. Se afilió al PRI en 1967 y fue subdirector general del IEPES en 1981-1982, asesor del director general del Infonavit (1974-1979), miembro del Consejo Consultivo Agrario (1979-1980) y director general de Gobierno del estado de Guerrero en 1981. Escribió varios libros sobre derecho, política y administración pública e impartió clases en la UNAM entre 1972 y 1976. Ese último año recibió el Premio Nacional de Administración Pública y, en 1980, la medalla Francisco Figueroa Mata, otorgada por el gobierno de Guerrero. Antes de ser postulado por el PRI a la gubernatura guerrerense se desempeñaba como subsecretario de Planeación en la Secretaría de Salud, encabezada por el doctor Guillermo Soberón Acevedo.

Ruiz Massieu carecía de una base política local y reclutó a sus altos mandos burocráticos en la ciudad de México. Racionalizó la planta administrativa del gobierno y desincorporó 19 de las 36 empresas estatales. Su gestión no estuvo exenta de conflictos mayores, como los vinculados con las elecciones municipales del 3 de diciembre de 1989, calificadas de irregulares por la oposición y propiciadoras de un prolongado conflicto poselectoral. Meses después de concluir su periodo gubernamental fue designado director general del Infonavit y, más adelante, secretario general del PRI, para posteriormente ser electo diputado federal para el ciclo legislativo 1994-1997. Fue asesinado por un sicario en la ciudad de México, en una calle contigua al Monumento de la Revolución, el 28 de septiembre de 1994.

Rubén Figueroa Alcocer, hijo de Rubén Figueroa Figueroa, fue

electo gobernador para el periodo 1993-1999 con 228 191 votos, poco más del doble de los alcanzados por el Partido de la Revolución Democrática. Aunque en su discurso de toma de posesión empleó un tono conciliador, más pronto que tarde tensó las relaciones políticas en la entidad y entabló una tirante relación con las organizaciones sociales: el 28 de junio de 1995, la policía motorizada estatal asesinó en el vado de Aguas Blancas a 17 campesinos pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (ocss), que se dirigían a participar en un mitin en Atoyac.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió una investigación sobre los sucesos de Aguas Blancas y emitió una recomendación (la 104/95), en la que apuntó que había suficientes elementos para consignar no sólo a los policías que intervinieron en la acción, sino también a las autoridades superiores que dieron las órdenes, algunas del primer círculo del gobierno estatal. En julio de 1997, el juzgado tercero penal, con asiento en Acapulco, dictó sentencia definitiva contra los miembros de la policía motorizada que dispararon a los campesinos y contra algunos funcionarios menores ligados con el acontecimiento. Treinta y nueve personas fueron juzgadas y sentenciadas (*Reforma*, 12 de julio de 1997). Dos años después saldrían de prisión. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió a dos magistrados al lugar de los hechos con objeto de recoger testimonios y redactar un informe que se presentaría al pleno. En el dictamen final se mencionó que había elementos suficientes para inculpar a Figueroa Alcocer, quien, el 12 de marzo de 1996, pidió licencia al Congreso local para abandonar su cargo de gobernador. Tres meses después, durante la conmemoración del primer aniversario de la matanza de Aguas Blancas, la guerrilla hizo su reaparición pública.

CRONOLOGÍA

- 1468-1502 Ahuízotl domina la mayor parte del territorio guerrerense.
- 1529 Fundación de Taxco.
- 1531 Rebelión de los yopes.
- 1532 Fundación de Acapulco.
- 1548 Tuzantla paga tributo en plata a los conquistadores españoles.
- 1565 Atraca en Acapulco el Galeón de Manila.
- 1591 Fundación de Chilpancingo.
- 1742 José de la Borda llega a Taxco.
- 1743 George Anson, marino inglés, se apodera del Galeón de Manila.
- 1751 Da inicio la construcción de la iglesia de Santa Prisca.
- 1767 Nacimiento de Valerio Trujano en Tepecoacuilco.
- 1772 Hermenegildo Galeana nace en Tecpan.
- 1778 Comienza la construcción del fuerte de San Diego.
- 1783 Nacimiento de Vicente Guerrero en Tixtla.
- 1784 Se levantan las prohibiciones que impedían comerciar a la Nueva España con Filipinas.
- 1786 Desaparecen las alcaldías mayores de Tlapa, Taxco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Ajuchitlán, Acapulco y Zacatula.
- 1789 Nicolás Bravo nace en la hacienda de Chichihualco.
- 1790 Nacimiento de José María Izazaga en la hacienda de El Rosario.
- 1790 Se establece una ruta marítima permanente entre Acapulco y El Callao.
- 1790 Nace Juan Nepomuceno Álvarez en Atoyac.
- 1791 Arriba Alejandro Malaspina al puerto de Acapulco.
- 1799 Carlos IV concede a Acapulco el título de ciudad.
- 1803 Alejandro von Humboldt llega a Acapulco.

- 1808 Se forma en Tepecoacuilco un centro conspirador en favor de la independencia.
- 1810 La familia Bravo toma las armas en Chilpancingo.
- 1811 José María Morelos y Pavón decreta la creación de la provincia de Tecpan, otorgándole el título de ciudad.
- 1812 Nace Diego Álvarez en Coyuca de Benítez.
- 1813 Llega a Chilpancingo la primera imprenta que hubo en el Sur.
- 1813 Morelos da a Chilpancingo el título de ciudad y la nombra Nuestra Señora de la Asunción.
- 1813 Realización del Primer Congreso del Anáhuac, en Chilpancingo.
- 1814 Muerte de Hermenegildo Galeana.
- 1815 Morelos es conducido a Tepecoacuilco en calidad de prisionero.
- 1816 Pío VII expide la bula que crea el obispado de Chilapa.
- 1817 Muere Juan del Carmen.
- 1818 Vicente Guerrero forma el Gobierno Provisional Mexicano.
- 1818 Muerte de Juan José Galeana.
- 1819 Juan N. Álvarez es nombrado segundo comandante general de la costa del sur.
- 1820 Pedro Ascencio Alquisiras derrota a Agustín de Iturbide.
- 1821 José Magdaleno Ocampo confecciona la bandera nacional en Iguala.
- 1821 Publicación de *El Mexicano Independiente*, primer periódico de la región.
- 1821 Última visita del Galeón de Manila a Acapulco.
- 1822 Se edita *El Relámpago*.
- 1823 Después de la visita de Joel R. Poinsett a Taxco, se difunde en los Estados Unidos, y después en el resto del mundo, la flor de Nochebuena.
- 1826 Nace en Taxco Lauro María Jiménez, primer mexicano en estudiar los microorganismos.
- 1827 Nicolás Bravo se pronuncia en contra del gobierno de Guadalupe Victoria.

- 1829 Vicente Guerrero preside el gobierno nacional.
- 1830 Juan N. Álvarez, José Salgado y Juan José Codallos forman el Ejército Federal Mexicano.
- 1831 Vicente Guerrero es fusilado en Cuilapam.
- 1832 Juan N. Álvarez se adhiere al Plan de Veracruz.
- 1833 Publicación de *La Antorcha*.
- 1834 Nace Ignacio Manuel Altamirano en Tixtla.
- 1835 Juan N. Álvarez desconoce a Antonio López de Santa Anna como presidente de la República.
- 1841 Nicolás Bravo y Juan N. Álvarez convocan a la creación del Departamento del Sur.
- 1842 Insurrección de Quechultenango.
- 1843 Juan N. Álvarez es declarado en rebeldía por el gobierno de Santa Anna.
- 1844 Sublevación de Ahuacuoctzingo, acaudillada por Miguel Covarrubias.
- 1845 Plan de Mochitlán.
- 1845 Juan N. Álvarez es nombrado comandante de la División del Sur.
- 1846 Juan N. Álvarez se pronuncia por el restablecimiento del federalismo.
- 1847 El Congreso aprueba la formación del estado de Guerrero.
- 1848 La legislatura de Michoacán resuelve no ceder a Guerrero la municipalidad de Coyuca.
- 1849 Se erige el estado de Guerrero, gobernado provisionalmente por Juan N. Álvarez.
- 1850 Iguala alberga al primer Congreso local.
- 1850 Publicación de *La Aurora del Sur*, primer periódico oficial de la entidad.
- 1850 Miguel García asume el gobierno estatal.
- 1851 Tixtla se convierte en la capital guerrerense.
- 1851 Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
- 1852 Juan N. Álvarez deja la gubernatura, que le había sido asignada el año anterior.

- 1853 Tomás Moreno es designado gobernador.
1854 Plan de Ayutla.
1855 Se edita en Acapulco *El Restaurador de la Libertad*.
1856 Miguel García ocupa la gubernatura.
1857 Juan N. Álvarez publica el *Manifiesto a los pueblos cultos de Europa y América*.
1858 Juan N. Álvarez reconoce al gobierno juarista.
1859 Vicente Jiménez promulga en Guerrero las Leyes de Reforma.
1860 Anselmo Torrija ocupa la gubernatura.
1861 Ignacio Manuel Altamirano es electo diputado al Congreso federal.
1862 Publicación de *El Arco Iris*.
1863 Porfirio Díaz recupera Taxco y Chilpancingo.
1864 La escuadra francesa bloquea Acapulco.
1865 Fundación del Club Álvarez en Tixtla.
1866 Benito Juárez declara a Guerrero en estado de sitio.
1867 Fallece Juan N. Álvarez en su hacienda La Providencia.
1867 Se publica *El Progreso de Guerrero*.
1868 Publicación de *El Costeño y La Paz*.
1869 Creación del Instituto Literario en Tixtla, dirigido por Francisco Granados Maldonado.
1869 Ignacio Manuel Altamirano publica *El Renacimiento*.
1870 Formación del distrito de Bravos.
1871 Vicente Jiménez apoya el Plan de La Noria.
1872 Fallecimiento de Francisco Granados Maldonado.
1873 Publicación de *El Fénix*.
1874 Promulgación de una nueva Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
1875 Publicación de *La Voz de Aldama*.
1876 Porfirio Díaz nombra a Vicente Jiménez gobernador y jefe de la revolución en Guerrero.
1877 Muere en Tecpan Juan B. Berdeja.
1878 Canuto A. Neri es designado jefe militar en el estado.
1879 Nace el músico Emilio Vázquez Jiménez.
1880 Se publican *El Porvenir del Sur y La Opinión del Sur*.

- 1881 Diego Álvarez ocupa la gubernatura.
1882 Publicación de *La Estrella del Sur*.
1883 Inauguración del palacio de gobierno de Chilpancingo.
1885 División del estado en 13 distritos.
1886 Promulgación del Código Penal estatal.
1886 Creación del distrito de Zaragoza.
1887 Ignacio Manuel Altamirano funda la Escuela Normal del estado.
- 1889 Nace Adolfo Cienfuegos y Camus.
1890 Nacimiento de Ezequiel Padilla.
1890 Nace Juan Ranulfo Escudero.
1890-1891 Rebelión de Juan Galeana.
1891 Nacimiento del músico Antonio I. Delgado.
1892 Arroyo Grande cambia su nombre por Arcelia.
1893 Muere Ignacio Manuel Altamirano en San Remo, Italia.
1893 Revuelta de Canuto A. Neri.
1894 Publicación de *El Atleta*, *El Imparcial* y *El Avisador*.
1895 Nace el escritor José Castilleja Ugarte.
1896 Publicación de *El Iris del Sur*.
1897 Nace en Zirándaro el doctor Ignacio Chávez.
1897 Se publican *El Buquet*, *El Niño* y *La Miniatura*.
1899 Muere Diego Álvarez en La Providencia.
1899 Publicación de *El Eco del Sur* y *La Educación Artística*.
1901 El Plan del Zapote desconoce a Porfirio Díaz.
1904 Fallece Agustín Mora.
1905 Movimiento de Rafael Castillo Calderón.
1906 Pungarabato y Zirándaro se incorporan a Guerrero.
1907 Nace el pintor Leopoldo Estrada.
1908 Nace Rubén Figueroa Figueroa.
1910 Inauguración de la carretera Iguala-Chilpancingo.
1911 Plan Político Social.
1913 Ambrosio Figueroa es fusilado en Iguala.
1914 Emiliano Zapata toma Chilpancingo.
1915 Asesinato de Julián Blanco.
1916 Nace el poeta Juan García Jiménez.
1917 Revuelta de Buenavista de Cuéllar.

- 1919 Fundación del Partido Obrero de Acapulco.
1920 Muerte de Silvestre G. Mariscal.
1920 Álvaro Obregón escapa a Guerrero.
1921 Publicación de *El Mañana Rojo*.
1922 Expedición de la Ley Agraria.
1923 Asesinato de Juan R. Escudero.
1925 Nace Guillermo Soberón Acevedo.
1926 Plan del Veladero.
1927 Inauguración de la carretera México-Acapulco.
1931 Nacimiento de Genaro Vázquez Rojas.
1933 Establecimiento del Partido Comunista Mexicano en Guerrero.
1938 Nace Lucio Cabañas Barrientos.
1941 Cae el gobernador Alberto F. Berber.
1946 Nacimiento de José Francisco Ruiz Massieu.
1954 Caída del gobernador Alejandro Gómez Maganda.
1959 Formación de la Asociación Cívica Guerrerense.
1960 Movimiento popular.
1961 Renuncia de Raúl Caballero Aburto a la gubernatura.
1971 Muerte del gobernador Caritino Maldonado Pérez.
1972 Muere Genaro Vázquez Rojas.
1974 Muerte de Lucio Cabañas Barrientos.
1975 Se inicia el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa.
1981 Alejandro Cervantes Delgado ocupa la gubernatura.
1987 Se inicia el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu.
1994 Asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.
1995 Matanza de campesinos en Aguas Blancas.
1996 Rubén Figueroa Alcocer pide licencia como gobernador.
1996 Aparece públicamente el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
1997 El huracán Paulina devasta parte de Acapulco.

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

Hay una asimetría entre la importancia del estado de Guerrero como escenario de acontecimientos históricos significativos, a nivel nacional y local, y la escasez de trabajos sobre su historia. La entidad ha sido víctima de una historiografía asimilada al civismo y a la oratoria. La historia vista como el despliegue en el tiempo de los valores patrios, o en tanto santoral republicano y no como un objeto de reflexión, representa hasta la fecha la línea dominante.

Una posible causa de esta relativa carencia de materiales bibliográficos dedicados a Guerrero, aunque no la única, la constituyó, en la segunda mitad del siglo XIX y en buena parte del siglo XX, la ausencia de una intelectualidad guerrerense más o menos amplia que se ocupara de estudiar su estado y la falta de centros de investigación avocados a reunir, sistematizar y analizar la información sobre la materia. El monumental trabajo realizado por Alejandro W. Paucic es más una excepción que una tendencia.

En la historiografía de tema guerrerense han predominado dos enfoques que, a grandes rasgos, se podrían definir el uno como enciclopédico y el otro como apologético. En el primer caso, la narración histórica se incluye entre obras generales que se ocupan de la geografía, economía, administración pública, división municipal, monografías, costumbres y tradiciones, entre otros temas. En estos textos, el tratamiento de la historia ha sido más bien descriptivo. A pesar de esta limitación, se elaboraron obras útiles, como el *Diccionario geográfico, histórico y lingüístico del estado de Guerrero*, del general Héctor F. López, o la *Geografía del estado de Guerrero y síntesis histórica*, escrita por Amado González Dávila. En cambio, la historiografía apologética —que tiene como género predilecto el biográfico— ha resultado prolija.

En años recientes se han subsanado algunas de las lagunas de información sobre la historia del estado gracias a unos pocos trabajos emprendidos por la Universidad Autónoma de Guerrero y por el Instituto Guerrerense de la Cultura. A ellos se han sumado las aportaciones de investigadores independientes, entre los que destacan Moisés Ochoa

Campos, Edgar Pavía, Jaime Salazar Adame, Nicole Giron, Ian Jacobs y Peter Guardino, quienes han dotado a la historiografía de Guerrero de una metodología analítica. Alejándose intermitentemente de los paradigmas de la historiografía tradicional (la fecha, el héroe y el acto conmemorativo vistos como fines en sí mismos), abordaron nuevos temas y replantearon otros. Pero aun con estos esfuerzos, el conocimiento que se tiene de la historia de la entidad todavía es precario.

La bibliografía que comentamos a continuación trata de brindar un panorama lo más amplio posible de las fuentes impresas que permiten aproximarse a Guerrero. Está agrupada en los siguientes rubros: viajeros y cronistas, antropología y folclor, geografía, economía, literatura, memorias y biografías, historia y monografías y bibliografías.

I. VIAJEROS Y CRONISTAS

Diversos e importantes viajeros mexicanos y extranjeros recorrieron partes del sur durante el siglo XIX. El geógrafo alemán Alexander von Humboldt arribó al puerto de Acapulco en 1803 y dejó una invaluable descripción de sus características físicas y de sus posibilidades de navegación en su *Ensayo político sobre el reino de la Nueva España* (México, Porrúa, 1973).

Más adelante, en 1843, se publicó la edición príncipe de *La vida en México durante una residencia de dos años en este país* (México, Porrúa, 1967), epistolario de Frances Erskine Inglis de Calderón de la Barca, esposa del primer representante diplomático que envió España al México independiente. La marquesa Calderón de la Barca visitó las grutas de Cacahuamilpa y dejó un importante testimonio literario y un valioso cuadro de costumbres. También resulta interesante la descripción de estas formaciones geológicas y de su entorno, presentada por el mexicano Nicolás Pizarro en su novela *El monedero* (México, edición del autor, 1861).

Acapulco, Taxco y otras poblaciones fueron descritos por dos extranjeros y un nacional: el chileno Benjamín Vicuña Mackenna, el francés Julio Verne y el mexicano Manuel Rivera Cambas. Vicuña Mackenna viajó por Norteamérica cuando fue expatriado como consecuencia de una rebelión acaudillada por su padre. Hacia mediados de 1853, arribó al puerto de Acapulco para después dirigirse hacia la ciudad de

México. A su paso dejó importantes notas sobre la geografía y las costumbres guerrerenses. Observador cuidadoso, se percató en las *Páginas de mi diario durante tres años de viaje: 1853-1854-1855* (Santiago, Universidad de Chile, 1936) de la precariedad en que vivían las “clases bajas” de la región.

El novelista fantástico Julio Verne, quien, a diferencia del viajero chileno, nunca visitó México, hizo un alarde de imaginación y, apoyado en los relatos de Alexander von Humboldt y de Pierre François de Pagès, realizó un interesante recuento de la topografía y de la población en *Un drama en México. Los primeros navíos mexicanos* (México, Hexágono, s. f.). Escrito hacia 1850, narra la travesía imaginaria de dos barcos españoles que partieron de la isla de Guam y llegaron a Acapulco. Ya en territorio mexicano, sus personajes recorren el actual estado de Guerrero y llegan hasta el Popocatepetl después de pasar por Taxco y Cuernavaca.

Manuel Rivera Cambas, en su imprescindible *México pintoresco, artístico y monumental* (México, Reforma, 1880-1883), brinda información histórica y arquitectónica de numerosos poblados guerrerenses, entre los que se cuentan Taxco, Cacahuamilpa, Tepecoacuilco, Huitzucó, Cocolula, Acatempan, Teloloapan, Tixtla, Chilapa, Tlalpa, Zacatula, Chilpancingo, San Marcos, Ometepe, Atoyac y Zihuatanejo.

Para el siglo xx se tienen los testimonios impresos de un científico, un ingeniero y un agente viajero: Vicente de Paúl Andrade, José R. Benítez y Pedro R. Hendrichs Pérez. Vicente de Paúl Andrade recorrió el trayecto México-Chilapa y en “Un viaje a Chilapa leído en la sesión del 22 de abril de 1911” (en *Boletín del Comité Nacional Mexicano de la Alianza Científica Universal*, México, 1911) informa sobre Chilpancingo, Tixtla y otros poblados de la Montaña, así como de sus caminos. También se ocupa de éstos el texto de Benítez, *Guía histórica y descriptiva de la carretera México-Acapulco* (México, Cultura, 1928), que es importante por el esmero en la presentación de los datos, la gran cantidad de lugares de los que habla y por tratarse del testimonio directo de uno de los constructores de la nueva vía de comunicación. El libro de Hendrichs Pérez, *Por tierras ignotas. Viajes y observaciones por la región del río Balsas* (México, Cultura, 1946), destaca por la información arqueológica que recogió en varios puntos del litoral del río.

II. ANTROPOLOGÍA Y FOLCLOR

En 1958, Gonzalo Aguirre Beltrán publicó *Cuijla: esbozo etnográfico de un pueblo negro* (México, Fondo de Cultura Económica, 1974), un clásico de la antropología mexicana que estudia Cuajinicuilapa, lugar habitado por población negra que arribó durante la época colonial y que en varios siglos ha sufrido un proceso de mestizaje y ha influido en las pautas culturales de otros pobladores del país. También en este campo, aunque con proyección hacia otros temas y espacios, en 1984 se celebró en Chilpancingo el Primer Coloquio de Antropología y Etnohistoria del Estado de Guerrero, cuyos trabajos fueron publicados con el título de *Arqueología y etnohistoria del estado de Guerrero* (México, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Gobierno del Estado de Guerrero, 1986), libro importante que, entre otros muchos temas, enumera y analiza las exploraciones arqueológicas en la entidad, la relación de los hallazgos con otras zonas mesoamericanas, los grupos indígenas durante la Colonia, la toponimia y las lenguas habladas en el territorio.

En el campo de la cultura popular resulta interesante la consulta de los artículos de Ignacio Manuel Altamirano editados bajo el título *Paisajes y leyendas. Tradiciones y costumbres de México* (Acapulco, H. Ayuntamiento Constitucional, 1984). El texto contiene descripciones de las festividades religiosas nacionales y un capítulo sobre la celebración de la Semana Santa en Tixtla. Por otra parte, Celedonio Serrano reunió en *Coplas populares de Guerrero* (México, Libros de México, 1972) información sobre los trovadores guerrerenses y acerca de las temáticas de las coplas que todavía se cantan en el estado.

III. GEOGRAFÍA

Esta disciplina es una de las mejor tratadas en la bibliografía de tema guerrerense desde el momento mismo en que el erudito porfiriano Alfonso Luis Velasco se dio a la labor de compendiar información sobre los estados de la República. Su *Geografía y estadística del estado de Guerrero* (México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1892) brinda información sobre la hidrografía, la orografía, el clima,

los recursos naturales, la flora y sus usos. También por esa época, Leopoldo Viramontes publicó la *Cartilla geográfica de Guerrero* (Chilpancingo, Imprenta del Gobierno en Palacio, 1893), texto de divulgación que tiene la virtud de agrupar la información por distritos.

A mediados del siglo xx aparecieron los compendios geográficos e históricos del ex gobernador Héctor F. López (*Diccionario geográfico, histórico y lingüístico del estado de Guerrero*, México, Pluma y Lápiz, 1942) y de Amado González Dávila (*Geografía del estado de Guerrero y síntesis histórica*, México, Quetzalcóatl, 1959). Más recientemente, Heriberto García Rivas publicó su *Diccionario Guerrero. Enciclopedia regional* (México, Fernández Editores, 1974), y Raúl Luna Mayani la *Geografía moderna del estado de Guerrero* (Ayutla de los Libres, Kotzaltzin, 1976).

De la mayor relevancia fue el inmenso acopio de información geográfica, antropológica e histórica realizado por el ingeniero yugoslavo Alejandro W. Paucic, recogida muy escasamente en dos obras póstumas: *Geografía general del estado de Guerrero* (Chilpancingo, Fonapas Guerrero, 1980) y *Geografía histórica del estado de Guerrero* (Acapulco, H. Ayuntamiento Constitucional, 1980). El primero de estos libros da razón de las regiones guerrerenses y de sus recursos naturales. El otro agrupa 35 mapas, elaborados por el propio Paucic, que muestran las provincias tributarias de México-Tenochtitlan, las encomiendas y repartimientos que hubo en el sur, y la división municipal de Guerrero al momento de su fundación.

Esperanza Figueroa de Cotin se apoyó en el Archivo de Estudios Geográficos e Históricos del Estado de Guerrero, formado por Paucic, para elaborar su vistoso *Atlas geográfico e histórico del estado de Guerrero* (México, Chilpancingo, Fonapas Guerrero/Gobierno del estado de Guerrero, 1980), que versa sobre la geografía física y humana y la historia del territorio hasta el momento de la constitución de la entidad e incluye una bibliografía especializada, así como numerosos mapas.

IV. ECONOMÍA

Benjamín Retchkiman K. publicó *Recursos y problemas económicos de la costa de Guerrero* (México, s. e., 1948), y Moisés T. de la Peña, *Guerrero económico* (Chilpancingo, Gobierno del estado de Guerrero,

1949). El primero analizó la política fiscal por la influencia que ejerció en la economía costera. De la Peña reunió valiosos datos sobre la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, el turismo, el crédito y la hacienda pública guerrerenses. Por esas fechas, el ex gobernador Rafael Catalán Calvo publicó *Problemas de Guerrero* (Chilpancingo, Gobierno del estado de Guerrero/Instituto Guerrerense de la Cultura, 1986).

Moisés Ochoa Campos enunció los principales rasgos económicos de la entidad en *Guerrero: análisis de un estado problema* (México, Trillas, 1964); Sabás Alarcón Robledo estudió las posibilidades de desarrollo en *Estado de Guerrero. Cuestiones económicas* (México, Revista Económica, 1967); Beatriz Hernández García expuso a grandes rasgos la situación de la entidad en *Estado de Guerrero* (México, Secretaría de Educación Pública, 1968). Manuel Torres, Luis Méndez y Jorge Arcila, en *La estructura económica del estado de Guerrero* (Chilpancingo, Universidad Autónoma de Guerrero, 1983), analizaron los sectores económicos y su relación con la economía nacional, y apoyaron su exposición con un amplio material estadístico. Alba Teresa Estrada Castañón hizo un buen esfuerzo de síntesis de la economía y la política guerrerenses recientes en *Guerrero: sociedad, economía, política, cultura* (México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1994).

V. LITERATURA

En este campo se cuenta con la edición de las obras completas de Ignacio Manuel Altamirano (México, SEP, 1986-1993), coordinada por Nicole Giron; el libro de Elena Poniatowska, *Hasta no verte, Jesús mío* (México, Era, 1969), apoyado en el testimonio de Jesusa Palancares, quien participó en acontecimientos de la Revolución de 1910 sucedidos en Chilpancingo, y la compilación de Francisco Vidal Duarte, titulada *Cuentos fantásticos y campiranos de Guerrero* (Chilpancingo, Instituto Guerrerense de la Cultura, 1984). La guerrilla de Lucio Cabañas fue narrada en la novela de Carlos Montemayor, *Guerra en el paraíso* (México, Diana, 1990).

VI. MEMORIAS Y BIOGRAFÍAS

Alejandro Martínez Carvajal, en *Memorias de la Revolución en Guerrero* (Acapulco, H. Ayuntamiento Constitucional, 1983), presentó las memorias del general Silvestre G. Mariscal, recopiladas por una de sus hijas. Por su parte, la *Autobiografía* de Benita Galeana (México, Imprenta Mels, 1940) resulta un texto útil para estudiar la historia social y política guerrerense, aunque su aparición fue un tanto prematura, pues la autora, una de las primeras militantes comunistas que hubo en la entidad, vivió muchas décadas más.

José María Lafragua, el prominente liberal y ministro de Relaciones Exteriores del presidente Juárez, abundó en detalles sobre la detención y el fusilamiento de Guerrero en *Vicente Guerrero: el mártir de Cuilapam* (México, SEP, 1946), en tanto que Carlos Alvear Acevedo realizó una apología de Hermenegildo Galeana en *Galeana* (México, Jus, 1958). Herminio Chávez Guerrero escribió su *Ignacio Manuel Altamirano* (México, Instituto Guerrerense de la Cultura, 1985), también biografiado por Nicole Giron, quien publicó una parte de la vida del intelectual tixtleco en *Ignacio Manuel Altamirano en Toluca* (Toluca, Instituto Mexiquense de la Cultura/Instituto Mora/Instituto Guerrerense de la Cultura, 1993). Alejandro Martínez Carvajal hizo *Juan Escudero y Amadeo Vidales* (México, Revolución, 1961), biografía política de los líderes agraristas surianos, y Francisco A. Gomezjara, en *María de la O y Benita Galeana: precursoras del feminismo socialista en Guerrero* (Chilpancingo, UAG, 1982), biografió a las famosas luchadoras sociales.

VII. HISTORIA

Entre las revisiones históricas generales predomina el enfoque político, como lo muestran los libros de Luis Guevara Ramírez, *Síntesis histórica del estado de Guerrero* (México, Gráfica Cervantina, 1959), y de Moisés Ochoa Campos, *Breve historia del estado de Guerrero* (México, Porrúa, 1968). Aunque ambos se inscriben dentro de la historia patria, el segundo posee una información más vasta y diversa. Ochoa Campos fue uno de los historiadores guerrerenses más importantes y profesionales. Cuando escribió dicho libro, que trata de la historia guerrerense,

se desde la época precolombina hasta el año de 1968, ocupaba la presidencia de la sección de Historia de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

Después de estas historias generales pioneras, en la década de 1980 aparecieron una monografía colectiva sobre temas varios, una compilación de textos y otra síntesis histórica. El primer caso es el del libro de Francisco Pérez Arce, Álvaro López Miramontes, Roberto Cervantes Delgado, Nicole Giron, Gerald L. McGowan, Ignacio Martínez Rivera, Gabino Olea Campos, Rogelio Vizcaíno, Paco Ignacio Taibo II y Cayetano Reyes, *Ensayos para la historia del estado de Guerrero* (Chilpancingo, Instituto Guerrerense de la Cultura, 1985). Allí se trata la historiografía guerrerense, sobre los viajeros, caudillos y caciques decimonónicos, los conflictos entre Juárez y Altamirano, la Revolución de 1910 en la Costa Grande, el escuderismo y sus secuelas.

Los libros de Carlos Illades (*Guerrero: textos de su historia*, México, Instituto Mora/Gobierno del estado de Guerrero, 1989) y Carlos Illades y Martha Ortega (*Guerrero: una historia compartida*, México, Instituto Mora/Gobierno del estado de Guerrero, 1989) agruparon materiales impresos, diseminados en las bibliotecas guerrerenses y de la ciudad de México, y los hicieron accesibles a un público amplio, no especializado. En ambos se traza un panorama histórico que va de las reformas borbónicas a la formación del Estado posrevolucionario, en el que se busca rescatar la dimensión económica y social de la historia. No obstante, la historia política domina la escena.

Entre las investigaciones arqueológicas más importantes sobre el pasado precolombino en territorio guerrerense se encuentran la de Jaime Litvak King (*Cibuatlán y Tepecoacuilco. Provincias tributarias de México en el siglo XVI*, México, UNAM, 1971) y la de Paul Schmidt Schoenberg ("Archeological Excavations at La Cueva, Chilpancingo, Gro., México", tesis doctoral en arqueología, Nueva Orleans, Tulane University, 1976).

Después de los trabajos pioneros de Gonzalo Aguirre Beltrán sobre la población negra de la Costa Chica, el avance en el conocimiento de la historia colonial engrosó con las investigaciones emprendidas por el historiador guerrerense Edgar Pavía, que abrieron al conocimiento la historia de la encomienda en algunos pueblos de la Montaña de Guerrero ("Theatro Americano y la provincia de Tlappan", en *Arqueología y etnohistoria del estado de Guerrero*), y, muy señaladamente,

con los estudios de Danièle Dehouve sobre los indígenas durante el virreinato (*Entre el caimán y el jaguar. Los pueblos indios de Guerrero*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados en Antropología Social/Instituto Nacional Indigenista, 1994).

Es más prolija la bibliografía sobre el siglo XIX que la que se ocupa de las épocas históricas precedentes. Aunque meramente descriptivos, resultan útiles los libros de Miguel Domínguez, *La erección del estado de Guerrero. Antecedentes históricos* (México, SEP, 1949), y de Leopoldo Carranco Cardoso, *Acciones militares en el estado de Guerrero* (México, Publicaciones Especiales del Primer Congreso Nacional de Historia para el Estudio de la Guerra de Intervención, 1963).

Sobre la formación de la entidad y su vinculación con la historia nacional, recientemente se publicó el libro de Peter F. Guardino, *Peasants, Politics, and the Formation of Mexico's National State. Guerrero, 1800-1857* (California, Stanford University Press, 1996). Acerca del cacicazgo de Juan N. Álvarez, se cuenta con el texto de Fernando Díaz Díaz, *Caudillos y caciques* (México, El Colegio de México, 1972). En *Las rebeliones campesinas en México, 1819-1906* (México, Siglo XXI, 1980) Leticia Reina dedica un capítulo al estado de Guerrero, en el que se muestra la intermediación ejercida por Álvarez entre los campesinos indígenas y las autoridades nacionales.

Las revueltas durante el porfiriato fueron estudiadas por Jaime Salazar Adame ("Movimientos populares durante el porfiriato en el estado de Guerrero, 1885-1891", en *Porfirio Díaz frente al descontento popular regional*, México, Universidad Iberoamericana, 1986), y las vías de comunicación y los transportes, por Eduardo Miranda Arrieta, *Economía y comunicaciones en el estado de Guerrero* (Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1994). Miranda hizo con José Alfredo Uribe Salas *Las utopías del Balsas. Historias de una propuesta regional de comunicación interoceánica* (Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1995).

La Revolución de 1910 es uno de los periodos que más ha ocupado la atención de historiadores, intelectuales, políticos y de la población en general. Hasta hace poco tiempo constituía uno de los sucesos de referencia obligada en el discurso patrio, y los gobernantes en turno apelaban a uno u otro prócer del panteón revolucionario para legitimar su conducta pública. Varias generaciones de estudiosos han escrito muchas páginas sobre ella, han modificado sus paradigmas

explicativos y han ensanchado el cúmulo de testimonios y fuentes. Hace cinco o seis décadas resaltaban su impronta campesina y su cariz radical; hace dos, la diversidad de su componente social de acuerdo con las regiones del país y con el papel desempeñado por las élites locales. En los últimos lustros se elaboraron nuevas síntesis, que rescatan algunas de las tesis de las primeras interpretaciones y asimilan la diversidad local destacada por los estudios posteriores.

La historiografía sobre la Revolución en Guerrero también ha crecido en volumen y mejorado en calidad. Se pasó de versiones como las de Vicente Fuentes Díaz, *La Revolución de 1910 en el estado de Guerrero* (México, Nacional Impresora, 1960), y José Manuel López Victoria, *Historia de la Revolución en Guerrero* (Chilpancingo, Instituto Guerrerense de la Cultura, 1985), a visiones más ricas sobre el proceso en su conjunto y la participación de los actores. Estos planteamientos toman como referencia algunos de los hilos desatados en el siglo XIX, subrayan la diversidad regional y resaltan la especificidad de las motivaciones y demandas de los protagonistas directos, así como su nexos con las corrientes sociales y políticas que se desarrollaban en otros espacios geográficos o a nivel nacional.

Trabajos como los de Ian Jacobs (*La Revolución mexicana en Guerrero. Una revuelta de los rancharos*, México, Era, 1990), además de los de Marcelo González Bustos (*El general Jesús H. Salgado y el movimiento zapatista en Guerrero*, Chilpancingo, UAG, 1983) y Renato Ravelo Lecuona (*La revolución zapatista de Guerrero*, Chilpancingo, UAG, 1990) desmitificaron el papel revolucionario asignado por la historiografía oficial a la familia Figueroa, a la vez que permitieron conocer la pluralidad de fuerzas y movimientos sociales y políticos que tuvieron presencia durante el periodo armado de la Revolución.

Las luchas populares de la década de 1920, en particular las emprendidas alrededor del Partido Obrero de Acapulco, historiadas originalmente por Mario Gill ("Los Escudero de Acapulco", en *Historia Mexicana*, 3:4, octubre-diciembre de 1953), se conocen ahora con más detalle merced a los trabajos de Rogelio Vizcaíno y Paco Ignacio Taibo II (*Las dos muertes de Juan R. Escudero. La comuna de Acapulco, 1918-1923*, México, Joaquín Mortiz, 1990), así como por el de Cayetano Reyes ("El jefe agrarista costeño Valente de la Cruz", en *Ensayos para la historia del estado de Guerrero*). Acerca de la historia agraria guerrerense, se encuentran los libros de Jaime Salazar Adame, Renato

Ravelo, Daniel Molina Álvarez y Tomás Bustamante Álvarez, *Historia de la cuestión agraria mexicana. Estado de Guerrero, 1867-1940* (México, Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México/Gobierno del estado de Guerrero/UAG, 1987), y de Francisco A. Gomezjara, *Bonapartismo y lucha campesina en la Costa Grande de Guerrero* (México, Posada, 1979).

VIII. MONOGRAFÍAS Y BIBLIOGRAFÍAS

Hay monografías de poblados guerrerenses: J. de Jesús Heredia Villareal, *Monografía de Arcelia, Gro.* (México, Ediciones e Impresiones Rodas, 1966); Epigmenio López Barroso, *Diccionario geográfico, histórico y estadístico del distrito de Abasolo, Guerrero. Hechos históricos propios de esa región* (México, Botas, 1967); Angélica Gutiérrez y Salgado y Héctor Rodríguez y Morales, *Chilpancingo ayer y hoy* (Chilpancingo, Instituto Guerrerense de la Cultura, 1987), y Francisco Vidal Duarte, *San Luis Acatlán* (Chilpancingo, Instituto Guerrerense de la Cultura, 1987).

Sobre temas económicos, sociales, antropológicos e históricos se han reunido varias bibliografías más o menos amplias: Centro de Investigaciones Sociales, *Bibliografía Guerrero. 500 fuentes para el estudio económico y social del estado* (Chilpancingo, UAG, 1975); Anselmo Marino Flores, Juan Carlos Catalán Blanco y Roberto Cervantes Delgado, *Bibliografía antropológica del estado de Guerrero* (Chilpancingo, Gobierno del estado de Guerrero/Instituto Guerrerense de la Cultura, 1987); Carlos Illades, "Textos básicos sobre el estado de Guerrero" (*Secuencia*, 10, enero-abril de 1988), y Juan Carlos Catalán Blanco, "Una visión de la historiografía en Guerrero/1969-1988", en *Memoria del simposio de historiografía mexicanista* (México, Comité Mexicano de Ciencias Históricas/UNAM/Gobierno del Estado de Morelos, 1990).

ÍNDICE

<i>Presentación</i>	7
<i>Llamada general</i>	9
<i>Prefacio</i>	13
I. <i>El sur antes de ser Guerrero</i>	15
Época prehispánica	15
El Virreinato	20
La Guerra de Independencia	29
II. <i>Los procesos políticos</i>	40
La nueva entidad	42
Vida y muerte de un cacicazgo	49
La centralización porfiriana	56
III. <i>La movilización popular</i>	62
El campo	64
Rebeliones rurales	69
La Revolución	74
IV. <i>Los índices del atraso</i>	93
Territorio y comunicaciones	95
Población	102
Economía	105
Educación	115
V. <i>El último tramo</i>	119
La posrevolución	120
El movimiento de 1960	126
El pasado reciente	131
<i>Cronología</i>	141
<i>Bibliografía comentada</i>	147

Este libro se terminó de imprimir en septiembre
de 2000 en los talleres de Impresora
y Encuadernadora Progreso, S. A. de C. V.
(IEPSA), Calz. de San Lorenzo, 244; 09830
México, D. F. En su composición se usaron
tipos Garamond de 12:14 y 11:13 puntos.
La edición consta de 3 000 ejemplares.

(viene de la primera solapa)

estado, propició una relación muy tirante entre las fuerzas políticas locales y los personeros del régimen, por lo general carentes de bases de apoyo y dependientes de la voluntad del general oaxaqueño. Las revueltas de Neri (1893), de Rafael Castillo Calderón (1905) y de Francisco y Ambrosio Figueroa (1910) expresaron esa tensión irresuelta.

Serie Breves Historias de los Estados de la República Mexicana

María Teresa Jarquín y Carlos Herrejón
Breve historia del Estado de México

Carlos Martínez Assad
Breve historia de Tabasco

José María Muriá
Breve historia de Jalisco

Carlos Justo Sierra
Breve historia de Campeche

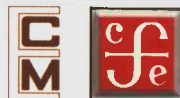
José Miguel Romero
Breve historia de Colima

Jesús Flores Olague, Mercedes de Vega, Sandra Kuntz Ficker y Laura del Alizal
Breve historia de Zacatecas

Beatriz Rojas et al.
Breve historia de Aguascalientes

En la portada: Bahía de Acapulco, 1840, litografía de Villeneuve, tomada de Litografía y grabado en el México del siglo XIX, tomo I, México, Inversora Bursátil, 1993.

El Colegio de México
Fideicomiso Historia de las Américas
Fondo de Cultura Económica



www.fce.com.mx



9 789681 659752